C O R T E S

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CECILIO VALVERDE MAZUELAS

Sesión Plenaria núm. 117

celebrada el miércoles, 23 de septiembre de 1981

ORDEN DEL DIA (continuación)

Peticiones de creación de Comisiones especiales de investigación:

Propuesta del Gobierno de creación de una Comisión especial de investigación conjunta Congreso de los Diputados-Senado sobre los hechos derivados del proceso tóxico, debido al consumo de aceite adulterado y al objeto de comercialización clandestina («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 104, de 21 de septiembre de 1981).

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados (continuación):

- De la Comisión de Justicia e Interior, en relación con el proyecto de ley por el que se aprueban determinadas medidas sobre régimen jurídico de las Corporaciones locales. (Se tramita por el procedimiento de urgencia.) («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 192, de 22 de septiembre de 1981.)
- De la Comisión de Presidencia y Ordenación General de la Administración Pública, en relación con el proyecto de ley por el que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas. (Se tramita por el procedimiento de urgencia.) («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 193, de 21 de septiembre de 1981.)

Proposiciones no de ley:

- De don Gregorio Toledo Rodríguez y otros señores senadores, sobre coste de la insularidad («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 104, de 21 de septiembre de 1981).

— Del Grupo Socialista, sobre necesidades de un estudio de descentralización administrativa, en relación con la ciudad de Cartagena y su campo («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 89, de 13 de abril de 1981).

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones», número 118, de 24 de septiembre de 1981.)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cinco y diez minutos de la tarde.

Continúa el orden del día.

Peticiones de creación de Comisiones especiales de investigación:

	Página
Propuesta del Gobierno de creación de una Comisión especial de investigación conjunta Congreso de los Diputados-Senado sobre los hechos derivados del proceso tóxico, debido al consumo de aceite adulterado y objeto de comercialización clandestina. . .	5862
<i>El señor Secretario (Casals Parral) da lectura a la comunicación del Gobierno.</i>	
<i>A continuación, el señor Presidente informa del procedimiento a seguir para el debate.</i>	
<i>Seguidamente interviene el señor Presidente del Gobierno (Calvo-Sotelo y Bustelo).</i>	
<i>En turno de portavoces usan de la palabra los señores Bosque Hita (Grupo Mixto), Unzueta Uzcanga (Grupo de Senadores Vascos), Andréu Abelló (Grupo de Catalunya, Democracia i Socialisme), Vallejo Rodríguez (Grupo Socialista Andaluz), Laborda Martín (Grupo Parlamentario Socialista) y Villodres García (Grupo Unión de Centro Democrático).</i>	
<i>A continuación interviene el señor Presidente del Gobierno (Calvo-Sotelo y Bustelo).</i>	
<i>A pregunta del señor Presidente, la Cámara aprueba, por asentimiento, la constitución de una Comisión de investigación conjunta Congreso de los Diputados-Senado, en los términos de la propuesta del Gobierno, contenida en la comunicación de fecha 31 de agosto pasado.</i>	
<i>El señor Presidente manifiesta que, de acuerdo con la Mesa y con la audiencia de la Junta de Portavoces, procederá, conjuntamente con la</i>	

Presidencia del Congreso de los Diputados, a redactar las disposiciones procedentes para articular la composición de la Comisión especial conjunta que ha sido aprobada.

Dictámenes de las Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados (continuación):

	Página
De la Comisión de Justicia e Interior, en relación con el proyecto de ley por el que se aprueban determinadas medidas sobre régimen jurídico de las Corporaciones locales (se tramita por el procedimiento de urgencia) . .	5874
<i>El señor Sánchez Reus expone los fundamentos del dictamen.</i>	
<i>A continuación usa de la palabra el señor Irizar Ortega (Grupo Socialista del Senado).</i>	
<i>Se entra en el articulado.</i>	
	Página
Artículos 1.º y 2.º	5875
<i>No habiendo sido objeto de votos particulares, a pregunta del señor Presidente, fueron aprobados por asentimiento de la Cámara.</i>	
	Página
Artículo 3.º	5875
<i>El señor Irizar Ortega defiende el voto particular formulado por el Grupo Socialista, en correspondencia con la enmienda número 18, que afecta al apartado 1, letra e), y que postula su supresión.</i>	
<i>A continuación usa de la palabra el señor Sánchez Reus (Grupo de Unión de Centro Democrático).</i>	
<i>Seguidamente, el señor Lizón Giner defiende el voto particular del Grupo Socialista que afecta también al apartado 1, letra f), postulando su supresión.</i>	
<i>A continuación, y en turno de portavoces, usan de</i>	

la palabra el señor Nadal Company, el señor Cabrera Bazán, el señor Irizar Ortega y el señor Sánchez Reus.

Para alusiones interviene el señor Nadal Company, a quien contesta el señor Presidente.

Sometida a votación la enmienda del Grupo Socialista número 18, fue rechazada por 57 votos favorables, 78 contrarios y seis abstenciones.

Puesta a votación la enmienda número 19, también del Grupo Socialista, fue rechazada por 57 votos a favor, 77 en contra y siete abstenciones.

Sometido a votación el texto que para el artículo 3.º propone el dictamen de la Comisión con excepción de las letras e) y f) del apartado 1.º, fue aprobado por asentimiento de la Cámara.

Puestos a votación los textos de las letras e) y f) del apartado 1.º del artículo 3.º del dictamen, fueron aprobadas por 84 votos a favor y 57 en contra.

Página

Artículo 4.º 5880

El señor Irizar Ortega defiende el voto particular formulado por el Grupo Socialista, correspondiente a la enmienda número 20, que afecta al apartado 1, letra a).

A continuación interviene el señor Sánchez Reus.

Fue rechazado el voto particular del Grupo Socialista por 56 votos a favor y 73 en contra.

Sometido a votación el artículo 4.º, con excepción del punto a) del apartado 1.º, del artículo 4.º, fue aprobado por 75 votos a favor y 54 abstenciones.

Puesto a votación el punto a) del apartado 1.º del artículo 4.º, del dictamen, fue aprobado por 73 votos a favor y 56 en contra.

Página

Artículo 5.º 5882

El señor Lizón Giner retira el voto particular formulado por el Grupo Socialista, enmienda número 22, que postula la supresión de la letra d) del apartado 1.º.

El señor Zavala Alcibar defiende el voto particular número 2, que afecta al apartado 2 del artículo 5.º.

Seguidamente usa de la palabra el señor Sánchez Reus, quien da lectura a una nueva redacción del apartado 2.º.

Interviene el señor Presidente, quien somete a votación el voto particular del señor Zavala Alcibar en la nueva redacción que ha dado lectura el señor Sánchez Reus, de conformidad con todos los portavoces de la Cámara.

A pregunta del señor Presidente, fue aprobado, por asentimiento de la Cámara, el voto particular del senador señor Zavala Alcibar, en la redacción dada al mismo por el señor Sánchez Reus, introduciéndose esta modificación en el apartado 2 del artículo 5.º del dictamen.

Por asentimiento de la Cámara, fue aprobado el artículo 5.º del dictamen, con la modificación propuesta.

Página

Artículo 6.º 5884

El señor Lizón Giner defiende el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 23, que afecta al apartado 2.

A continuación usa de la palabra el señor Sánchez Reus.

Se rechaza el voto particular del Grupo Socialista por 51 votos a favor y 79 en contra.

Sometido a votación el apartado 1 del artículo 6.º del texto del dictamen, fue aprobado por asentimiento de la Cámara.

Puesto a votación el apartado 2 del texto del dictamen, fue aprobado por 77 votos a favor y 51 en contra.

Página

Artículo 7.º 5886

El señor Sánchez Reus da lectura a la redacción exacta del artículo 7.º, toda vez que fue admitida una enmienda del senador señor Fombuena, que modificaba el texto. A continuación, y para aclaraciones, intervienen el señor Fombuena Escudero y el señor Presidente, quien da lectura al texto que figura en el dictamen, añadiendo «en la primera sesión que se celebre».

Con esta modificación fue aprobado el artículo 7.º, por asentimiento de la Cámara.

Página

Artículo 8.º 5887

El señor Presidente informa que el señor Zavala Alcibar ya defendió sus votos particulares que afectan a los apartados 2 y 4, respectivamente.

A continuación interviene el señor Sánchez Reus. Se rechaza el voto particular del señor Zavala Alcibar al número 2 del artículo 8.º, por 7 votos a favor, 70 en contra y 54 abstenciones.

Asimismo fue rechazado el voto particular del señor Zavala Alcibar al número 4 del artículo 8.º por siete votos favorables, 71 en contra y 54 abstenciones.

Por asentimiento de la Cámara fueron aprobados los números 1 y 3 del dictamen de la Comisión.

Sometidos a votación conjunta los números 2 y 4 del texto del dictamen, fueron aprobados por 124 votos a favor y siete en contra.

Página

Artículo 9.º 5888

No habiendo sido objeto de votos particulares, fue aprobado, a pregunta del señor Presidente, por asentimiento de la Cámara.

A continuación, el señor Irizar Ortega defiende un voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 24, que postula la adición de un nuevo artículo, que sería el 9.º bis.

Seguidamente interviene el señor Villar Arregui.

Sometido a votación, fue rechazado el voto particular por 54 votos a favor, 75 en contra y dos abstenciones.

A continuación, el señor Lizón Giner retira el voto particular formulado por el Grupo Socialista, correspondiente a su enmienda número 25, que propone la adición de un nuevo artículo.

Página

Artículo 10. 5889

El señor Irizar Ortega defiende el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 26, que afecta al párrafo 2 del apartado 3.

A continuación interviene el señor Villar Arregui.

Se rechaza el voto particular del Grupo Socialista, por 56 votos a favor, 70 en contra y cinco abstenciones.

Sometido a votación el texto del dictamen, fue aprobado por 75 votos a favor y 56 en contra.

Página

Artículo 11. 5890

Retirado el voto particular formulado por el Grupo Socialista, fue sometido a votación el texto

del dictamen del artículo 11, siendo aprobado por 75 votos a favor y 56 en contra.

Página

Artículos 12 a 16. 5890

Por asentimiento de la Cámara, a pregunta del señor Presidente, fueron aprobados conforme al dictamen de la Comisión.

Página

Artículo 17. 5890

El señor Lizón Giner retira el voto particular formulado por el Grupo Socialista, enmienda número 28, que afecta al apartado 1.

Sometido a votación el texto del dictamen de la Comisión, fue aprobado por 68 votos a favor y 59 abstenciones.

A continuación, el señor Irizar Ortega defiende el voto particular, enmienda número 30, que propone la adición de un nuevo artículo, que sería el 17 bis.

Seguidamente interviene el señor Villar Arregui.

Se rechaza el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 30, por 57 votos a favor, 67 en contra y una abstención.

Página

Artículos 18 a 26, Disposiciones transitorias 1.ª a 6.ª, adicionales 1.ª y 2.ª, finales 1.ª a 8.ª y derogatoria 5891

No habiendo sido objeto de votos particulares, a pregunta del señor Presidente, fueron aprobados los textos del dictamen de la Comisión.

El señor Presidente manifiesta que, concluido el debate sobre este proyecto de ley, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas propuestas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que éste se pronuncie sobre las mismas.

Página

De la Comisión de Presidencia del Gobierno y Ordenación General de la Administración Pública, en relación con el proyecto de ley por el que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas 5892

El señor Prat García expone los fundamentos del dictamen.

El señor Laborda Martín interviene para formular una enmienda «in voce», a quien contesta el señor Presidente.

En turno de portavoces intervienen los señores Bosque Hita (Grupo Mixto), Subirats Piñana (Grupo de Catalunya, Democracia i Socialisme), Laborda Martín (Grupo Socialista del Senado) e Iglesias Casado (Grupo Unión de Centro Democrático).

Se entra en el articulado.

Página

Artículos 1.º y 2.º 5896

No habiendo sido objeto de votos particulares, a pregunta del señor Presidente, fueron aprobados por asentimiento conforme al texto del dictamen.

Página

Artículos 3.º, 4.º y 5.º 5896

El señor Presidente informa que antes de considerar el voto particular del senador señor Rahola, que afecta al apartado 1 del artículo 3.º, desea manifestar que va a ser modificado porque en tiempo y forma se ha presentado escrito por todos los portavoces, en el que dan por introducido en dicho apartado 1 del artículo 3.º, después de la palabra «provincial», la expresión «o insular». A continuación da lectura al texto definitivo del dictamen.

El señor Rahola de Espona defiende a continuación las tres enmiendas que tiene presentadas, retirando la enmienda al apartado 1 del artículo 3.

A continuación interviene el señor Ferrer Profittos.

Sometidos a votación los textos que para los artículos 3.º, 4.º y 5.º propone el dictamen de la Comisión, fueron aprobados por 113 votos a favor y una abstención. El 3.º con la introducción de la modificación acordada por el Pleno en virtud del acuerdo de todos los grupos parlamentarios.

Página

Artículos 6.º a 10, Disposición derogatoria y Disposición adicional 5898

No habiendo sido objeto de votos particulares, fueron aprobadas por asentimiento de la Cámara.

El señor Presidente informa que, concluido el debate, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas propuestas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que éste se pronuncie sobre las mismas.

A continuación, el señor Presidente informa a la Cámara de que la Comisión de Defensa se reunirá mañana jueves a las nueve y media de la mañana. Asimismo informa que ha sido presentado un escrito por todos los portavoces de los grupos parlamentarios, al que da lectura, relativo al informe de la Comisión especial de Emigración, referente a la investigación sobre vendimiadores españoles en Francia en la campaña de 1980, del que se dará mañana conocimiento al Pleno.

Se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión.

Proposiciones no de ley:

Página

De don Gregorio Toledo Rodríguez y otros señores senadores, sobre coste de la insularidad 5899

El señor Toledo Rodríguez interviene en defensa de la proposición no de ley.

A continuación usan de la palabra los señores De Armas García y Zaforteza Calvet.

Por asentimiento de la Cámara fue aprobada la proposición no de ley debatida.

Página

Del Grupo Socialista, sobre necesidad de un estudio de descentralización administrativa, en relación con la ciudad de Cartagena y su campo 5904

El señor Presidente informa a la Cámara que todos los señores senadores conocerán la rectificación que por escrito de fecha de ayer se produjo en cuanto al punto 2 de la parte dispositiva de la proposición no de ley, para que quedara redactado según el texto al que da lectura.

El señor Martínez Ovejero defiende la proposición no de ley.

A continuación usa de la palabra el señor Villodres García.

Seguidamente y para una cuestión de orden interviene el señor Laborda Martín, a quien contesta el señor Presidente.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista, fue rechazada por 38 votos a favor y 52 en contra.

A continuación, el señor Presidente informa a la Cámara del desarrollo final del Pleno que tendrá lugar mañana jueves a las diez.

Se levanta la sesión.

Eran las diez y veinte minutos de la noche.

Se reanuda la sesión a las cinco y diez minutos de la tarde.

PETICIONES DE CREACION DE COMISIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION: PROPUESTA DEL GOBIERNO DE CREACION DE UNA COMISION ESPECIAL DE INVESTIGACION CONJUNTA CONGRESO DE LOS DIPUTADOS-SENADO SOBRE LOS HECHOS DERIVADOS DEL PROCESO TOXICO, DEBIDO AL CONSUMO DE ACEITE ADULTERADO Y OBJETO DE COMERCIALIZACION CLANDESTINA

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Tal como fue anunciado ayer, comienza esta parte de la sesión con el punto sexto del orden del día: Peticiones de creación de Comisiones especiales de Investigación. Propuesta del Gobierno de creación de una Comisión especial de investigación conjunta Congreso de los Diputados-Senado sobre los hechos derivados del proceso tóxico, debido al consumo de aceite adulterado y objeto de comercialización clandestina. Fue publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, fecha 21 de septiembre de 1981.

El señor Secretario primero se servirá dar lectura a la comunicación o proposición del Gobierno.

El señor SECRETARIO PRIMERO (Casals Parral): «Tengo la honra de comunicar a V. E. que el Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros del pasado día 20, ha adoptado el Acuerdo, cuya certificación se acompaña, por el que se solicita, al amparo del artículo 76 de la Constitución y de lo dispuesto en el Reglamento de esa Cámara, la constitución de una Comisión

de encuesta conjunta con el Congreso de los Diputados, para la investigación de los hechos que se mencionan a continuación:

A partir del 1 de mayo del presente año en que se produce la hospitalización urgente de varios miembros de una familia en Torrejón de Ardoz y el fallecimiento de uno de ellos, la opinión pública española ha vivido con inquietud el desarrollo de un proceso tóxico debido al consumo de aceite adulterado y objeto de comercialización clandestina.

La gravedad del hecho, así como la trascendencia de la actividad delictiva que ha dado lugar a dicho proceso tóxico, conjuntamente con la preocupación que ha trascendido a toda la sociedad, motivan la presente petición de la constitución de la Comisión de Encuesta.

Parece indicado que, por los más elevados órganos de representación popular, se analicen los hechos y actividades realizadas dentro del área de sus competencias por la Administración Central del Estado, los Entes Autonómicos y Preautonómicos y las Corporaciones locales, así como las distintas actuaciones públicas y privadas relacionadas con este grave problema.

Dios guarde a V. E.

Madrid, 31 de agosto de 1981. El Ministro de la Presidencia.»

Y la comunicación adjunta dice lo siguiente: «Don Pío Cabanillas Gallas, Ministro de la Presidencia del Gobierno y Secretario del Consejo de Ministros.

Certifico: Que en el Acta de la reunión del Consejo de Ministros correspondiente al día veinte de agosto de mil novecientos ochenta y uno, figura se adoptó el siguiente Acuerdo:

Solicitar, al amparo del artículo 76 de la Constitución y de lo dispuesto en los respectivos Reglamentos de las Cámaras de las Cortes Generales, la constitución de una Comisión de encuesta conjunta de ambas Cámaras, para la investigación de los hechos derivados del proceso tóxico, debido al consumo de aceite adulterado y objeto de comercialización clandestina.»

Y para que conste, expido la presente Certificación en Madrid, a veinte de agosto de mil novecientos ochenta y uno.»

El señor PRESIDENTE: En consideración, efectivamente, a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución y ajustado al Reglamento provisional de esta Cámara en su artículo 47, punto 1,

la Mesa, oída la Junta de Portavoces, resolvió incluir en el orden del día de este Pleno el conocimiento por la Cámara, y en su caso aprobación por parte de la misma, de la comunicación del Gobierno, de que se ha dado lectura, mediante la siguiente tramitación: aparte de la presentación por el miembro del Gobierno, que seguidamente podrá pedir la palabra, habrá un turno a favor y uno en contra y las intervenciones potestativas, en su caso, solicitadas por los grupos parlamentarios a través de sus portavoces, cuyas intervenciones no deberán exceder de diez minutos.

Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Calvo-Sotelo y Bustelo): Señor Presidente, señorías, como acaba de leer el señor Secretario, el Consejo de Ministros en su reunión de 20 de agosto acordó solicitar de las Cortes Generales la creación de una Comisión conjunta de investigación, al amparo de lo previsto en el artículo 76 de la Constitución. Una Comisión de investigación para el seguimiento de las graves consecuencias de la intoxicación producida por el aceite de colza y para el seguimiento también de las medidas que se han suscitado, o que se suscitarán, en su remedio.

El Congreso, como SS. SS. saben, en sesión del 17 de septiembre, votó favorablemente esta propuesta. Ahora yo la repito ante esta Cámara y añado unas breves palabras de justificación.

Las Comisiones de investigación son unos instrumentos más de control del Ejecutivo por parte de las Cámaras. El Gobierno, al tomar la iniciativa de esta proposición, al abrir una Comisión de investigación, expresa su deseo de que el control parlamentario se ejerza en este tema de una manera rigurosa, eficaz y continuada en el tiempo. Los debates son necesarios, pero hay cuestiones que, por su complejidad, requieren de las Cámaras, además del debate, un esfuerzo más largo y sostenido.

El debate que ha tenido lugar en el Congreso y el Libro Blanco, que inmediatamente se pondrá a disposición de SS. SS., suponen, en este control del Ejecutivo por parte de las Cámaras, unos primeros pasos significativos, pero insuficientes. Por ello, y sin perjuicio de que la Administración continúe su programa para reorganizar y mejorar la estructura de sus servicios de inspección, su programa para asistir eficazmente a los enfermos

y atender en cuanto precisen a los afectados y familiares, sin perjuicio de que continúen en esa tarea, el Gobierno ha solicitado la colaboración de las Cámaras reunidas en Comisión conjunta de colaboración.

Que nadie vea en esta propuesta ninguna intención dilatoria. El Gobierno es el primer interesado en disponer, cuanto antes sea posible, de un informe realizado fuera de la órbita de sus propios servicios, de un informe que sitúe los hechos en un contexto y que formule unas conclusiones a las que luego pueda atenerse la acción de la Administración Pública.

Mi preocupación va en estos momentos más allá de los hechos políticos, más allá, incluso, de las Cortes Generales, para llegar a todos los afectados por la intoxicación. Son muchas las víctimas, como SS. SS. saben, son muchos los enfermos, son muchas también las personas que viven en una situación de inquietud y de angustia. El Gobierno quisiera llevar a todas estas personas la seguridad de que hará cuanto está en su mano, según las líneas acordadas ya en principio por el Congreso, para atenderlas y no, por supuesto, con ánimo de beneficencia, sino con ánimo de justicia.

Quiere también el Gobierno que todas estas personas sepan que propone la investigación completa de los hechos, desea la investigación completa de los hechos, porque no tiene nada que ocultar; que va a corregir las faltas y las insuficiencias que se van poniendo de manifiesto y que se han puesto de manifiesto ya.

Quiere, en definitiva, el Gobierno que los ciudadanos recuperen la confianza en las Administraciones públicas y piensen que a todo ello puede contribuir la creación de una Comisión conjunta de investigación.

Por eso el Gobierno espera que esta Cámara apruebe lo acordado el 20 de agosto último por el Consejo de Ministros, propuesta que yo ahora confirmo.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.)

¿Turnos en contra? (Pausa.)

¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Voy a repasar los nombres de los señores portavoces que han solicitado la palabra, que son los siguientes: senadores señores Bosque Hita, Un-

zueta Uzcanga, Andreu y Abelló, Vallejo Rodríguez, Beviá Pastor y Villodres García.

Volvemos a la ordenación primitiva como consecuencia de la incorporación de otro grupo de senadores, el Vasco, y vuelve a ser el primero el Grupo Mixto.

El senador señor Bosque Hita, por el Grupo Mixto, tiene la palabra.

El señor BOSQUE HITTA: Señor Presidente, señores Ministros del Gobierno, compañeros de la Cámara, me pide mi grupo en este momento que haga uso de la palabra en nombre del mismo por varias razones que posiblemente no sean importantes, pero que a nosotros sí que nos parece que debe quedar constancia de ellas en el Diario de Sesiones de la Cámara.

En primer lugar, nuestro grupo anota con satisfacción la presencia del señor Presidente del Gobierno, acompañado de un cierto número de Ministros, lo cual no es frecuente en la Cámara. Esta Cámara se encuentra en ocasiones algo así como adolecida de un sentimiento de olvido, de falta de utilización y de falta de consideración por parte de otras instituciones del Estado. Y lo dice nuestro Grupo Mixto, precisamente porque al no tener nosotros la serie de razones o de vinculaciones por parte de partidos políticos mayoritarios pueda haber para que esto sea así, incluido el propio partido que en estos momentos sustenta al Gobierno, estamos en las mejores condiciones de libertad para poder hacer notar la falta de valoración que hacia esta Cámara se tiene en todo momento. Y, en esta tarde, la presencia de tan distinguida representación del Gobierno nos parece que puede ser un principio de consideración hacia nuevas actividades, hacia nuevas consideraciones y hacia nuevos respetos hacia esta Cámara, institución fundamental dentro de nuestra Constitución.

En segundo lugar, nos parece que abrir en esta Cámara un segundo debate sobre el problema de los envenenamientos por el aceite de colza no creemos en nuestro grupo que sea oportuno, conveniente ni positivo. Todo cuanto podía decirse ha sido dicho ya, y todos lo hemos visto dentro de nuestra consideración de representantes del pueblo, con bastante escepticismo en cuanto a los argumentos y razones expuestos a lo largo de aquel debate, y también en la modestia de la representación que tenemos todos y cada uno de los que componemos el Grupo Mixto, en un contacto

bastante intenso con lo que es verdaderamente el sentir del pueblo. También nos parece que es importante decir que de este escepticismo ha participado, prácticamente, la inmensa totalidad de nuestro pueblo.

Es cierto que el debate trajo como consecuencia una serie de medidas concretas, positivas e importantes que, de alguna manera, vienen a paliar la tragedia que para muchos compatriotas ha significado este trágico hecho. Es cierto, también, que en este momento hemos podido contemplar cómo de manera inmediata, en días muy cercanos, una nueva situación conflictiva en un nuevo artículo alimenticio ha producido una reacciones inmediatas, rápidas. Afortunadamente, la intoxicación no era tan importante, ni trágica como la del aceite de colza, pero las reacciones de los organismos que tenían que participar en el control y seguimiento de cuantas anomalías en el planteamiento del suministro alimenticio pudieran plantearse, han sido rápidas, eficaces y, efectivamente, es producto de una disposición inmediata de responder a obligaciones contraídas por los organismos públicos.

¿Esto es un síntoma de esperanza de que en el futuro cualquier otra nueva situación va a encontrar un tratamiento tan rápido, un conocimiento tan rápido, una denuncia tan rápida y una adopción de medidas tan rápidas como las que nos han ocurrido con motivo de la infección por los moluscos? Nosotros creemos y esperamos que esto sea así.

Y en estas condiciones nuestro grupo, que precisamente se significa por la enorme diferencia de posiciones políticas, está dando en esta Cámara de manera constante y permanente un sentido de encuentro de aquello que nos une y no de lo que nos desune, para tratar de concurrir con posiciones comunes por parte de todos los miembros que lo componen, como si quisiéramos hacer una oferta a todos los demás de que realmente el momento español que vivimos es un momento en el que no se nos puede permitir a ninguno, por muchas e importantes que sean las razones, el que estemos fijándonos en los que nos desune o en lo que no nos gusta en los demás, que es lo que produce, en ocasiones, situaciones realmente tirantes de tensión y de incompreensión en la convivencia política nacional y en el juego normal de las fuerzas políticas. A nosotros nos parece que este es el momento en el que todos, absolutamente todos, debemos concurrir con una oferta generosa de

tratar de encontrar en los demás aquello que se parece más a lo que nosotros tenemos, sentimos y pensamos, y que vayamos a tratar de superar las posibles diferencias que se nos presentan y que nos ofrecen en relación con el resto de los que mantienen, de alguna manera, posiciones políticas. Porque, de verdad, nos parece a nuestro Grupo Mixto, tan distinto y dispar en ideas políticas, en representación política, nos parece que es el momento de que todos nos cojamos del brazo y hagamos cuanto sea posible para que en lo que concurrimos ofrezcamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra ilusión y todo nuestro trabajo. Que, incluso, en aquello que de alguna manera pudiera diferenciarnos, si es posible hagamos el esfuerzo necesario para posponerlo y para dejarlo para momentos en que la situación nos permita examinar con más claridad las diferencias, porque ahora, repito, desde nuestro Grupo Mixto nos parece que lo importante es que aunemos esfuerzos en todos los aspectos.

Por esta razón, porque queremos colaborar intensamente en todo cuanto significa buscar soluciones concretas y definitivas para problemas tan importantes como este que tenemos sobre la mesa a propuesta del Gobierno, puedo ya anunciar que nuestro grupo votará favorablemente la propuesta de constitución de la Comisión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Senadores Vascos, tiene la palabra el senador Unzueta.

El señor UNZUETA UZCANGA: Señor Presidente de la Cámara, señor Presidente del Gobierno, Ministros y señorías, unas palabras —no van a ser muchas— para, de forma esquemática, dejar fijada nuestra posición en el tema que nos ocupa.

El Gobierno nos pide que esta Cámara también apruebe la designación de una Comisión mixta que investigue un hecho que tiene dos características extraordinariamente claras. Primero, que es un problema grave, gravísimo, y un problema doloroso que casi casi yo me atrevería a decir que es una catástrofe humana. Por otra parte, es un problema que nos viene a nosotros a esta Cámara menos de ocho días después de que los colegas de la otra Cámara, durante largas horas y a través de proposiciones, interpelaciones, preguntas, etcétera, hayan debatido este mismo tema.

Nosotros hemos leído, hemos escuchado y hemos analizado los argumentos, las razones y las opiniones que se han dado. Nuestro grupo acepta unas, discrepa de otras, y se ha preguntado si era el momento de ilustrar —valga la expresión— a SS. SS. con estas opiniones. La verdad es que de forma prácticamente unánime hemos pensado que no es este el momento.

El Presidente de la Cámara ha dicho que los portavoces tenemos diez minutos para nuestras intervenciones. A mí me gustaría no consumir ni siquiera los diez minutos, porque, de verdad, aquí lo que hace falta son menos opiniones y más hechos. En este sentido, nosotros vamos a votar que sí a la proposición del Gobierno, pero también quiero decir que vamos a votar «sí» con una profunda preocupación y con un gran temor.

Vemos dos órdenes de problemas, por decirlo de una forma muy simplificada, en este tema. Algo que llamaríamos el orden clínico, el orden médico, que es la atención a todos los afectados, en lo que esta Cámara poco puede decir salvo que —y esto sí lo hago en nombre de mi grupo— exhortamos encarecidamente al Gobierno para que no escatime ni un solo recurso en resolver este problema; para que la Sanidad, a la que la burocracia y tantos problemas acogotan en este país, se sienta protegida. Más vale desperdiciar unos recursos materiales o humanos que quedarnos atrás.

Hay otro problema que voy a exponer en unas palabras, que es el de la Sanidad alimenticia, o el comercial, de toda esa serie de alimentos que ingerimos y que ahora, con sentido del humor y a veces para consolarnos, resolvemos con unos pequeños chistes, pero que, desgraciadamente, nos preocupan a todos, a nuestro grupo extraordinariamente.

Digo que vamos a votar que sí a la constitución de la Comisión con temor, por algo que en este momento no sé cómo se va a resolver, pero que lo voy a decir. Esta Comisión puede ser un éxito o un fracaso. Si se dedica a hacer unas visitas a los afectados y se saca fotografías con ellos; si habla con doctores ilustres; si hace alguna visita a la Organización Mundial de la Salud; si recoge los chismes de Prensa, y si al final de meses de trabajo almacena montones de papel y debidamente encuadernado lo entrega al Presidente de la Cámara y al Presidente del Gobierno, por supuesto habrá sido un fracaso, y, de verdad, en ese caso, nuestro grupo se habrá arrepentido de haber vo-

tado «sí» en esta ocasión a la designación de esta Comisión

Si esta Comisión es otra cosa, y no me resulta fácil en este momento decir qué otra cosa puede ser, porque yo siempre estoy diciendo, y nuestro grupo también, que nos consideramos parlamentarios noveles dentro de las técnicas parlamentarias; pero si esta Comisión, con imaginación y, sobre todo, con un sentido de justicia, que es lo que debe prevalecer aquí, da a su acción un impulso dinámico, y en vez de buscar el hacer el día de mañana no un libro verde, blanco, azul o negro, lo que busca es la raíz del problema y unas responsabilidades que no sé dónde están en este momento pero que, desde luego, existen; unas responsabilidades que no sé si son dolosas o culposas, no sé si la negligencia es grave o leve, pero en algún sitio están esas responsabilidades y, posiblemente, no sólo en la colza, sino también en otros alimentos que circulan y que ingerimos; si esta Comisión con esa sensibilidad que desde ahora pido para ella y para los que ocupen esos puestos, investiga y comunica al Poder judicial sus impresiones para que la maquinaria del aparato judicial actúe rápido y bien, y si esa Comisión manifiesta sus opiniones a la Administración y ésta es sensible a estas opiniones, y toma las medidas que le corresponde, la Comisión habrá sido un éxito, y yo me alegraré de haber podido decir aquí en nombre de mi grupo que hemos votado favorablemente a esta Comisión.

Quisiera terminar exponiendo dos ideas extraordinariamente breves, pero que puedan hacer que éste sea, en definitiva, uno de los grandes acontecimientos que lleven a la consolidación del sistema democrático en este país.

Yo sé, porque lo ha dicho el Presidente del Gobierno en este momento, que el Gobierno va a tener respeto hacia la Comisión parlamentaria. No basta que tenga respeto; tiene que tener una profunda sensibilidad hacia lo que diga esta Comisión; que serán sugerencias, a título provisional o definitivo, no lo sé. Pero debe tener un profundo respeto y sensibilidad. Y el Gobierno, que tiene los recursos en sus manos, tiene que actuar inmediatamente de acuerdo con lo que le diga esta Comisión.

En segundo lugar, como estaba diciendo antes, lo que el hombre de la calle quiere son hechos; si en este sistema, en esta democracia de la que tanto hablamos, en vez de tantos discursos y tantos documentos, lo que el hombre de la calle ve es

que se va tratando de encauzar con seriedad las cosas, habremos superado años y años de vacilaciones y de incertidumbres, y habremos arraigado de verdad la justicia y la democracia.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme, tiene la palabra el senador Andréu.

El señor ANDREU ABELLO: Señor Presidente, señor Presidente del Gobierno, señores Ministros, señorías, antes que nada voy adelantar que nuestro grupo votará a favor de que se constituya la Comisión. Yo, como soy un viejo parlamentario, desearía que esta Comisión no fuera una desilusión más; en general, esas Comisiones parlamentarias es difícil que lleguen a resolver definitivamente ningún problema. Y creo que el problema, señores del Gobierno, es en gran parte heredado, es un problema que viene de años.

La corrupción que hay en los alimentos en todo el país es una cosa insólita; porque no es solamente el problema desgraciado del aceite que ha causado tantas víctimas últimamente, es que igualmente se puede decir del pan; se puede decir del mismo vino —con tanto vino como tenemos nosotros y se vende adulterado y falsificado—; se puede decir de los embutidos, de las aguas minerales, como pasó con aquella célebre agua, la que más se vendía en España, y estoy seguro de que si hubiera un riguroso control de las aguas minerales, muchos de esos embotellados desaparecerían. Es más. No puedo decirlo concretamente, pero llegan hasta mí indicios —que si llegan a tener comprobación los haré llegar a la Comisión y al Gobierno— de que incluso algunas marcas multinacionales muy respetadas no guardan el debido respeto para la Sanidad y no cumplen las leyes en España, y en cambio las cumplen en los demás países, porque son más exigentes, donde esas multinacionales están instaladas.

El problema es grave, gravísimo, y nosotros no podemos hacer otra cosa que estar en la Comisión, apoyando al Gobierno, para que lo resuelva. Se trata de un problema de energía, de ir al fondo en la investigación de todo lo que ocurre en la alimentación en nuestro país, y emplear mano dura. De ello no tiene culpa el actual Gobierno, sino que viene de muchos Gobiernos anteriores, porque desde que yo he regresado a España he llegado a conocer un día una declaración del Gobierno en que para no aumentar el precio del pan au-

torizaba a los panaderos a que hicieran kilos de 830 gramos, fantasía que no ocurre en ningún país serio del mundo. Y eso se hizo por un Gobierno del pasado, no por el actual. Es decir, o acabamos con todas estas cosas o no resolveremos el problema.

Estoy convencido de la sinceridad de todos los Ministros del Gobierno, de su buen deseo de acabar con esta situación. Ojalá lo logremos. Que no se discutan ahora las indemnizaciones y los socorros que merece esa gente afectada por el aceite tóxico. Que el Gobierno dé en eso las máximas facilidades. Pero yo, que hace ya años que hago política, he de decir que la situación de fraude que yo he encontrado al regresar a mi país, tengo que buscar países del Tercer Mundo para conocer una cosa similar a lo que ocurre en España.

Y no hago crítica de nadie, porque creo que el Gobierno se encuentra con que la mayor parte de cosas vienen del pasado y es difícil cambiarlas.

No quiero alargar más mis palabras. Solamente pido al Gobierno que actúe con energía; que detrás del Gobierno, para este hecho concreto de lucha contra el fraude alimenticio, estaremos todos los parlamentarios y que la Comisión estoy seguro de que apoyará al Gobierno. Pero que no se esperen milagros de la actuación de la Comisión, porque ésta no tendrá jamás en sus manos los elementos que tiene el Gobierno. A mi entender, el principal esfuerzo tiene que hacerlo el Gobierno. La Comisión puede estar a su lado asesorándole, dándole información y creando iniciativas, pero en el fondo, la gran responsabilidad de esta situación está en manos del Gobierno de SS. SS.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Vallejo, por el Grupo Socialistas Andaluz.

El señor VALLEJO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores senadores, en primer lugar tengo que decir, en cuanto a la posición de los senadores que formamos parte del Grupo del PSOE de Andalucía, que nuestra actitud respecto a la creación de esta Comisión era de enorme recelo, porque ya tenemos en esta Cámara experiencia sobre las Comisiones especiales. Ahí está en concreto la Comisión especial sobre el Estudio de la Investigación Científica Española, que lleva muchos meses trabajando y que en definitiva no ha sacado todavía ninguna conclusión; ha estado muchos meses paralizada y está en fase de com-

parecencia de algunos científicos de distintas entidades españolas. El ejemplo es aleccionador de que, en realidad, las Comisiones difícilmente resuelven los problemas, por lo menos, creemos nosotros, que por la actitud de la mayoría de la Cámara.

Hay otro ejemplo también desgraciado, y es el de la Comisión de Sanidad, donde hace ya un año que se anunció la comparecencia del entonces Ministro de Sanidad, señor Oliart; se presentaron algunas preguntas de los grupos parlamentarios; el señor Oliart compareció con un tiempo limitado y no constestó ni siquiera al 50 por ciento de las preguntas, que todavía están en el aire sin responder. Hace de esto, como digo, prácticamente un año.

Eso nos llevaba a tener recelo respecto a la creación de esta Comisión. Pero hay otra cosa, que el señor Presidente del Gobierno, en la intervención que acaba de tener, nos confirma y es que antes siquiera de que empezara el debate en el Congreso de los Diputados, incluso antes de que terminara dicho debate sobre la intoxicación por el aceite de colza desnaturalizado —y hay que remarcar esto, porque no es el aceite de colza, sino el desnaturalizado—, ya el Gobierno había tomado la decisión de que crear una Comisión, y además que ésta fuese mixta.

Nosotros creemos que el Parlamento tiene que estar para controlar al Gobierno y que el Gobierno no puede ser quien decida que el Parlamento cree Comisiones. Por tanto, en esta ocasión, el Parlamento se ve como empujado por la decisión del Gobierno, ya que no sale la iniciativa de creación de esta Comisión de él, como creemos que tenía que suceder.

Hay otra cosa que ha dicho el señor Presidente del Gobierno aquí y que me ha preocupado a mí particularmente. Ha manifestado que esta Comisión se crea para ver si conseguimos que los ciudadanos recobren la confianza en las Administraciones públicas. Quizá sea un error de interpretación mía o quizá ni siquiera ha querido decirlo el señor Presidente, pero me parece que, al hablar de Administración pública en plural, existe una intención de referirse a otras Administraciones distintas a las centrales o del Gobierno; no sé si habrá querido citar a los ayuntamientos o no en esta alusión. Digo esto porque, como ya explicaré después, nosotros entendemos que los ayuntamientos no tienen responsabilidad en este tema

que estamos tratando, y quiero dejarlo bien claro de antemano.

Pues bien, dicho esto, nosotros, sin embargo, vamos a votar afirmativamente la creación de esta Comisión, y vamos a hacerlo así porque no queremos que haya ninguna duda sobre la postura de nuestro grupo parlamentario para llegar al fondo de todas las cuestiones que han hecho posible esta intoxicación. Hay un origen, sin lugar a dudas, en unos criminales que para enriquecerse llevan a cabo cualquier tipo de medidas, como es incluso el fraude alimentario; hay responsabilidad criminal entre los que han hecho posible esta intoxicación masiva, este fraude alimentario; sin lugar a dudas, también, hay que atender a los afectados. Pero entendemos que la Administración pública, el Gobierno, entre otras misiones, tiene encomendada la de proteger a los ciudadanos, y si no sirve para eso, difícilmente sirve para cualquier cosa, y en esto es donde nosotros vemos la responsabilidad del Gobierno.

Hay criminales en la sociedad española, unos en la cárcel y otros fuera, pero el Gobierno —para eso está la Administración pública— debe velar por que esos criminales no lleven a cabo sus acciones, y eso no se ha puesto de manifiesto en esta intoxicación, ya que ha sido posible realizar una acción criminal sin que por determinada parte de la Administración se descubriera, salvo cuando ya estaba en marcha la misma.

Y dicho esto, tengo que añadir que lo lamentable no es que haya pasado esto con el aceite de colza desnaturalizado —que ya es grave—, sino que se han producido nuevas intoxicaciones cuando no se acaba casi el debate en el Parlamento. Se ha producido la intoxicación de mejillones y creemos que es posible que haya nuevos fraudes alimentarios, porque no se coge con decisión el tema de la reforma administrativa. Y además, tenemos que decir, respecto a la información del Gobierno al Senado, que el Libro Blanco del que se habló en el Congreso nos ha llegado esta mañana a los casilleros. Parece ser, incluso que ha llegado porque algún senador del Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo, un tanto ingenuo, preguntó ayer dónde estaba el Libro Blanco, que parecía ser que se iba a formar una Comisión mañana —por hoy— en el Senado y que todavía no teníamos la información oficial del Gobierno. Y ante esta pregunta, entiendo yo que un tanto ingenua, esta mañana aparece el Libro Blanco en los casilleros. Creo que esto no es demostrativo de

tener muy buena intención de informar y de resolver el problema de información y de gestión del Gobierno.

Quiero dejar también muy claro, como he dicho antes, el tema de la responsabilidad de los ayuntamientos. Fijense en una cosa: en la provincia de Córdoba, por la que soy senador, resulta que sólo en un pueblo se ha detectado la presencia de una de estas marcas de aceite de colza desnaturalizado, un pueblo que tiene alcalde de UCD. Pero nosotros creemos que eso es absolutamente aleatorio y que no tiene ninguna responsabilidad ese ayuntamiento. En la ciudad de Villanueva de Córdoba se ha detectado esa marca, pero ¿cómo se le puede pedir responsabilidad a un municipio que ni tiene autonomía en el nombramiento de determinados inspectores, ni siquiera se le paga por parte del ayuntamiento (se le paga por parte del Gobierno central) y no tiene esa descentralización administrativa que estamos pidiendo para los ayuntamientos?

No quiero alargarme en el tema, puesto que es evidente que aquí de lo único que se trata es de formar esta Comisión. Hemos dicho los recelos, pero también queremos manifestar que vamos a trabajar seriamente y a fondo en esa Comisión; que si el grupo mayoritario no está de acuerdo o nosotros no estamos de acuerdo con algunas de las proposiciones que haga en la Comisión, el grupo mayoritario del Senado, desde luego que mantendremos posturas diferentes, si eso fuera necesario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El senador Beviá, del Grupo Socialista del Senado, tiene la palabra.

El señor BEVIA PASTOR: Señor Presidente, como portavoz del Grupo Socialista, va a intervenir el señor Laborda.

El señor PRESIDENTE: El señor Laborda tiene la palabra.

El señor LABORDA MARTIN: Gracias, señor Presidente. Señorías, el debate de hoy formalmente consiste en la fijación de posturas de los distintos grupos respecto de la proposición del Gobierno para constituir la Comisión Mixta. Sin embargo, hay que decir —y es evidente, puesto que la opinión pública así lo estima— que este debate supone, de alguna manera, una continua-

ción y, por tanto, un complemento del debate que ha tenido lugar anteriormente en el Congreso de los Diputados.

A la postre del balance de este debate tengo la impresión de que amplios sectores de la opinión pública entienden que ha habido más palabras que realidades, y esta es una idea que yo quisiera dejar sentada inmediatamente, puesto que el cambio del equilibrio de ese balance, de que haya más realidades y más hechos que palabras, depende del éxito de esta Comisión, a cuya creación el Partido Socialista va a votar afirmativamente, pero no sin antes, como hizo en el Congreso, exponer también su punto de vista sobre el hecho a investigar y sobre las dudas que nos merece la posible actuación de la Comisión.

Es verdad que del debate parlamentario (y esto hay que decirlo porque, de lo contrario, no haríamos honor a nuestra condición de demócratas y, por tanto, de personas que creemos en esta institución) han salido resoluciones para atender a las víctimas de la intoxicación, para que sus derechos como ciudadanos queden cubiertos, que las veinticuatro resoluciones o propuestas que el Partido Socialista propuso en agosto han servido para un rico debate y también para dar satisfacciones mínimas a las consecuencias a una agresión a unos derechos que, como ciudadanos y consumidores, tienen y que han sido brutalmente violados.

El debate parlamentario hemos escuchado también manifestaciones del Gobierno, bien es verdad que inconexas. Tal vez podamos ver en esa inconexión la falta de coordinación que en muchas ocasiones hemos manifestado que existía en la Administración pública en muchos aspectos, y en éste del control alimentario entre otros, que no es el menos importante.

Es verdad que los distintos responsables de los Departamentos nos han explicado, desde su punto de vista, los diferentes problemas —política de grasas, comercial, de sanidad— que centraban el debate. De todo ello, cada uno ha venido a intentar subrayar quizá las primeras palabras del Presidente del Gobierno en el Congreso y que hoy ha vuelto a reiterar aquí: el Gobierno no tiene nada que ocultar.

En este debate hay un tercer aspecto que yo quisiera señalar y que ahora es pertinente, y que quisiera relacionar precisamente con esta declaración formal del Presidente del Gobierno res-

pecto de que su Gabinete no tiene nada que ocultar.

Se nos propone crear una Comisión de encuesta. Algunos portavoces han señalado cierto escepticismo ante lo que, por comparación, pudiera ser el funcionamiento de esta Comisión de encuesta conjunta Congreso-Senado.

Yo podría tener razones extraordinarias de escepticismo. Hoy mismo, solamente el portavoz de su grupo parlamentario no ha estampado la firma para que una resolución de la Comisión Especial de Emigración, adoptada unánimemente por la Comisión, no sea debatida en el Pleno de esta Cámara, y se nos ha dicho, o tal vez hemos opinado, que era porque el Ministerio de Trabajo no tiene interés en que se debata este problema, era resolución, coincidiendo con la vendimia.

Yo tendría, por tanto, razones importantes para desconfiar y ser escéptico respecto de esta Comisión parlamentaria; pero como demócrata, y por tanto como hombre que respeta y espera del Parlamento, voy a decir que espero que, precisamente en razón de la gravedad del hecho que el Gobierno nos propone investigar y de sus consecuencias, esta Comisión va a lograr el éxito que los damnificados en primer lugar y la opinión pública en general esperan de esta Comisión; éxito que no puede ser otro que el esclarecimiento —y lo decimos con absoluta sinceridad— no por supuesto, de lo que el Gobierno pudiera haber ocultado, sino de otra cosa, y esta es nuestra hipótesis de trabajo ya que no nos cabe otra porque el Gobierno no nos expone una hipótesis de trabajo anterior al proponer la Comisión— porque creo que en un trabajo que es político pero que de alguna manera debería estar obligado por una metodología científica o por analogía con la metodología científica, quien propone la investigación debe proponer la hipótesis de trabajo. Pues bien, nuestra hipótesis de trabajo es que, al menos, al Gobierno se le ocultó la causa del fraude —y los hechos y la cronología de ellos son claros— debido a las consecuencias —y lo tenemos que decir también con claridad— de la falta de voluntad política para que la Administración funcione bien, falta de voluntad política que se ha expresado, como ya antes reiteré, en la falta de coordinación existente (y denunciada ya desde tiempo) entre los distintos Ministerios; por ejemplo, en la tardanza en la presentación de las leyes necesarias para una reforma democrática que haga eficaz la función pública.

Porque, señor Presidente, señoras y señores señadores, a mí me parece que siendo sincero hay que concluir que la opinión pública compara la lentitud de la Administración para detectar el fraude —y quisiera que esa lentitud terminara— y la lentitud, por ejemplo en aplicar las resoluciones aprobadas en el Congreso (porque esta mañana no se sabía exactamente de quién dependía la creación y confección de la cartilla de perjudicados, de víctimas, de los enfermos, que da origen a los derechos); la opinión pública compara la lentitud, digo, de la Administración en detectar el fraude, con la rapidez, la intensidad y la reiteración con la que se producen hechos como este del que, desgraciadamente, tenemos que ocuparnos aquí hoy. Y es —aquí se ha dicho— asombroso, lamentable, porque este no es un país subdesarrollado; este es un país industrializado, integrado en Europa, en el cual sus clases dirigentes, los poderosos, los de niveles de renta altos, han accedido incluso a un consumo sofisticado. Sin embargo, es evidente también que los sectores populares reiteradamente están padeciendo las consecuencias de lo que nosotros entendemos que fundamentalmente son faltas de buena actuación de la Administración. Porque, veamos el contenido sociológico de muchos de los hechos que hemos lamentado, criticado, denunciado, y que hoy debatimos. Por ejemplo, es evidente que la leche para consumo animal que se expendió para consumo humano en Santander era un producto de consumo popular; como era un producto de consumo popular la carne en malas condiciones, o con hormonas, que se ha expendido en nuestros mercados; como es el hecho tantas veces denunciado de los distintos elementos minerales que contienen a veces los panes; y estos últimos días tenemos el caso del —diríamos— marisco popular, que ha originado una cifra de afectados que sería sorprendente si en vez de por mejillones fuera por langosta. En resumen, estimamos que en el fondo de todo este problema hay realmente un contenido diferencial sociológico.

De todo esto, la opinión pública deduce que hay un mal funcionamiento de la Administración, y esta es la hipótesis con la que nosotros queremos actuar en la Comisión. Un mal funcionamiento de la Administración, sobre todo si lo contemplamos desde esa perspectiva sociológica que yo he querido plantear en esta tribuna. Porque, desde luego, un Estado moderno como el que está diseñado en nuestra Constitución, como

el que exigirá nuestra condición de país industrial, se caracteriza precisamente porque la Administración, el Estado, garantiza a todos los ciudadanos, pero especialmente a aquéllos que por sus niveles de renta están más desprotegidos, el acceso real a sus derechos como ciudadanos y como consumidores.

Esto es lo que nosotros entendemos a tenor del artículo 9.º de la Constitución cuando dice que es necesario «aunar» al ejercicio de los derechos reales al conjunto de los ciudadanos. Lo cual no es una mera declaración formal, como desde unas supuestas interpretaciones liberales de dicho artículo 9.º se ha querido decir; que relacionando ese artículo 9.º con el 51 de la Constitución, ése que dice aproximadamente que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo su seguridad y su salud, esos dos artículos, conjugados dialécticamente, son los que obligan a la Administración a prever y corregir eso que afecta fundamentalmente a las clases populares, y es de ahí de donde deducimos la responsabilidad de la Administración.

Entendemos que esto es consecuencia, por tanto, de ese funcionamiento de la Administración, y no consecuencia, como tal vez alguien ha podido decir, de la libertad. Y desde luego —fijense bien, señor Presidente y señores del Gobierno, y lo dice un socialista—, digo claramente que ni siquiera es consecuencia de la libertad de mercado; porque de lo contrario, si aceptáramos esto, podríamos entender que se habían malinterpretado las palabras del señor Presidente del Gobierno cuando en una ocasión, dirigiéndose a un conjunto de empresarios, les manifestó que les estimulaba a sentir «la erótica del beneficio». A mí me gustaría que dentro de unos meses, cuando repita este tipo de frases, el señor Presidente añadiera que la Administración garantiza a cualquier ciudadano que no va a ser objeto y víctima de una bacanal de beneficios; porque una bacanal de beneficios ha sido realmente este problema que tenemos aquí.

Confío, por tanto, y termino, señor Presidente, en la voluntad expresada por el Gobierno de que esta Comisión sirva efectivamente para el control parlamentario que debe ejercerse sobre el Gobierno, y que aporte el Gobierno todos los datos, todos los informes, y yo quisiera también que los medios de que dispone para el éxito del trabajo investigador.

Hago una pregunta clarísima, y me gustaría

que el Presidente del Gobierno nos la pudiera responder: ¿Puede comprometerse el Gobierno a prestar a esta Comisión los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el funcionamiento de ésta? Esta es una pregunta que nos gustaría que se respondiera, o de lo contrario, los dos Grupos Parlamentarios Socialistas del Congreso y del Senado presentarán una proposición no de ley para garantizar el buen funcionamiento y la infraestructura necesaria para el trabajo investigador.

Hay una serie de tareas que son necesarias en el trabajo de esta Comisión que, de alguna manera, se adhieren a dos hipótesis generales de trabajo. Evidentemente está el problema de las garantías del consumidor. ¿Cómo ha podido suceder esto? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Nos llevará tiempo también investigarlo. Y nos gustaría también investigar el problema de la dependencia que este fenómeno no pueda ocasionar en el terreno económico. Es evidente que a las multinacionales de la soja este hecho, que es un desprestigio del cultivo de la colza, les favorece extraordinariamente, y es curioso, es paradójico que, por ejemplo en una región como la mía, donde ha habido precisamente un gran número de víctimas como consecuencia del envenenamiento, esta región, que ha iniciado cultivos experimentales de colza, para los que el Ministerio de Agricultura ha creado las primas necesarias, ahora se encuentre con las consecuencias internas e internacionales del desprestigio de este cultivo de colza, y suponga un robustecimiento de las multinacionales de la soja, que también es uno de los elementos de control económico de las naciones por parte de los centros mundiales de producción de alimentos, especialmente en los Estados Unidos.

El señor PRESIDENTE: Debe terminar, señor Laborda,

El señor LABORDA MARTIN: Terminó, señor Presidente, esperando tan sólo que el control parlamentario que el señor Presidente ha propuesto aquí y que con su presidencia ha subrayado formalmente, pueda ejercerse mediante esta Comisión que se nos propone.

Yo solamente terminaría diciendo que por el prestigio de la democracia, prestigio que está estrechamente ligado a ese control parlamentario, a la institución de la oposición, es bueno que todos vayamos a esa Comisión buscando la verdad, sin

tener miedo a cuál sea la verdad que vayamos a encontrar. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático, tiene la palabra el senador Villodres.

El señor VILLODRES GARCIA: Señor Presidente, señor Presidente del Gobierno, señores Ministros, señorías, en un programa de televisión emitido hace unos días sobre la intoxicación por el aceite de colza desnaturalizado tuvimos ocasión todos los españoles, un gran número de españoles, de estremecernos viendo y oyendo a algunos de los afectados por el fraude alimentario. Era unánime la exigencia, por parte de los afectados, de un implacable esclarecimiento de los hechos; también se exigían medidas para remediar la situación, ciertamente, pero me atrevería a afirmar en este problema de los afectados que casi era más vehemente la petición de que se investigaran los hechos que han dado origen a esta tragedia. La opinión pública, y no solamente los afectados, quieren que se sepa la verdad, con todas sus consecuencias, y que se adopten las medidas justas, eficaces para remediar estos males y prevenirlos en el futuro.

De las reuniones del Consejo de Ministros y del debate que se produjo en el Congreso de los Diputados en la semana pasada ya han surgido una serie de conclusiones que constituyen esas medidas eficaces que la situación demanda: veintiséis medidas, teniendo en cuenta una proposición inicial del Partido Socialista. Pero, como recordó el portavoz socialista, se ofrecían para este trabajo unas actitudes constructivas, unas actitudes cooperativas. Se decía: tenemos que hacerlo entre todos.

Del debate nos interesa sobre todo ahora la investigación de la verdad, con todas sus consecuencias, más allá de los datos contenidos en la información que tenemos de la Administración en el llamado Libro Blanco. Y esto podrá perfeccionarse en esta Comisión de encuesta. Aquí se puede perfeccionar.

Tiene recelos el señor Vallejo en este tema. Dice: «es que no todas las comisiones de investigación han funcionado». Algunas sí. Concretamente ayer algunos portavoces socialistas me manifestaron su deseo de incluir en el orden del día de este Pleno el informe de la Comisión de Trabajadores Emigrados, aprobado por unanimidad,

porque se considera que se ha hecho un trabajo importante.

Y yo dije con mucho interés: «Precisamente el Presidente de la Comisión, senador Sánchez Castiñeiras, no se encuentra en Madrid, ni en el Pleno. Nos hemos reunido el grupo, esta mañana, fue designado para defender el dictamen y hemos intentado, a pesar de otras preocupaciones que tiene en Galicia en este momento, que venga mañana a presentarlo».

Yo podía decir cosas aquí, pero no quiero perturbar mucho el dictamen, en cuanto a las comisiones de investigación. Yo al portavoz socialista únicamente le puedo afirmar que con esta Comisión de investigación no va a ocurrir lo que pasó con la Comisión de investigación para la distribución del empleo comunitario en Andalucía, que según el informe que dio después esta Comisión (con unos objetivos modestos, que eran repartir mejor estos fondos), la información que se dio a la prensa era: erradicación del paro en Andalucía, con la creación de 500.000 puestos de trabajo y una inversión de 700.000 millones.

Esto no va a ocurrir aquí. Y quiero al mismo tiempo decir que es necesaria esta Comisión porque la información que contiene el Libro Blanco, aunque objetiva, no es completa, porque no puede serlo. Nos hallamos ante un proceso tóxico que continúa y que requiere una investigación también continuada en el tiempo.

Por otra parte, la complejidad del problema hace conveniente una investigación parlamentaria, ya que de esta forma se añade la garantía de independencia y parcialidad que corresponde a las Cortes Generales, a las Cámaras Legislativas.

Esta Comisión, senador Andréu, dará a las investigaciones un enfoque y una amplitud propias por encima de los que pudiera darle la Administración, de cuya objetividad por otra parte no dudamos.

El Gobierno, al proponer a las Cortes la creación de esta Comisión de encuesta, ha dado pruebas de su sometimiento al control parlamentario. No un sometimiento circunstancial a través de un debate, sino, más aún, un sometimiento continuado a la investigación parlamentaria que habrá de desarrollarse permanentemente mediante los trabajos de la Comisión.

Si el Gobierno con su iniciativa cumple un deber de ética política sometiéndose a este control, las Cortes Generales, por su parte, cumplen con su deber de responsabilidad ante el electorado in-

vestigando los hechos, acciones y omisiones relacionados con el síndrome tóxico.

Se investigará a la Administración central, a los entes autonómicos, preautonómicos y a las Corporaciones locales, conforme dice la comunicación del Gobierno, senador Vallejo. La investigación alcanzará, además, todas las actuaciones, sean públicas o privadas, que tengan relación con este grave problema, porque la Comisión hará suya la exigencia popular, la exigencia del país de descubrir la verdad con todas sus consecuencias. La Comisión parlamentaria representará las inquietudes populares de llegar con la investigación hasta el final.

Señorías, para los parlamentarios, la creación de esta Comisión de encuesta no es un derecho que reconoce el artículo 76 de la Constitución; es un deber político que nos viene impuesto por la obligación de sintonizar, de conectar nuestras actuaciones a las exigencias de la opinión pública, en este caso orientada hacia el esclarecimiento de los hechos relacionados con el envenenamiento. Pero es también un deber ético para quienes han sufrido en sí mismo, o en sus familiares, las consecuencias del fraude mortífero.

Creemos, por otro lado, que esta Comisión ha de colaborar de manera importante y que a través de sus conclusiones se conozcan las responsabilidades derivadas del fraude tóxico.

El Gobierno ha demostrado que no se oculta del control parlamentario y estamos convencidos en el Grupo Parlamentario de UCD que al final del proceso, de la más amplia investigación, se confirmará la ausencia de responsabilidades políticas de los poderes públicos en este problema.

Celebrado ya en el Congreso de los Diputados el debate sobre la intoxicación y fraude alimentario, fruto del cual, como una de sus conclusiones, fue la aprobación, por abrumadora mayoría, de la creación, conjuntamente con el Senado, de esta Comisión de encuesta, es el momento de que esta Cámara se sume también mayoritariamente, creemos que por unanimidad, a dicha iniciativa gubernamental que ahora ya ha sido abrumadoramente refrendada por el Congreso de los Diputados.

Aprobando la creación de esa Comisión estaremos contribuyendo a que el pueblo español mantenga y refuerce su confianza en las instituciones democráticas, que algunos, irresponsablemente, ponen a veces en juego con su partidismo y tradiciones.

Se ha dicho que ha pasado ya el debate y es el momento de dejar la dialéctica y poner en práctica la eficacia que de todos, Administración y Parlamento, espera la opinión pública. Esforcémosnos porque esta Comisión parlamentaria contribuya a aportar soluciones a este grave problema y a que, en lo sucesivo, no se produzcan nuevamente situaciones como las que hoy nos preocupan. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El señor Presidente del Gobierno tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Calvo-Sotelo y Bustelo): Señor Presidente, señorías, no quisiera yo contribuir a que esta sesión, que es una sesión para decidir sobre la creación de una Comisión de encuesta, se convirtiera en una sesión de la Comisión de encuesta y entrara en la materia del problema, desbordando el umbral de la forma, que creo que es lo que le corresponde; pero tampoco quisiera faltar a la cortesía parlamentaria y marcharme de aquí sin decir unas palabras en respuesta a las que han dicho los señores senadores.

En primer lugar, palabras de gracias porque han anunciado todos ellos que votarán que sí, que aceptan la propuesta del Gobierno.

En segundo lugar, unas brevísimas palabras de comentario a dos que ha hecho el senador Vallejo y a otras dos que ha hecho el senador Laborda.

Lamentaba el senador Vallejo que esta iniciativa fuera del Gobierno y decía que debía haber sido de la Cámara. No ha sido precisamente el Gobierno quien le ha impedido a la Cámara tomar la iniciativa. Quiero señalar la pequeña inconsecuencia de esa lamentación hecha en nombre de la propia Cámara.

A continuación se preguntaba si habría sido un lapsus mío al hablar en plural de administraciones públicas. Procuro ser preciso en mis intervenciones, incluso en el número de los sustantivos y adjetivos. Sí, he hablado en plural porque son varias las administraciones públicas competentes en la materia. Creo, con el señor Andréu, que no es responsable la Administración central, y él lo ha dicho. Creo, y lo dije en el Congreso, que no son responsables las Administraciones municipales, pero creo que competentes sí lo son las Administraciones municipales y la Administración central.

Dos breves comentarios a otros tantos del sena-

dor Laborda. Decía él que iría a la Comisión en la hipótesis de un mal funcionamiento de la Administración pública. Yo no le llamaría a eso una hipótesis, sino un prejuicio, y pediría al senador Laborda que fuese limpia y abiertamente, como ya se ha dicho aquí por varios señores senadores, a descubrir la verdad. Y si la verdad es que la Administración pública ha funcionado mal, descúbrase y dígase; pero si como yo espero, la verdad es que la Administración pública no ha funcionado mal, dígase también y descúbrase también y no se niegue de entrada la claridad y la luz al debate con prejuicio de un mal funcionamiento de la Administración.

Entre paréntesis, yo no he hablado de erótica del beneficio. Hablé una vez del acto de invertir, que tanto nos falta en la economía de hoy, y me permití una imagen literaria, que se ha dicho, con algún impudor, que no era mala, y cuya lectura recomiendo al senador Laborda, porque no era, no estaba hecha sobre la expresión erótica del beneficio.

Y, por fin, en cuanto a que el Gobierno vaya a prestar su asistencia a la Comisión, mi respuesta es, naturalmente, que sí. Para eso ha pedido el Gobierno que se constituya esa Comisión. Muchas gracias. (*Aplausos.*)

El señor PRESIDENTE: Procede que la Cámara se pronuncie en relación con la aceptación y aprobación de la propuesta del Gobierno respecto a la creación de una Comisión especial de investigación conjunta Congreso de los Diputados-Senado.

¿Señores senadores que voten a favor de la propuesta del Gobierno? (*Pausa.*) Por asentimiento de la Cámara queda acordada la constitución de una Comisión de investigación conjunta Congreso de los Diputados-Senado, en los términos de la propuesta del Gobierno, contenida en la comunicación fechada del 31 de agosto pasado con que se inició este debate que ahora concluye.

Seguidamente, y en respuesta a la comunicación recibida por esta Presidencia del señor Presidente del Congreso de los Diputados, se notificará a aquella Cámara la resolución positiva que acaba de pronunciar el Senado. Y, dado que no existe ningún precedente en cuanto a la utilización de esta oportunidad constitucional, la Presidencia del Senado, de acuerdo con la Mesa, con audiencia de la Junta de Portavoces, procederá de inmediato, conjuntamente también con la Presi-

dencia del Congreso de los Diputados, a dictar las disposiciones procedentes para articular la composición de la Comisión especial conjunta que ya ha sido acordada por resoluciones de ambas Cámaras, así como aquellas normas por las que deba regirse el desarrollo de los trabajos de esta Comisión.

Con ello concluye el debate de este punto sexto del orden del día.

Muchas gracias.

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— DE LA COMISION DE JUSTICIA E INTERIOR, EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBAN DETERMINADAS MEDIDAS SOBRE RÉGIMEN JURIDICO DE LAS CORPORACIONES LOCALES

El señor PRESIDENTE: Volvamos atrás, a nuestro punto quinto del orden del día: Dictamen de la Comisión de Justicia e Interior, en relación con el proyecto de ley por el que se aprueban determinadas medidas sobre régimen jurídico de las Corporaciones locales. Se tramita por el procedimiento de urgencia.

Se han formulado diversos votos particulares a este proyecto de ley.

Señor Presidente de la Comisión de Justicia e Interior, sírvase decir a la Presidencia de la Cámara si se designó el senador exponente del dictamen.

El señor VILLAR ARREGUI: Señor Presidente, fue designado el senador Sánchez Reus.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sánchez Reus.

El señor SANCHEZ REUS: Señor Presidente, señoras y señores senadores, se trae a debate de este Pleno lo que en principio fue el Real Decreto-ley sobre Medidas de Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y que fue tramitado como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Una vez aprobado este proyecto por el Congreso de Diputados tiene su entrada en esta Cámara con fecha 3 de septiembre del presente año, ha-

biendo sido declarada su tramitación por el procedimiento de urgencia.

A este proyecto se presentaron en período hábil treinta enmiendas, cuyos firmantes fueron distintos grupos parlamentarios y algunos ilustres miembros de la Cámara. La Ponencia designada al efecto para redactar el informe lo realizó en una sola sesión de trabajo.

Tengo que poner de manifiesto ante esta Cámara la voluntad de entendimiento que en todo momento existió entre los miembros que formaban la Ponencia. De las enmiendas presentadas fueron admitidas e incorporadas al texto del proyecto cuatro de ellas por unanimidad de los ponentes, y así consta en el informe. Las restantes enmiendas fueron rechazadas, unas por unanimidad y otras por mayoría de los miembros que integraban la Ponencia.

La Comisión se reunió para elaborar el dictamen el día 21, es decir, el lunes pasado. Y, como consecuencia del debate en la misma, se acordó una nueva redacción del número 3 del artículo 17 del proyecto, al que habían sido presentadas, respectivamente, enmiendas por el Grupo Socialista del Senado y por el senador Fombuena, del Grupo de UCD. La nueva redacción fue aprobada por unanimidad de los señores senadores presentes en la Comisión. Durante el debate de la Comisión fueron retiradas 18 enmiendas y se mantuvieron, como votos particulares, otras 12. Uno de ellos, es decir, uno de estos votos particulares obedece a la enmienda «in voce» formulada en Comisión por el senador del Grupo Vasco señor Zabala y hace referencia a los artículos 5.º, número 2, y 8.º, números 2 y 4.

Y esto es cuanto tengo el honor de informar a SS. SS en la presentación de este dictamen.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Dado que existen votos particulares, procede consumir, si a ello ha lugar, un turno a favor y otro en contra y, en su caso, turno de portavoces respecto de la totalidad.

¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Sólo levanta la mano el señor Irizar. Tiene la palabra, por el Grupo Socialista del Senado, por un tiempo máximo de diez minutos.

El señor IRIZAR ORTEGA: Señor Presidente, señorías, se presenta hoy ante la Cámara un proyecto de ley que, indudablemente, es un

proyecto importante. Importante pese a que su vigencia va a ser muy breve —esperemos que así lo sea—, porque la Ley de Régimen Local (ipso facto y de una vez se discute!) ya está en el Congreso de los Diputados. Ha pasado ya un período de presentación de enmiendas y esperamos que pronto esté aquí y tengamos una Ley de Régimen Local.

Como SS. SS. saben, el decreto, llamado por los que manejamos habitualmente estos temas decreto-puente entre la vieja Ley de Régimen Local y la próxima y ya anunciada Ley de Régimen Local, lo que trata, en definitiva, es de adecuar algunas de las cuestiones que estaban bastante obsoletas en la legislación local al régimen nuevo, al régimen democrático, para que los ayuntamientos puedan funcionar bastante mejor.

Nosotros saludamos con bastante generosidad esta ley porque creemos que es buena, que mejora muchas cosas, aunque, desde luego, sigue manteniendo ciertas tutelas, ciertas cuestiones, que no son de nuestro agrado y que consideramos que siguen cercenando la autonomía de los municipios en la forma en que viene consagrada por la Constitución.

No obstante, entre el decreto, que fue aprobado, y el proyecto de ley tal y como ha salido del Congreso de los Diputados hay algunas mejoras importantes, sobre todo en lo que se refiere al régimen de suspensión de acuerdos de los ayuntamientos, que queda muy limitado, que queda prácticamente reducido a una suspensión cuando se dan concurrentemente dos circunstancias, que son: pertenecer a la esfera de competencia del Estado y que, además, sean manifiestamente ilegales.

Por otra parte, no se llega a una suspensión ya directa por parte del Gobierno ni del gobernador civil, como venía sucediendo, sino que hay un control judicial, y esto creemos que es importante. Ha sido mejorado por el Congreso de los Diputados, puesto que el proyecto tal como está vigente prevé un sistema de suspensión un poco más libre para los ayuntamientos y un poco menos complejo que el anterior, pero todavía con posibilidades de suspensión de acuerdos por el gobernador civil o por la Administración del Estado, si bien después es el gobernador civil, por delegación de la Administración del Estado.

Y esto ha quedado bien. Fueron aceptadas las enmiendas socialistas en el Congreso de los Diputados, y es un paso importante dentro de esta ley.

Esperemos que los defectos que tiene, a nuestro juicio, las limitaciones que todavía mantiene esta ley, con respecto a la autonomía municipal, queden subsanados totalmente en la próxima Ley de Régimen Local, que, desde luego, es absolutamente necesaria, puesto que la vida de los municipios es muy difícil manejándose con unas leyes pensadas para otra situación política y no para la situación democrática.

Por tanto, pese a que hemos formulado algunos votos particulares para oponernos a algunos puntos concretos de esta ley, sin embargo, creemos que es una ley positiva en su conjunto y que, en definitiva, es una ley que ya está ayudando y que va a ayudar al libre desenvolvimiento de los ayuntamientos democráticos.

El señor PRESIDENTE: Se entra seguidamente en el debate del artículo del dictamen. Los artículos 1.º y 2.º no han sido objeto de votos particulares. Procede, por tanto, someterlos directamente a votación. ¿Se puede hacer la votación conjunta? (Pausa.) ¿Se puede entender aprobados por asentimiento de la Cámara? (Pausa.) Se declaran, pues, aprobados los artículos 1.º y 2.º del dictamen de la Comisión.

Artículos
1.º y 2.º

El artículo 3.º tiene un voto particular del Grupo Socialista, en correspondencia con la enmienda número 18, que afecta al apartado 1, letra e) y postula su supresión.

Artículo 3.º

Por el Grupo Socialista, para la defensa del voto particular, tiene la palabra el señor Irizar por cinco minutos.

El señor IRIZAR ORTEGA: Se propugna con este voto particular la supresión de la letra e) del apartado 1 del artículo 3.º. Este artículo lo que viene a consagrar es una mayoría cualificada de dos tercios para determinados acuerdos de las Corporaciones locales. Entre las cuestiones para las que exige dos tercios está la municipalización o provincialización de servicios en régimen de monopolio.

Nosotros creemos que la exigencia de una mayoría cualificada de dos tercios para una cuestión que es una pura decisión política del equipo de gobierno del Ayuntamiento, una cuestión que puede ir en los programas electorales de los distintos grupos que después pueden acceder, supone cercenar esta facultad política que tienen los equipos de gobierno de los ayuntamientos porque, en definitiva, tienen que contar con la oposi-

ción para tomar una decisión que compete exclusivamente a aquel equipo de gobierno de un determinado ayuntamiento. Así como es razonable y justo el que se exija una mayoría de dos tercios para cuestiones de índole general, como la fusión de los municipios o la alteración del nombre del municipio —que, desde luego, no es una decisión que deba ser tomada alegremente por los que han ganado unas elecciones locales—, sin embargo, sí es preciso conservar que aquella facultad por parte de los que han ganado unas elecciones de que puedan llevar adelante su programa, de que puedan llevar adelante su política, no pueden ponerlo en práctica si no cuentan con la oposición.

Realmente, esto es una mayoría reforzada que no encontramos que tenga mucho sentido en unas Corporaciones que están compuestas por unas mayorías y unas minorías que, en definitiva, no tienen por qué participar y no deben participar en la decisión de cuestiones puramente políticas y puramente decisorias del equipo de gobierno del ayuntamiento.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

El senador Sánchez Reus, por el Grupo de UCD, tiene la palabra.

El señor SANCHEZ REUS: Señor Presidente, teniendo en cuenta que hay otro voto particular a este mismo artículo que corresponde a la enmienda número 19, presentada por el mismo grupo parlamentario, que es el Socialista, yo solicitaría de la Presidencia la contestación acumulada a estos dos votos particulares.

El señor PRESIDENTE: No hay inconveniente. En ese caso, se pasa al siguiente voto particular, efectivamente del Grupo Socialista, enmienda número 19, que afecta también al apartado 1, pero a su letra f), e igualmente postula su supresión.

El senador Lizón tiene la palabra para defender el voto particular.

El señor LIZON GINER: El voto particular del Grupo Socialista postula la supresión de esta letra y la supresión por la mayoría cualificada de dos tercios que establece la ley.

Cuando hicimos la defensa del porqué de nuestro voto particular en Comisión, se esgrimió teo-

ría y se hablaba de la protección del funcionario. Esta protección la tiene por las leyes. Pero es que además quienes debatían este asunto no pensaron que hasta la entrada en vigor de este decreto ley no se resolvía el problema por mayoría simple de dos tercios, sino por mayoría simple a propuesta del alcalde en los dos supuestos de separación de servicio y la propuesta de destitución.

Se olvidó que en ayuntamientos, que no tenían nada de democráticos, la simple mayoría era suficiente, tanto para separar como para proponer la destitución de un funcionario. Y resulta que llegan los ayuntamientos democráticos y se cambia la teoría y hace falta la mayoría de dos tercios. Es necesario examinar el porqué de la razón de este cambio.

Comprendo que en los ayuntamientos democráticos pueda ser que, por parte del Gobierno, haya un supuesto mayor de arbitrariedad de las minorías, o de las mayorías, que el que había antes cuando no eran ayuntamientos democráticos, y por tanto ahora, que hay ayuntamientos democráticos, el funcionario está más desprotegido que antes. Pero la filosofía de este aumento dos tercios se centraliza en el siguiente supuesto, y pregunto: Si la arbitrariedad de la mayoría simple de un ayuntamiento democrático, en la separación del servicio de un funcionario de la Corporación local, o en la propuesta de destitución de un funcionario de los Cuerpos Nacionales de la Administración local, puede ser una arbitrariedad, por el procedimiento que establece una ley esta posible arbitrariedad se puede trasladar a la minoría sin cuyo apoyo, y por simple arbitrariedad también, se puede impedir la separación de servicio y la propuesta de destitución. Y este es el planteamiento. Así de simple.

Entonces hay que hacer una reflexión política y es lo importante, porque esto concurre en un supuesto importante para la Administración local, parte importantísima de la Administración del Estado, parte importantísima de nuestro sistema democrático y así lo que se precisa es un mal funcionamiento de los ayuntamientos, porque no se puede tener a la arbitrariedad de la mayoría, y pasarlo a la arbitrariedad de la minoría en casos concretos, como puede ocurrir.

Considero que esta mayoría de dos tercios impide el funcionamiento normal de las instituciones, y de los ayuntamientos municipales en este caso concreto. Lo que me extraña mucho es el que el sistema empleado de criterio sea tan absur-

do que en un tema como éste, se pida mayoría de dos tercios, y en otro, como puede ser el ingreso en una organización internacional, en el cual hay un interés nacional, se quiera imponer por mayoría simple.

En política hay que tener criterios y hay que mantenerlos sucesivamente en todas las leyes. No se puede cambiarse en unas sí y en otras no, según sean unos los que tengan más y menos, porque esto trae consigo un mal funcionamiento de las instituciones y una imposibilidad de gobierno en una institución como es la Administración local, esencial y básica para el funcionamiento de nuestro país.

Espero que en la nueva ley se cambie de criterio. Lo que no admito, en ningún caso, es que una ley que ha estado hasta hace poco, cuando se publicó el decreto, con mayoría simple, ahora se diga en este debate que es un planteamiento para proteger al funcionario. El funcionario no sólo está protegido por la dignidad que deben tener los representantes elegidos de las Corporaciones locales, porque todos los políticos, mientras no se demuestre lo contrario, tienen un principio de dignidad, el día que se demuestre ya pagarán las consecuencias, y una mayoría es tan digna como pueda ser un funcionario, sus criterios son tan dignos, mientras no se demuestre lo contrario, y está la institución del Poder judicial para controlar las arbitrariedades que puedan cometerse con unos y otros. Por tanto, mantenemos nuestra enmienda.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor de este voto particular? (*Pausa.*) Tiene la palabra el senador Nadal.

El señor NADAL COMPANYY: Al haberse agrupado las dos enmiendas en un mismo tema...

El señor PRESIDENTE: Hubo turno a favor para la posibilidad de eubrirlo en relación con el voto particular anterior. Ahora es turno a favor de este voto particular. Distinto es que en turno de portavoces sí se ha acumulado. Su señoría puede reservarse el turno de portavoces.

El señor NADAL COMPANYY: Es igual, señor Presidente. Puedo hacerlo en el turno a favor.

El señor PRESIDENTE: Entonces S. S. va a consumir el turno a favor en este voto particular. Tiene la palabra para ello.

El señor NADAL COMPANYY: Señor Presidente, señorías, desde luego el hecho de tomar la palabra es puramente testimonial, pero no sería consecuente conmigo mismo después de haber batallado en diferentes oportunidades a favor de la autoridad del alcalde, del prestigio del alcalde y de la posibilidad de los ayuntamientos accedidos democráticamente al poder, no sería consecuente, repito, si ahora dejara pasar esta oportunidad sin decir algo al respecto.

No es descubrir ningún secreto, señoras y señores, el hecho de que en muchos ayuntamientos hasta hace muy poco, y aun ahora, los dueños parecen serlo los funcionarios y, particularmente, en muchos casos, el señor secretario.

Llegados al ayuntamiento los representantes populares, elegidos en las primeras elecciones municipales democráticas, se encontraron con la presencia de estos funcionarios; y estos funcionarios, habituados al sistema anterior en el que podían poner y disponer muchas veces a su antojo, dada la situación temporal en que se encontraban muchos de los ocupantes de las alcaldías, se han creído que las cosas continuaban igual, y en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, se han dedicado a obstaculizar la labor del alcalde.

Entonces, cuando el alcalde, en uso de su autoridad, con el fin de imponer orden y disciplina en su mandato, juntamente con la mayoría accedida al ayuntamiento por la vía democrática, ha intentado imponerse a estos funcionarios, dichos funcionarios, gozando simplemente del apoyo de alguna parte del consistorio tiene suficiente para hacer inoperante la autoridad del alcalde. Entonces, hay que buscar los dos tercios y esto prácticamente es imposible.

Hay que tener en cuenta siempre la oposición para una decisión de esta naturaleza y como muchas de las veces las decisiones de este tipo significan el ejercicio o no de la autoridad del alcalde, éstos se encuentran con que no pueden ejercer la autoridad y, por el contrario, la autoridad sigue siendo ejercida por parte de algunos de los funcionarios de los ayuntamientos. Y esto es grave.

Que no se diga con esto que tratamos de desproteger jurídicamente al funcionario; ni tratamos de desprotegerle jurídicamente, ni tratamos de desprotegerle laboralmente.

En el segundo de los aspectos, porque al primero luego me referiré, entendemos que el funcionario es un trabajador y, en todo caso, entendemos nosotros que debe quedar sometido a la legisla-

ción laboral en materia de trabajo; y, por consiguiente, acogido a esta legislación, tendría toda la protección necesaria. Pero en tanto no sea así, en tanto sea funcionario —y por tanto tenga que pasar por las vicisitudes de un expediente y, en su caso, por un contencioso— tampoco queda desprotegido, porque las leyes tienen vehículos procesales suficientes para que la protección al funcionario sea dispensada en toda su extensión.

Por consiguiente, hablar de desprotección del funcionario, hablar de que el funcionario queda sujeto a los vaivenes de la política, señoras y señores, es un argumento, pero no es un motivo que invalide el mayor argumento que supone la enmienda que introduce el Grupo Socialista, en el sentido de que para separar del servicio a los funcionarios sea la mayoría del consistorio, sin necesidad de acudir a los dos tercios, que es un recurso que, repito, haría inoperante el mandato del ayuntamiento. Nada más, señores.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Cabrera, por el Grupo Socialista Andaluz.

El señor CABRERA BAZAN: Señor Presidente, señorías, al margen de planteamientos ideológicos, hay una pura cuestión de técnica. Se trata de si con el criterio de los dos tercios se refuerza la estabilidad en el empleo de los funcionarios públicos, mientras que con el criterio de la simple mayoría se debilita esta estabilidad en el empleo.

Cualquiera que esté atento a la realidad sociológica del mundo laboral puede saber que hoy los funcionarios, o desde hace mucho tiempo ya, tienen una enorme tendencia hacia la laboralización de sus relaciones con el Poder público. Siendo así y resultando que hasta hoy la estabilidad en el empleo de los funcionarios públicos es muy superior a la de los trabajadores ordinarios por cuenta ajena sin relación de empleo público alguno, es lógico que esta estabilidad en el empleo también se laboralice, de alguna manera, y se descienda de ese criterio de los dos tercios a la simple mayoría que permita un mayor control del comportamiento y de la actitud de los funcionarios. Esto en primer lugar.

En segundo lugar, parece que es de todos conocido que esta enorme y firmísima estabilidad del empleo, de que han disfrutado durante tanto tiempo los funcionarios, es una de las causas que

motiva la falta de rentabilidad en el trabajo de la función pública, siendo así también que parece que la menos firmeza de la estabilidad del empleo de los funcionarios puede revertir en la mayor rentabilidad del ejercicio de la función pública, parece que el criterio de la simple mayoría debe primar sobre el de los dos tercios.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Irizar, del Grupo Socialista del Senado.

El señor IRIZAR ORTEGA: Quisiera precisar cuáles son las razones del Grupo Socialista que le mueven a presentar esta enmienda.

Por supuesto —y que nadie piense lo contrario— que no se trata en absoluto de ir contra los funcionarios locales, contra los funcionarios de las administraciones municipales y provinciales, puesto que, indudablemente, y los políticos que tenemos responsabilidades en los municipios lo sabemos muy bien, su concurso diario es necesario y tienen una dignidad igual que la que puedan tener los políticos que rigen en cada momento las Corporaciones locales. De lo que se trata es de tener y de fijar unos criterios de índole política.

¿Por qué razón en la incoación de un expediente o en la separación de un funcionario tienen que intervenir —y repito un poco los argumentos dichos en la enmienda anterior— la oposición? Son criterios del equipo de gobierno municipal, y si hay que abrir un expediente o proponer, que no es destituir, sino proponer la destitución, lógicamente este equipo de gobierno que está día a día trabajando en el ayuntamiento, es el que puede saber y el que tiene que saber si los funcionarios cumplen o no, si los funcionarios son merecedores de expediente o no. Porque la oposición, lógicamente, tiene otras funciones en el ayuntamiento; porque la oposición lógicamente no es la encargada de fiscalizar el trabajo de los funcionarios. La oposición, lo que hace es colaborar u oponerse, según las circunstancias, al equipo de gobierno municipal. Pero en absoluto tiene, ni puede controlar el trabajo de los funcionarios, del mismo modo que la oposición parlamentaria no controla el trabajo de los funcionarios al servicio de la Administración central del Estado. ¿O es que a alguien se le ha ocurrido pensar que para incoar un expediente a un funcionario de la Administración central del Estado, cuando sea merecedor de ello, hay que recurrir y acudir, de alguna forma, a la oposición? Realmente, esto no es pensable, y a nadie se le puede ocurrir.

No se trata, quiero repetir, en absoluto, de una enmienda contra los funcionarios de la Administración local. Se trata de satisfacer la legítima posibilidad que tiene el equipo del gobierno de controlar el trabajo de sus funcionarios.

Por otra parte, la arbitrariedad posible que pudiera cometerse en algún caso está perfectamente controlada porque es un acto administrativo sometido a la revisión de los tribunales. Y si un equipo de gobierno decide en una ocasión, de forma arbitraria, separar a un funcionario, éste puede perfectamente recurrir a los tribunales y hacer que sus derechos queden a salvo.

Mientras que, al revés, no ocurre así. Si es la oposición la que, por lo que sea, comete una arbitrariedad, ésta no vota a favor, y no se produce el acto administrativo y es realmente imposible de recurrir, puesto que al no producirse la incoación del expediente nadie va a recurrir, claro está, contra esa no producción de la incoación del expediente, y, entonces, la arbitrariedad puede, en un caso determinado, consumarse definitivamente sin que nadie tenga la posibilidad de recurrir.

Esta es la razón, y no otra, y que nadie piense que hay algo contra los funcionarios de la Administración local, porque yo tengo que reconocer, y lo hago personalmente, y lo digo en esta Cámara para evitar cualquier tipo de suspicacias, que los funcionarios han colaborado y siguen colaborando con los políticos que estamos en los ayuntamientos. Hay excepciones y cuando las hay, para eso están los expedientes.

El señor PRESIDENTE: El señor Sánchez Reus, por UCD, tiene la palabra.

El señor SANCHEZ REUS: Señor Presidente, señoras y señores senadores, antes de contestar directamente a los argumentos que aquí han sido expuestos en defensa de estos dos votos particulares, el 18 y el 19, que se refieren al artículo 3.º en sus distintos apartados, es decir, a la letra e) del número 1 y a la letra f) del mismo número, quisiera hacer algunas matizaciones.

No debemos perder, a lo largo de este debate en el Pleno, la idea y la seguridad de que estamos en presencia de un proyecto de ley que yo me atreví en Comisión a titular de coyuntural.

Pretende este proyecto de ley, única y exclusivamente, arbitrar y propiciar una serie de disposiciones dentro del ordenamiento jurídico, que permita a nuestras Corporaciones locales, sean

municipios o sean Diputaciones, la posibilidad de que, desde el punto de vista constitucional, puedan desarrollar esa tarea y esa labor que, reconocida en la Constitución a través de la autonomía que la misma establece para los municipios y para las Diputaciones, si se aplicara la legislación todavía en vigor, es decir, la vieja Ley de Régimen Local de 1955, haría en muchas ocasiones totalmente inviable e imposible que estos ayuntamientos o que estas Diputaciones, ya democráticas, pudieran cumplir con sus obligaciones y con sus compromisos.

Entendemos que se parte de supuestos que mejor es tratarlos con un carácter mucho más sosegado, con ocasión de esa ley que ya afortunadamente está en el Congreso de los Diputados, y que es la nueva Ley de Régimen Local. Estas palabras no son mías. Estas palabras son de nuestro ilustre compañero parlamentario, el señor Fajardo Spínola, «Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados», número 176, año 1981, página 10.598.

Entiendo yo y entiende mi grupo que muchos aspectos que, efectivamente, no reciben en esta ley el tratamiento que sería deseable por todos los representantes aquí de los distintos partidos políticos, deben ser tratados con el sosiego de un debate y de un análisis de un proyecto de ley, proyecto de ley fundamental e importante para la vida local.

Tengo también que poner de manifiesto ante esta Cámara que el párrafo e), que ha sido enmendado por parte del Partido Socialista, en el Congreso no se mantuvo ninguna enmienda por parte de ese grupo, y que en cuanto al apartado f), también objeto de enmienda defendida hoy por el grupo enmendante, el resultado de la votación en el Congreso fue el siguiente: a favor del texto que aquí pretende mantener UCD, 153 votos; en contra de ese texto, 28; abstenciones, 101. Esto por lo que se refiere a los antecedentes en la Cámara de la que nos viene el proyecto.

Las enmiendas pretenden, primero, la supresión del apartado e), que indica que será necesario el voto favorable de dos terceras partes del número de hecho de los miembros de la Corporación para la municipalización o provincialización de servicios en régimen de monopolio. Entendemos que esta decisión, que esa posibilidad de municipalización o provincialización de servicios en régimen de monopolio es conveniente, simplemente por seguridad y por garantía, que

sea adoptada por los dos tercios de los miembros de la Corporación.

Se ha puesto aquí de manifiesto el que si las mayorías y las minorías debían intervenir en el gobierno de una Corporación local, porque la ley así lo establece, necesariamente tienen que intervenir las mayorías y las minorías. Tendrán más responsabilidad las mayorías; las minorías actuarán como oposición, pero son corresponsables en las decisiones y acuerdos que se adopten, salvo que voten en contra y salven su voto en dichos acuerdos. Esto no debemos olvidarlo nunca.

Me ha sorprendido mucho la contradicción existente entre las palabras del señor Irizar, que ha manifestado que no tiene ninguna duda y ningún recelo en cuanto a la competencia de los funcionarios de la propia Corporación o de los funcionarios que pertenecen a los Cuerpos Nacionales, como son los secretarios, los interventores o los depositarios, con las palabras que, si no he tomado mal literalmente, porque no soy taquígrafo, ha pronunciado también nuestro ilustre compañero de Cámara, señor Nadal. Si no le entendí mal, ha dicho: «Los dueños de los ayuntamientos cuando llegan a dichos ayuntamientos, los representantes elegidos democráticamente, son los funcionarios y los secretarios».

Tengo que decir aquí en defensa de esos funcionarios y en defensa de esos secretarios que ni antes ni ahora, jamás, han pretendido ser los dueños de los ayuntamientos ni de las Diputaciones; de ahí que resalte y ponga de manifiesto esta contradicción.

Por todo lo expuesto, mi grupo va a votar en contra de estos dos votos particulares.

Muchas gracias.

El señor NADAL COMPANYY: Señor Presidente, pido la palabra por alusiones.

El señor PRESIDENTE: Señor Nadal, si el senador Sánchez Reus tiene que contestarle, naturalmente, tiene que nombrarle por su apellido, no por el del compañero. No hay lugar a alusiones.

El señor NADAL COMPANYY: Ha dicho Nadal.

El señor PRESIDENTE: Siéntese, por favor. No hay trámite de alusiones.

Se somete a votación el voto particular del Grupos Socialista, enmienda número 18.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 57 votos favorables; 78 contrarios; seis abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Socialista al artículo 3.º, enmienda número 18.

Se somete a votación el voto particular, también del Grupo Socialista, enmienda número 19, a este mismo artículo.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 57 votos favorables; 77 contrarios; siete abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 19, de este mismo artículo.

Se somete a votación el artículo 3.º. El senador Lizón tiene la palabra.

El señor LIZON GINER: Señor Presidente, deseáramos que en la votación del artículo 3.º se separara la parte que corresponde a las enmiendas 18 y 19; es decir, las letras e) y f).

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el texto que para el artículo 3.º propone el dictamen de la Comisión, con exclusión de las letras e) y f) del apartado 1. (*Pausa.*)

Por asentimiento de la Cámara queda aprobado el artículo 3.º del dictamen, con excepción de las letras e) y f) del apartado 1. Son ahora estas letras las que se someten a votación. ¿Conjunta o separadamente, senador Lizón?

El señor LIZON GINER: Conjuntamente, señor Presidente,

El señor PRESIDENTE: Conjuntamente letras e) y f) del apartado 1 del artículo 3.º del dictamen.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 84 votos a favor; 57 en contra.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las letras e) y f) del apartado 1 del párrafo 1 del artículo 3.º del texto del dictamen.

En el artículo 4.º sólo mantiene un voto particular el Grupo Socialista, correspondiente a su enmienda número 20, que afecta al apartado 1, letra a). ¿Portavoz del Grupo Socialista a efectos

Artículo 4.º

de voto particular? El senador Irizar tiene la palabra.

El señor IRIZAR ORTEGA: Señor Presidente, señorías, realmente la enmienda propuesta por el Grupo Socialista al apartado 4 fue objeto en Comisión de un debate amplio, de un acercamiento de posturas y casi casi fue aceptada, puesto que parecía que era razonable la enmienda propuesta respecto de este artículo.

Se trata de sustituir la expresión «con la antelación suficiente» por «veinticuatro horas», y el contexto donde se encuentra esta frase es en un precepto nuevo, no existente en la Ley de Régimen Local actual, que regula la posibilidad de que un tercio de los concejales pueda pedir un informe al secretario de la Corporación. Creemos que, sobre todo, de cara a Corporaciones pequeñas, es importante y que la existencia de este artículo garantiza, desde luego, la presencia de las minorías en los ayuntamientos.

Decimos esto porque los grupos municipales de los ayuntamientos no tienen normalmente asesores jurídicos o asesores técnicos que les puedan informar sobre la legalidad o ilegalidad, o sobre la conveniencia jurídica de los acuerdos a tomar. Y como no tienen estos asesores, lo lógico es que el secretario de la Corporación asesore a unos y a otros. Aquí sí estamos de acuerdo en que el secretario de la Corporación debe asesorar, refiriéndome sobre todo a ayuntamientos pequeños, al equipo municipal de gobierno y a la oposición.

Y esto está previsto precisamente para eso, para garantizar el asesoramiento técnico de la oposición, que normalmente puede exigir, puede pedir con un determinado tiempo, «con la antelación suficiente» dice la ley, un asesoramiento jurídico al secretario de la Corporación. Y esto es positivo que conste en este artículo, porque tiene que pedirlo un tercio de concejales y es normal que este tercio corresponda a la oposición.

Pero resulta que el artículo lo que nos dice es que este informe debe pedirse con la antelación suficiente, y no sabemos cuál es la antelación suficiente, y esto sí puede conducir a las arbitrariedades del presidente de la Corporación.

Yo referí en Comisión una anécdota personal de que, a los pocos días de entrar en vigor este decreto-ley —que no debemos olvidar que al haberse aprobado como tal ya está en vigor, aunque no redactado exactamente igual, pero sí en este párrafo—, haciendo uso de esto, al comenzar un

Pleno municipal en mi ayuntamiento, siete miembros de Coalición Democrática —la oposición allí— solicitaron un dictamen del señor secretario, un dictamen complicado, cuando ya iba a comenzar en pocos minutos el Pleno. Por supuesto, su intención era exclusivamente dilatar. Aquel dictamen, concretamente, era un dictamen sobre si estaba el Ayuntamiento de Guadalajara dentro del plazo para solicitar la incorporación al proceso autonómico de Castilla-la Mancha. El Ayuntamiento de Guadalajara se pronunció cuando quedaban veinticuatro o cuarenta y ocho horas para finalizar el plazo, y había una discusión —que todavía persiste— sobre si estaba o no dentro de plazo. Pero, en fin, esto es otro tema. A este efecto se solicitó el dictamen jurídico. Realmente se pretendía dilatar el Pleno, y yo tuve que decidir que no había la antelación suficiente, que la antelación suficiente debía ser algo más, no unos minutos antes de celebrarse el Pleno; pero eso no lo dice la ley, y tuvo que ser una decisión de la Alcaldía, por supuesto sujeta a recurso y que puede ser controvertida, y no sabemos qué dirían nuestros tribunales sobre cuál era la antelación suficiente, si veinticuatro, doce o diez horas. Y ésa es la razón de la enmienda.

Nuestra enmienda pretende únicamente que se fije cuál es la antelación suficiente: veinticuatro horas. Como los Plenos deben convocarse, por imperativo legal, con cuarenta y ocho horas de tiempo, los que reciben la convocatoria tienen veinticuatro horas para solicitar del señor secretario el informe que proceda, y éste tiene otras veinticuatro horas para emitirlo, y se acaban los problemas.

La ley es bueno que llegue al detalle donde debe llegar, y que no deje a la arbitrariedad del presidente de la Corporación, que puede decir que no hay nunca la antelación suficiente, o no saber en un momento determinado qué decidir o puede ser sometido a un recurso innecesario totalmente.

Es una enmienda que no tiene ningún matiz político, sino puramente técnica, y solamente viene a facilitar el funcionamiento de las Corporaciones locales.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

El señor Sánchez Reus, por el Grupo UCD, tiene la palabra.

El señor SANCHEZ REUS: Señor Presidente, señoras y señores senadores, nos encontramos aquí ante un tema que podríamos denominar de bizantino: ¿cuál debe ser la antelación suficiente? ¿Qué criterios deben existir para determinar si deben ser cinco, veinticuatro ó treinta y seis horas?, etcétera.

Es cierto lo que ha iniciado el senador que me ha precedido en el uso de la palabra sobre que los plenos ordinarios normalmente tienen que convocarse con cuarenta y ocho horas de antelación, pero estamos ante una situación que yo me atrevo a calificar de excepcional y donde precisamente con el texto que nos viene dado por el proyecto que nos ha remitido el Congreso de los Diputados, la figura del alcalde, la responsabilidad en este sentido también de quien ostenta la representación de la Corporación, tenga en cierto modo esa servidumbre de tener que asumir la carga de decidir si efectivamente el dictamen se ha pedido o no con la antelación suficiente.

El ejemplo práctico que S. S. ha vivido yo lo creo absoluta y totalmente, pero puede haber muchos otros ejemplos prácticos como son los de que se pueda pedir un informe al secretario o al interventor, en su caso, y que en el plazo de dos horas puedan emitir ese informe. Sin embargo, por la complejidad del tema o por lo enrevesado que puede estar el asunto para el que se pide el dictamen, en algunas ocasiones quizá no basten las veinticuatro horas y sean precisos tres días, y si ese funcionario no es un buen funcionario y un responsable de la función pública que ha asumido, no será necesario que le exijan dedicarle tres o cuatro días de atención para poder emitir ese informe que se solicita.

De ahí que creamos que es más conveniente dejar el texto según nos ha venido del Congreso de los Diputados, donde se trata simplemente, repito, de trasladar una responsabilidad y una carga a la decisión del presidente de la Corporación, ya que, en definitiva, el fijar un plazo determinado es totalmente discutible, por estas razones anteriormente expuestas y porque creemos que queda mejor el artículo con la frase «antelación suficiente» para que sea el presidente de la Corporación quien en su caso decida si efectivamente se ha producido o no con la antelación suficiente; por estas razones anuncio a SS. SS. que mi grupo votará en contra de este voto particular.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación

el voto particular del Grupo Socialista al artículo 4.º.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 56; votos en contra, 73.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 20, al artículo 4.º.

Se somete a votación el texto del dictamen. ¿Alguna observación sobre esta votación? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Lizón.

El señor LIZON GINER: Pedimos que se separe de la votación el punto a) del apartado 1.º del artículo 4.º, que ha sido objeto de nuestro voto particular.

El señor PRESIDENTE: Se somete, pues, a votación el artículo 4.º, con excepción del punto a) del apartado 1.º, del artículo 4.º.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 75; abstenciones, 54.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 4.º del texto del dictamen, con excepción del punto a) del apartado 1.º del artículo 4.º.

Resta votar este punto a) del apartado 1.º del artículo 4.º.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 73; en contra, 56.

El señor PRESIDENTE: Aprobado el punto a) del apartado 1.º del artículo 4.º del dictamen por 73 votos a favor y 56 en contra.

Artículo 5.º. Voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 22, que postula la supresión de la letra d) del apartado uno. El señor Lizón tiene la palabra.

Artículo 5.º

El señor LIZON GINER: Señor Presidente, retiramos esta enmienda y renunciamos a su defensa.

El señor PRESIDENTE: Sin votación, por consiguiente. Por retirado el voto particular a que se ha hecho referencia. El siguiente es del senador Zavala Alcibar, enmienda «in voce» formulada en Comisión y reservada por el voto particular

número dos, que afecta al apartado dos del artículo 5.º. El senador Zavala tiene la palabra para defender su voto particular.

El señor ZAVALA ALCIBAR: Señor Presidente, señoras y señores senadores, voy a hacer la defensa de los tres votos particulares, pues tienen una misma razón de ser, aunque están en artículos distintos. Es decir, uno es al artículo 5.2 y los otros dos al artículo 8.2 y al artículo 8.4.

Las razones en que fundamos nuestros votos particulares son razones de coherencia. Partimos del principio de que el proyecto sobre el Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales debe de respetar la realidad jurídica existente. Hoy en día existen unas Comunidades Autónomas que, en sus Estatutos, han asumido, conforme al artículo 149.3 de la Constitución, competencias sobre la Administración local.

Quizá el dictamen de la Comisión —puede ser que debido muchas veces a la urgencia del procedimiento seguido— no haya tenido en cuenta la totalidad de esta realidad jurídica de las Comunidades Autónomas hoy establecidas y por eso puede haber, en este proyecto, una cierta incoherencia; pues si bien contempla este nuevo estatus jurídico en el artículo 15 y en la Disposición final quinta, no lo hace en estos artículos 5.2, 8.2 y 8.4 que son objeto de nuestros votos particulares.

En el artículo 15 del proyecto de ley dice que las Corporaciones locales remitirán copia de los presupuestos aprobados, de sus modificaciones, liquidaciones y, en su caso, de las reclamaciones o recursos formulados a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma correspondiente.

Los votos particulares que presentamos no hacen otra cosa que recoger lo que establece el artículo 15 para los presupuestos y extenderlo a los artículos 5.2, 8.2 y 8.4, en el sentido de que los acuerdos de las Corporaciones locales sean comunicados, además de a la Administración del Estado, a las Comunidades Autónomas, pudiendo solicitar ampliación de los datos, como dice el número cuatro del artículo 8.º, referentes a los actos o acuerdos adoptados.

La disposición final quinta dice que las facultades de impugnación atribuidas por esta ley a la Administración del Estado corresponderán a las Comunidades Autónomas, en relación con las competencias que hayan asumido, de acuerdo con lo establecido en sus respectivos Estatutos de

Autonomía. La impugnación deberá ejercitarse —dice el artículo 8.3— dentro de los seis días de la comunicación del acuerdo.

Ahora nos preguntamos: ¿Cómo las Comunidades Autónomas podrán ejercitar el derecho de impugnación que les reconoce la Disposición final quinta, si no se les comunica oficialmente el acuerdo objeto de la impugnación? Aquí es donde nosotros encontramos una incoherencia o una contradicción entre estas Disposiciones.

Por eso, si para algo estamos en esta Cámara Alta creo que es para mejorar, para perfeccionar las leyes. Eso es lo que pretendemos hacer con estos votos particulares que no hacen otra cosa sino dar, creo yo, una mayor coherencia a este proyecto de ley que ahora hemos de votar.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.) ¿Portavoces? (Pausa.)

El senador Sánchez Reus, por el Grupo de UCD, tiene la palabra.

El señor SANCHEZ REUS: Señor Presidente, señoras y señores senadores, desconozco totalmente cuál pueda ser reglamentariamente el procedimiento, pero dentro de los votos particulares que han sido defendidos por mi precesor en el uso de la palabra, y en relación al que se refiere al número 2 del artículo 5.º, se ha formulado una propuesta de nueva redacción que sería, en principio, asumida —si no he entendido mal— por todos los grupos que tienen representación en la Cámara.

No sé si es este el momento en que se puede anunciar esta redacción nueva.

Señor senador Zavala: el voto particular derivado de su enmienda «in voce» al número 2 del artículo 5.º de este proyecto de ley proponía añadir al número 2 de los acuerdos de las Corporaciones locales que versen sobre materias que se refieren al número anterior: «deberán ser comunicadas a la Administración del Estado, dentro del plazo de treinta días.» La propuesta de su voto particular es añadir el inciso «deberán ser comunicados a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma y dentro del plazo de treinta días».

Pues bien, la fórmula propuesta es la siguiente: «Deberán ser comunicados a la Administración del Estado o al órgano correspondiente a la Comunidad Autónoma en relación con las compe-

tencias que aquélla haya asumido dentro del plazo de treinta días a partir del siguiente a la fecha de su adopción.»

Huelga, naturalmente, explicar cuál es la razón de esta redacción que ha sido asumida por todos, que es, simplemente, contemplar el hecho real y actual de que muchos territorios del Estado todavía no tienen Estatuto o no han asumido competencias en materia de Administración local, con lo cual creemos que esta readacción queda salva.

Anuncio, en principio, el voto a favor de este texto, cuyo origen es la enmienda «in voce» presentada por el senador del Grupo de Senadores Vascos señor Zavala, con el texto que les acabo de leer.

El señor PRESIDENTE: Realmente, en la lectura que se ha dado del texto presentado con la firma de los portavoces de los grupos de la Cámara por el senador Sánchez Reus, éste lo hacía también en su condición de Secretario de la Mesa. Por consiguiente, era fedatario de que el escrito viene reglamentariamente cursado con la firma —repito— de todos los portavoces, y, por consiguiente, ajustado a las normas que en su día dictó la Presidencia para permitir esta posibilidad de enmiendas sobre enmiendas «in voce» en el curso del debate en plenario, siempre que, como en este caso, concurra la conformidad de la totalidad de los portavoces.

Así pues, resta, retirado el voto particular del Grupo Socialista al artículo 5.º, someter a votación el voto particular del senador Zavala Alcibar que ya lo es en relación con el texto a que ha dado lectura el senador Sánchez Reus.

Tiene la palabra el senador Sánchez Reus

El señor SANCHEZ REUS: Para una cuestión de orden, señor Presidente.

Me parece que el señor Zavala ha defendido también sus enmiendas a los apartados 2 y 4 del artículo 8.º como voto particular.

El señor PRESIDENTE: Así ha sido.

El señor SANCHEZ REUS: Entonces, yo no he intervenido para oponerme precisamente.

El señor PRESIDENTE: En su oportunidad tendrá traslado.

Repito que se somete a votación el voto parti-

cular del senador Zavala con la nueva redacción que consta en el texto a que ha dado lectura el senador Sánchez Reus que figura en texto suscrito por todos los portavoces de la Cámara.

¿Votos a favor? (Pausa.)

Queda aceptado por asentimiento de la Cámara el voto particular del senador Zavala Alcibar en la redacción dada al mismo según el texto a que se ha dado lectura por el señor Sánchez Reus, con la firma de todos los portavoces. En consecuencia, se introduce esta modificación en el apartado 2 del artículo 5.º del dictamen. Procede ahora someter a votación en su totalidad el texto del dictamen de la Comisión, con la modificación procedente de la enmienda o voto particular aceptado por la Cámara anteriormente.

Señores senadores que votan a favor. (Pausa.)
Queda aprobado el artículo 5.º del dictamen, por asentimiento de la Cámara.

Al artículo 6.º hay un solo voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 23, que afecta el apartado 2. Tiene la palabra el senador Lizón.

Artículo 6.º

El señor LIZON GINER: Señor Presidente, señorías, nuestra enmienda al último apartado del artículo 2.º intentaba ser una enmienda en cierta manera clarificadora y que limitara la expresión «legislación aplicable» a algo más concreto. En la Comisión estuvimos a punto de que fuera si no aceptada nuestra enmienda, que habla de Administración del Estado, cambiado el término «legislación» por «leyes aplicables» en la Ley de Presupuestos Generales.

Naturalmente, el término «legislación» es amplio y ambiguo, y nosotros estimamos que la contratación directa de los ayuntamientos, como era una facultad de la Administración local, tendría que ser siempre limitada o establecida por aquellas Disposiciones legales que tuvieron rango de ley y no por otras, y este era el planteamiento básico de nuestra enmienda.

Naturalmente, esto difiere también de lo mantenido en el Congreso.

A mí me sorprendió la teoría a la inversa utilizada por el senador Sánchez Reus cuando hablaba, por ejemplo, de que nuestra enmienda defendida anteriormente no había sido defendida en el Congreso. Naturalmente. Hay dos Cámaras, esta Cámara de segunda lectura puede permitirse también la reflexión y el mejoramiento de las leyes, y a pesar de los criterios políticos, en el as-

pecto técnico, ya más profundizado en esta Cámara, se pueden proponer enmiendas que no se han propuesto en el Congreso o que cambian, en cierta manera, algunos criterios de aquél. Esta ha sido la teoría sustentada por los portavoces de Unión de Centro Democrático en el Senado, y me extraña mucho que se nos devuelva a la inversa en este momento. Como he dicho anteriormente, era simplemente dar claridad al precepto.

Yo creo que en la contratación de la Administración local cualquier norma que limite, amplíe, determine o fije debe tener el rango de ley, y la expresión «legislación aplicable» es un término ambiguo que puede dar lugar a otras disposiciones que, sin rango de ley, limiten esas facultades.

Por tanto, solicitamos el voto a favor, aunque no creo que lo consigamos, porque ya no se concedió en Comisión.

El señor PRESIDENTE: Turnos a favor. *(Pausa.)* Turnos en contra. *(Pausa.)* Portavoces. *(Pausa.)* Tiene la palabra el senador Sánchez Reus, por el Grupo Parlamentario de UCD.

El señor SANCHEZ REUS: Señor Presidente, señorías, efectivamente, estoy de acuerdo con el señor Lizón en que dentro de la normativa peculiar y propia de cada Cámara, lógicamente, las distintas fuerza políticas que en el Senado tienen representación puede modificar sus criterios respecto a los que sus homólogos grupos parlamentarios hayan podido mantener en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, en un 90 por ciento, me atrevería a afirmar, de los casos existe una coherencia entre los planteamientos que se formulan en el Congreso de los Diputados por los homólogos grupos parlamentarios con los que también se formulan en el Senado, lo que no quiere decir que una y otra Cámara no sean independientes y que, efectivamente, cada uno tenga su autonomía.

Si ha habido algún grupo parlamentario que ha defendido, y en alguna ocasión siendo mal entendido, la autonomía y el protagonismo que debía tener el Senado como Cámara colegisladora y también con su iniciativa legislativa, ha sido precisamente el Grupo Parlamentario de UCD en esta Cámara; y ello es lógico y es sencillo, y que la oposición no vea en mis palabras nada más que la afirmación de una realidad: siendo precisamente el partido que sustenta al Gobierno, es decir, la UCD, el mayoritario en el Senado, es lógico que

pretendamos que el Senado tenga un protagonismo. También es lógico que por determinadas fuerzas o grupos de la oposición en algunas ocasiones se haya tratado de restar este protagonismo a la Cámara Alta.

Y hecha esta aclaración, respecto a esta enmienda al artículo 6.º —y lamento tener que referirme al Congreso de los Diputados— tal y como estaba el texto que nos ha venido del Congreso de los Diputados (256 síes, 17 noes, cero abstenciones). Bien, durante el debate en Comisión se ofreció un texto alternativo, se debatió este texto, hubo buena voluntad, lo mismo que en Ponencia hubo voluntad de entendimiento, de superación, por todos los representantes en Comisión, pero no fuimos capaces de llegar a un texto que fuera asumido y aprobado por todos.

Esto hizo que los representantes del Partido Socialista en Comisión mantuvieran esta enmienda como voto particular y que, lógicamente, si no estábamos totalmente de acuerdo con ese texto, la mayoría, es decir, los representantes de UCD votáramos en contra en Comisión. Exactamente igual vamos a hacer en este Pleno; porque entendemos que este artículo 6.º, en su apartado 2, tal y como viene redactado en estos momentos ofrece todas las seguridades y todas las garantías, y está perfectamente coordinado y entroncado con todo nuestro ordenamiento jurídico, es decir, que en ningún caso podrá superarse el límite establecido para la contratación directa en la legislación aplicable para la Administración del Estado.

Si existen unos criterios para la contratación directa por la Administración del Estado, en esta ley, vuelvo a decir, e insisto en que tiene un carácter transitorio, porque ya está en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Régimen Local, no hay por qué devanarse los sesos buscando unas fórmulas más sofisticadas, excesivamente meticulosas, cuando esto va a tener un carácter transitorio y cuando sólo se pretende con este proyecto de ley y con la redacción del número 2 de este artículo 6.º que quede perfectamente asegurado y garantizado en cuanto al pequeño control de la posible contratación directa, sin mermar para nada la autonomía de las Corporaciones locales.

Por todo ello vamos a votar que no a este voto particular. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el voto particular al artículo 6.º del Grupo Parla-

mentario Socialista, enmienda número 23, que afecta al apartado 2. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 51; en contra, 79.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista al artículo 6.º.

Para votar el texto del artículo 6.º, ¿se pedirá que se vote separadamente el punto 2?

Un señor SENADOR: Efectivamente, el Presidente ha adivinado mis intenciones.

El señor PRESIDENTE: Me congratulo. Se somete a votación el apartado 1 del artículo 6.º del texto del dictamen. (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento de la Cámara el apartado 1 del artículo 6.º.

Se somete a votación el apartado 2 del artículo 6.º del dictamen. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 77; en contra, 51.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el apartado 2 del artículo 6.º del dictamen.

Artículo 7.º El artículo 7.º no ha sido objeto de votos particulares. Procede, por tanto, someterlo directamente a votación. ¿Se puede entender aprobado por asentimiento de la Cámara?

El senador Sánchez Reus tiene la palabra.

El señor SANCHEZ REUS: Para una cuestión de orden. Según los datos que obran en mi poder, la redacción de este artículo 7.º que viene como dictamen de la Comisión no es totalmente exacta, porque fue admitida por unanimidad una enmienda que presentó el senador Fombuena y que modifica la redacción de este texto.

El señor PRESIDENTE: Pues si no tiene inconveniente, ¿quiere leer la redacción del artículo 7.º según dictamen de la Comisión?

El señor SANCHEZ REUS: Vamos a ver si de estas notas puedo sacar el texto. Pretendía la enmienda sustituir la frase «sin perjuicio de su ulterior conocimiento por el Pleno de la Corporación» por «debiendo dar conocimiento al Pleno de la Corporación». Es decir, al final del artículo,

donde dice «de 6 de octubre, debiendo dar conocimiento al Pleno de la Corporación».

El señor PRESIDENTE: Sí, ciertamente en la publicación correspondiente al informe de la Ponencia figura: «Al artículo 7.º se ha presentado la enmienda número 10 del señor Fombuena Escudero que sustituye el inciso “sin perjuicio de su ulterior conocimiento por el Pleno de la Corporación”, por “debiendo dar conocimiento al Pleno de la Corporación”. Y se dice: “La Ponencia acepta por unanimidad esta enmienda por mejorar la redacción del precepto”».

El señor SANCHEZ REUS: Y así se aceptó en Comisión, porque no hubo debate ni discusión.

El señor PRESIDENTE: ¿El senador Fombuena va a añadir algo más?

El señor FOMBUENA ESCUDERO: Una cuestión de orden. Es que parece que ha habido un error. Ha sido cortado el artículo con respecto al texto remitido por el Congreso de los Diputados. En la última frase se decía, a continuación de Corporación, «en la primera sesión que se celebre». Después de haber consultado con los ponentes, parece que esto se ha debido a un error, sin duda motivado por la aceptación de mi enmienda.

Si me permite la Presidencia, el texto se remarcaría diciendo: «Debiendo dar conocimiento al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre».

El señor PRESIDENTE: El texto del dictamen publicado dice literalmente para el artículo 7.º: «Los presidentes de la Corporaciones locales podrán ejercer las facultades excepcionales que en materia de contratación establece el artículo 114 del texto articulado parcial de la Ley 41/75, aprobado por Real Decreto 3046/77, de 6 de octubre, debiendo dar conocimiento al Pleno de la Corporación».

El señor FOMBUENA ESCUDERO: Exactamente, señor Presidente, lo que pasa es que en el texto remitido por el Congreso a continuación venía la frase...

El señor PRESIDENTE: Pero no es lo que ha dicho el senador Sánchez Reus.

El señor FOMBUENA ESCUDERO: Eso es lo que pongo de manifiesto, que ha sido un error.

El señor PRESIDENTE: Queda sin efecto la observación del señor Sánchez Reus y está correctamente en cuanto a la admisión de la enmienda propuesta por el senador Fombuena. Lo que ahora aclaramos es que hay una omisión en cuanto al final del texto remitido por el Congreso de los Diputados.

El señor FOMBUENA ESCUDERO: Exactamente.

El señor PRESIDENTE: Hubiera sido más procedente una adecuación de las intervenciones.

En definitiva, el texto para el artículo 7.º, que es el que va a someterse a votación, queda tal y como yo lo he leído, añadiendo además «en la primera sesión que se celebre».

En estas condiciones y en estos términos, ¿se puede entender aprobado por asentimiento de la Cámara el texto que para el artículo 7.º propone la Comisión? (*Asentimiento.*) Así se declara.

Artículo 8.º Artículo 8.º. Tiene dos votos que ya fueron defendidos por el senador Zavala Alcívar. Ambos afectan a los apartados 2 y 4, respectivamente. ¿Turnos a favor? (*Pausa.*) ¿Turnos en contra? (*Pausa.*) ¿Turno de portavoces? (*Pausa.*)

El senador Sánchez Reus tiene la palabra y si le es posible fije la posición de su Grupo en relación a los dos votos particulares, puesto que conjuntamente fueron defendidos.

El señor SANCHEZ REUS: Señor Presidente, señorías, en relación con estos votos particulares relativos al número 2 del artículo 8.º y al número 4 del mismo artículo, entendemos que no procede admitirlos, porque la Disposición final 5.ª ya contempla que las facultades de impugnación atribuidas por la presente ley a la Administración del Estado «corresponderán a las Comunidades Autónomas, en relación con las competencias que hayan asumido, y de acuerdo con lo establecido en sus respectivos Estatutos de Autonomía...». Entendemos que al hablar esta Disposición final 5.ª de la facultad de impugnación se está refiriendo al artículo 8.º, y en este artículo 8.º no solamente hay que contemplar su número 1, sino los números 2, 3 y 4, donde entendemos que si efectivamente ha habido transferencias, o los Estatutos así lo contemplan, esas facultades de

impugnación que se señalan en sentido general a favor de la Administración del Estado, donde hayan sido asumidas por las Comunidades Autónomas, serán los órganos de estas Comunidades que tengan competencia para ello quienes tengan la facultad de impugnar.

Por eso entendemos que no es preciso introducir esta enmienda o este texto que se propone para los números 2 y 4 del artículo 8.º y anunciamos que vamos a votar en contra.

Gracias

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación, en primer lugar, el voto particular del senador Zavala Alcívar, enmienda «in voce» formulada en Comisión y que afecta al número 2 del artículo 8.º.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: siete votos a favor; 70 en contra; 54 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del senador Zavala al número 2 del artículo 8.º.

Seguidamente se somete a votación el siguiente voto particular del senador Zavala al número 4 del mismo artículo 8.º.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: siete votos favorables; 71 en contra; 54 abas-tenciones.

El señor PRESIDENTE: Rechazado el voto particular del senador Zavala al número 4 del artículo 8.º.

Senador Zavala: ¿desea, en nombre de su grupo, que se voten separadamente los números 2 y 4? (*Asentimiento.*)

Se somete a votación el texto que para el artículo 8.º, en sus números 1 y 3, propone el dictamen de la Comisión. ¿Se pueden declarar aprobados por asentimiento de la Cámara? (*Asentimiento.*)

Se declaran aprobados por asentimiento.

Se somete conjuntamente a votación los números 2 y 4 del texto del dictamen.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 124 votos favorables; siete contrarios.

El señor PRESIDENTE: Aprobados los números 2 y 4 del artículo 8.º del texto del dictamen.

Artículo 9.º El artículo 9.º no ha sido objeto de voto particular. Procede, por tanto, someterlo directamente a votación. ¿Hay asentimiento respecto de su aprobación? *(Pausa.)*

Se declara aprobado por asentimiento de la Cámara.

Sigue un voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 24, que postula la adición de un nuevo artículo, que sería el 9.º bis.

¿Portavoz del Grupo Socialista? *(Pausa.)* Tiene la palabra el senador Irizar.

El señor IRIZAR ORTEGA: Pretende la enmienda añadir un artículo, el 9.º bis, que realmente lo único que va a hacer es eliminar una más de las tutelas de la Administración central sobre la Administración local o Corporaciones locales.

Realmente, la enmienda así formulada lo que pretende es que desaparezca la tutela en la aprobación de los proyectos de urbanización atribuida a las Comisiones Provinciales de Urbanismo. Es lamentable ver que una Corporación local trabaje en un plan de urbanismo, lo apruebe inicialmente, lo apruebe provisionalmente y no lo pueda aprobar definitivamente, porque lo dice así la Ley del Suelo, hasta que no le haya dado su aprobación la Comisión Provincial de Urbanismo. Esto, desde luego, es anacrónico; esto, desde luego, es un ataque a la autonomía local.

Se nos va a decir que ya la Ley de Régimen Local —a que nos hemos referido varias veces y que está en el Congreso de los Diputados— va a eliminar esta tutela, pero, al igual que este decreto y esta ley eliminan otras tutelas importantes, creemos que también tenemos el deber de eliminar ésta en un momento en el que, además, muchos ayuntamientos están revisando sus planes de urbanismo, están, en definitiva, adaptándolos a los nuevos criterios democráticos de las Corporaciones.

Esto es importante y sería una manera de demostrar que la autonomía local no solamente es querida por unos, sino por todos. Nos gustaría que se votase a favor de esta enmienda, que también es una enmienda presentada en el Congreso —no todas las enmiendas que se han defendido aquí fueron presentadas en el Congreso—. El señor Sánchez Reus se ha referido antes a que el Grupo Socialista repite muchas veces las enmiendas, pero nosotros queremos decir que ello demuestra la coherencia del partido, que mantiene

los mismos criterios tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, cosa que desde luego no ocurre con otros grupos políticos.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? *(Pausa.)* ¿Turnos en contra? *(Pausa.)* ¿Portavoces? *(Pausa.)*

El señor Villar Arregui tiene la palabra, por el Grupo de UCD.

El señor VILLAR ARREGUI: Gracias, señor Presidente. No quiero extenderme en la oposición a esta enmienda, hoy voto particular, porque parecen obvias las razones que aconsejan no introducir el nuevo texto que el Grupo Socialista propone.

El concepto de autonomía que la Constitución predica respecto de las Corporaciones locales, de las provinciales y de las Comunidades Autónomas, está íntimamente unido al concepto solidaridad. Véase, por ejemplo, el artículo 2.º de la Constitución. No se confunda la tutela con la colaboración. Piénsese que en el ámbito del territorio nacional hay no menos de nueve mil municipios, regidos por sus respectivos ayuntamientos. Piénsese que una de las lacras que ha hecho menos fácil la calidad de la vida ha consistido, según reiterada y unánime denuncia, en la anarquía en materia de urbanismo.

Deferir a la exclusiva competencia de las Corporaciones municipales la aprobación definitiva de los planes de urbanismo podría poner en peligro la calidad de vida de esos ciudadanos por falta de los elementos técnicos necesarios para la debida formulación del plan. Entonces, la Comisión Provincial de Urbanismo, que no es órgano de desconcentración de la Administración del Estado, sino que tiene una composición mixta parcialmente representativa, con la presencia de las diferentes administraciones públicas en ella, tiene los medios necesarios para ajustar los planes a las exigencias normativas contenidas en la Ley del Suelo.

Es verdad que la Ley de Régimen Local, cuyo proyecto está en el Congreso de los Diputados, desvanece esta pretendida tutela, que puede entenderse no tanto como tal cuanto como colaboración de una Administración con otra en el logro del interés general que a todas concierne, pero no lo es menos que se trata de una ley básica, es decir, de una ley dictada al amparo del artículo 149.1-18 de la Constitución, y que las Comuni-

dades Autónomas tienen competencia normativa para imponer a los ayuntamientos comprendidos dentro de su jurisdicción otras determinadas condiciones.

En definitiva, se rechaza el concepto de tutela, que con razón reprocha el señor Irizar, se reconoce el principio de autonomía y, en nombre del principio de solidaridad entre las diferentes administraciones públicas, se mantiene la necesidad de no incorporar al texto el proyecto que el Grupo Socialista ofrece.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 24, solicitando la adición de un nuevo artículo al texto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 54 votos favorables; 75 contrarios; dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 24.

Otro voto particular del Grupo Socialista, correlativo a su enmienda número 25, propone asimismo la adición de un nuevo artículo, cuyo texto está publicado. El senador Lizón tiene la palabra.

El señor LIZÓN GINER: Para retirar el voto particular sin necesidad de que se pase a votación.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Por retirado.

Artículo 10. Un único voto particular, del Grupo Socialista, enmienda 26, que afecta al párrafo segundo del apartado 3.

Tiene la palabra el señor Irizar, como portavoz, para defender el voto particular.

El señor IRIZAR ORTEGA: Realmente se trataría de repetir los mismos argumentos que ya se expusieron en la defensa de la enmienda anterior.

Si la enmienda anterior tenía por objeto adicionar un nuevo artículo con el fin de suprimir algunas tutelas de la Administración Central, la enmienda actual pretende exactamente lo contrario, pero con el mismo fin: suprimir un artículo que consagra algunas tutelas de la Administra-

ción central sobre la Administración local. El fin es el mismo.

Nosotros, en realidad, lo que pretendemos es que la tutela sea exclusivamente reducida a los mínimos, que no haya estas tutelas donde no debe haberlas, que se reconozca de una vez la mayoría de edad de las Corporaciones locales, puesto que son autónomas y porque el texto constitucional así lo dice.

El fin de la enmienda es el mismo y no voy a repetir todos los argumentos que ya conocen SS. SS. sobradamente y que han sido manejados durante el Pleno de hoy.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor? (*Pausa.*) ¿Turno en contra? (*Pausa.*) ¿Turno de portavoces? (*Pausa.*) El señor Villar Arregui, del Grupo de UCD, tiene la palabra.

El señor VILLAR ARREGUI: Gracias, señor Presidente. En este caso, senador Irizar, no hay tutela por parte de nadie respecto de nadie. Lo que hay aquí es un anticipo de lo que en definitiva pueda resultar del régimen estatutario de los funcionarios de las diferentes Administraciones públicas, y ahí, como en el mismo precepto constitucional que antes citaba —el 149.1.18—, se establece una reserva exclusivamente de competencia en favor del Estado para regular determinados extremos. Y se encuentra entre ellos el régimen estatutario de los funcionarios de las diferentes Administraciones públicas.

Lo que persigue esta ley coyuntural, que se anticipa a la futura ley de régimen local, o ley básica del régimen local, y en definitiva a la Ley de la Función Pública, es una equiparación entre los servidores del interés general, lo sean en el ámbito de la Administración municipal, en el ámbito de la Administración provincial, en el área de la Administración autonómica o en el área de la Administración del Estado.

No hay, pues, tutela. Lo que hay es una equiparación entre el régimen retributivo de unos y de otros, para que los presupuestos locales guarden la debida armonía que debe guardar un elemento que forma parte de un conjunto.

Tal es la razón, y no el intento de mantener tutelas que aquí no existen, por la que ha de ser rechazado el voto particular propuesto por el Grupo Socialista.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Se somete, pues, a votación el voto particular del Grupo Socialista al artículo 10, enmienda 26.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 56 votos a favor; 70 en contra; cinco abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Rechazado el voto particular del Grupo Socialista al artículo 10, enmienda 26.

Texto del artículo 10, según el dictamen de la Comisión.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 75 votos a favor; 56 en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 10 del dictamen.

Artículo 11 Artículo 11, voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 27, que postula su supresión.

Para la defensa del voto particular, tiene la palabra el senador Lizón.

El señor LIZON GINER: La retiramos, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Por retirado. Quedan, pues, los artículos 11 a 16, ambos inclusivos, sin votos particulares. Procede, por tanto, someterlos directamente a votación. ¿Alguna peculiaridad en cuanto a la votación que no sea la de su conjunto? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Lizón.

El señor LIZON GINER: Sí, señor Presidente. Es que estamos pensando que la enmienda al artículo 11 la retiramos en Comisión. Lo que pasa es que ha aparecido en el escrito de votos particulares.

El señor PRESIDENTE: Conforme. Ha quedado retirado el voto particular. Ahora pregunto si votamos los artículos 11 a 16 en bloque, puesto que quedan sin votos particulares.

El señor LIZON GINER: El 11, aparte.

El señor PRESIDENTE: Artículo 11 del dictamen.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 75 votos a favor; 56 en contra.

El señor PRESIDENTE: Aprobado el artículo 11 del dictamen.

Artículos 12 a 16. ¿Se pueden votar en su conjunto? (Pausa.) ¿Se aprueban por asentimiento de la Cámara, según el texto del dictamen? (Asentimiento.) Aprobados por asentimiento de la Cámara.

Artículos
12 a 16

Artículo 17. Voto particular del Grupo Socialista, enmienda 28, que afecta al apartado 1. El senador Lizón tiene la palabra.

Artículo 17

El señor LIZON GINER: Señor Presidente, hemos retirado antes la enmienda número 25, después de la intervención del señor Villar Arregui, y ahora retiramos la 28, y no es porque nos hayan convencido sus argumentos. La número 11 es porque la habíamos retirado en Comisión. Queríamos dejarlo bien claro. Pero retiramos esta enmienda también.

El señor PRESIDENTE: Retirado voto particular del Grupo Socialista al artículo 17, se somete a votación el texto que para dicho artículo propone el dictamen de la Comisión.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 68 votos a favor; 59 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 17 del dictamen.

El Grupo Socialista tiene también un voto particular, enmienda número 30, proponiendo la adición de un nuevo artículo, que sería, en su caso, el 17 bis.

El senador Irizar tiene la palabra.

El señor IRIZAR ORTEGA: Esta es la última enmienda del Grupo Socialista, que lo que pretende es adicionar un nuevo artículo 17 bis. El nuevo artículo 17 bis tiene por objeto —y esta vez sí que son claramente tutelas de la Administración—, tiene por objeto exigir que ya no se necesite pedir autorización, que es, por supuesto, a la Administración central para concertar operaciones de crédito en los supuestos legalmente establecidos en que se pueden concertar operaciones de crédito según el Real Decreto 3250 de 1976.

Si la ley establece en qué forma y cuándo se pueden concertar operaciones de crédito, no tiene ningún sentido que, además de establecer estas operaciones de crédito ajustándose al decreto al que acabo de referirme, se tenga también que pe-

dir autorización al Ministerio de Hacienda para que se concierten las operaciones perfectamente ajustadas a este decreto y a esta ley.

Esto sí que es una tutela clarísima que carece de todo sentido, puesto que si ya el propio ayuntamiento se ajusta a las previsiones contenidas en el decreto tantas veces referido, no debe y no tiene por qué pedir autorización, ya que normalmente lo que ocurre es que se retrasa, que la Administración tarda en conseguir los créditos, porque los Ministerios tardan tiempo en contestar, en decir que sí y realmente se pierde tiempo innecesariamente.

Esta es la razón de la enmienda y vuelve a ser, quiero dejarlo claro, la petición de que desaparezca una tutela más de la Administración central sobre las Administraciones locales.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.) ¿Portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Villar Arregui.

El señor VILLAR ARREGUI: Muchas gracias, señor Presidente. Voy primero a aducir una razón de índole formal en oposición a la adición del voto particular defendido por el senador Irizar. Espero que él convenga conmigo que el ordenamiento jurídico español tiene, comparado, por ejemplo, con el ordenamiento francés, una reserva de ley muy superior a la de cualquier otro ordenamiento continental. Bastaría esta razón para no aceptar la legalización de lo que hoy es objeto de regulación mediante decreto.

Lo que el Grupo Socialista postula es la adición de un nuevo precepto en esta ley en el que se introduciría, con modificaciones, lo establecido en el Real Decreto de 30 de diciembre de 1976. No es buena técnica, en principio, sea cual fuere el Gobierno que dirija la Administración civil y militar del Estado, por emplear palabras de nuestro texto constitucional, encorsetar en el cauce siempre rígido de una ley formal lo que está flexibilizado en el cauce siempre menos rígido de un real decreto.

El segundo motivo, senador Irizar, está en el propio voto particular. En él se mantiene, en su párrafo segundo, la competencia del Ministerio de Hacienda para la autorización de determinadas operaciones de crédito, pero desconcentrando a través de las Delegaciones provinciales del Ministerio. Si el propio Grupo Socialista ha entendi-

do que el Ministerio de Hacienda debe retener competencia para autorizar o, en su caso, denegar la autorización en orden al concierto de ciertas operaciones de crédito, es porque el Grupo Socialista comparte conmigo la creencia de que autonomía no es concepto equivalente a soberanía y que tutela no es concepto equivalente a cooperación, y que los fondos públicos proceden, en definitiva, de todos los ciudadanos, porque parte de los caudales que los ayuntamientos administran proceden de una cesión de los impuestos estatales hecha a ellos en virtud de ley.

Tercera y última razón. Legalizar una desconcentración de un órgano sin personalidad jurídica de la Administración del Estado es, seguramente, y pienso que el senador Irizar parte de este criterio, una forma de introducir en la armonía del conjunto jurídico elementos gravemente discordantes. Toda concentración debe hacerse en virtud del principio autoorganizativo de la propia Administración por la Administración misma. Y es cierto que el Real Decreto del 30 de diciembre de 1976 desconcentraba funciones en favor de las Delegaciones de Hacienda. Bien está que el tema quede en ese nivel normativo.

En cualquier caso, si el senador Irizar o su grupo considerara que era necesario y urgente modificar el texto, más que introducirlo en el marco de una ley tal vez una proposición no de ley dirigida al Gobierno para que modificara su propia normativa sería el adecuado procedimiento. Por estas tres razones, nos oponemos a introducir el artículo 17 bis que propone el Grupo Socialista.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el voto particular del Grupo Socialista, último de los reservados, por el que promueve la adición de un nuevo artículo, en correlación con la enmienda número 30.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 57; en contra, 67; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 30.

Quedan los artículos 18 a 26, Disposiciones transitorias primera a sexta, Disposiciones adicionales primera y segunda, Disposiciones finales primera a octava y Disposición derogatoria, que no han sido objeto de votos particulares y, por consiguiente, se someten a votación.

Artículos 18
a 26,
disposiciones
transitorias
1.ª a 6.ª,
adicionales
1.ª y 2.ª,
finales 1.ª
a 8.ª y
derogativa

¿Se puede hacer en su totalidad? (*Asentimiento.*)

¿Acepta la Cámara la propuesta de la Presidencia de su aprobación por asentimiento? (*Pausa.*) Por asentimiento se declaran, pues, aprobados todos los artículos, Disposiciones transitorias, adicionales, finales y derogatoria que antes fueron relacionadas.

Concluye así el debate sobre este proyecto de ley y, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas propuestas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

— DE LA COMISION DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Y ORDENACION GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULA EL USO DE LA BANDERA DE ESPAÑA Y EL DE OTRAS BANDERAS Y ENSEÑAS

El señor PRESIDENTE: Entramos a continuación en el dictamen de la Comisión de Presidencia del Gobierno en relación con el proyecto de ley por el que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas. También se tramita por el procedimiento de urgencia.

Se han formulado diversos votos particulares a este proyecto de ley.

¿Está en la sala el presidente en funciones de la Comisión, el senador señor Soriano? (*Pausa.*)

¿Se designó por la Comisión algún miembro de ella para defender el dictamen? (*Pausa.*) Deduzco que el senador señor Prat y García, que tiene la palabra a tal efecto.

El señor PRAT GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores senadores, muy honrosa misión me ha concedido la Comisión de Presidencia al otorgar a un representante de la oposición la representación de la Comisión toda. Muy peligroso es tomar del enemigo el consejo. (*Risas*)

Lo agradezco profundamente, porque creo que en temas de tanta significación espiritual hay razones, esas razones que recordaba Pascal, que tiene el corazón que la razón no comprende, que permiten que se produzca una unanimidad cordial. Hay una razón pura, hay una razón vital y

hay una razón cordial que es, en definitiva, también la que entre nosotros suele tener mucha significación, y a veces muy contradictoria significación.

Hay algo profundamente ligado a nuestro sentido cordial de la vida como son los símbolos. A lo largo de la Historia hemos visto símbolos distintos para representar una misma realidad humana y territorial que solíamos llamar, cuando yo era muchacho —y han pasado muchas décadas—, la Península e islas adyacentes.

Nos hemos acostumbrado a ver, a partir de esos símbolos variables, esa realidad perenne que, en definitiva, supera incluso a la propia tierra, en una misteriosa fusión de la conciencia individual con la conciencia colectiva.

Solían definir las Partidas, definen todavía las Partidas la ley como enseñamiento y castigo escrito, leyenda que contiene enseñamiento y castigo escrito, leyenda y, primero enseñamiento. Y es que la primera misión de la ley es enseñar, es dar lecciones y después, en segundo lugar, el castigo escrito. Yo creo que esta invocación de las Partidas viene a cuento para el sentido más profundo de esta ley en lo que importa por sus valores espirituales; cuentan, en segundo lugar, las alusiones al Código Penal y a otras leyes sancionadoras.

Lo significativo es que nos demos cuenta del valor integrador de la Historia y del valor de la bandera como signo de la convivencia, de la paz y de la esperanza colectiva.

Históricamente, nuestra actual bandera salió de nuestra antigua Corona de Aragón (las barras catalanas, las barras de Aragón). Se fue a Nápoles con aquel magnífico Alfonso V, y regresó a España con Carlos III, cuando se decidió sustituir la bandera blanca de los Borbones con una bandera en que no tuviera representado el color de su casa, y para, sobre todo, usarla en los buques. Era la bandera fundamental de la Marina.

Y yo he alcanzado a ver, aún de muchacho, en aquellos barcos de cabotaje que yo creo que ahora son algo arcaico, una bandera especial de la Marina Mercante que tenía cinco barras: tres amarillas y dos barras rojas.

Era casi la misma bandera antigua de las barras de Aragón.

En 1868, en ese momento tan lleno de esperanza que fuera gloriosa para tantos, el ayuntamiento de Madrid propuso intercalar el color morado en la bandera; sin duda, se estimaba color de Castilla, aunque parece más bien que era el rojo el

color de Castilla, o tal decía don Miguel de Unamuno, que era el hombre del 98, el hombre de Castilla. Y no prosperó. Y se mantuvo la misma bandera que aquél eterno Presidente de Gobiernos provisionales, el duque de la Torre, había definido en 1843, y volvió a establecer en 1871; la bandera de los dos colores, el doble amarillo, pero que separaban dos franjas iguales rojas.

Después vino la bandera tricolor, que habían soñado en 1868, y que tiene para mí profundos recuerdos sentimentales. Y vino después la bandera bicolor. Pero hemos visto todos siempre la misma realidad, esa realidad de la Península y las islas adyacentes.

Y ahora lo que importa es que también tremolen con esa bandera representativa de una unidad de la historia y de la esencia de nuestro ser colectivo, todas las banderas que representan profundas realidades de nuestra historia, con su rango, sí, con su rango histórico, y distinto, que no importa, porque en el corazón caben todas. Aquel poeta latino que tenía tres corazones porque hablaba tres idiomas, bien puede servirnos de antecedente para tener todos esos corazones de todas las realidades colectivas de nuestra Patria. Y lo que importa es eso, que las banderas tengan un espíritu de concordia, un espíritu de unidad, un espíritu de provenir.

Claro está que la bandera de guerra ha sido siempre la que ha tenido mayor eficacia épica. Ahí está el luego nombrado marqués de los Castillejos, ese formidable hombre de Reus, que fue don Juan Prim, con su bandera entre barretinas lanzándose al ataque en la campaña de 1860, que por aquí tiene espléndidos cuadros históricos.

Pero nosotros también necesitamos la bandera de la paz, y esa bandera de la paz es la actual bandera, tan constitucional como aquella de 1931, que también quería ser la bandera de la paz. Y tenemos el deber histórico de que esa bandera sea de la paz y de la convivencia, y que brille espontáneamente al lado de las otras banderas que representan realidades profundas de nuestro ser y de nuestra historia. Esta es la finalidad de esta ley.

Nosotros, modestamente, hemos modificado un poco el texto del proyecto de ley para que aparezcan protegidas también las enseñas que, al lado de nuestra bandera de la nación española, significan la moderna, la actual y la futura realidad de España.

Muchas gracias por vuestra atención. (*Aplausos.*)

El señor PRESIDENTE: Al existir votos particulares, cabe un turno a favor, otro en contra y el turno de portavoces. (*El señor Laborda Martín pide la palabra.*)

Tiene la palabra el señor Laborda, que parece que tiene algo que decir.

El señor LABORDA MARTIN: Queremos advertir —no sé si es en este momento cuando debo hacerlo— que por acuerdo de los grupos parlamentarios (no sé si alguno todavía no ha sido informado) queríamos presentar una enmienda «in voce» al artículo 3.º, porque al hacer referencia a los distintos establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial y municipal, consideramos que sería bueno añadir, a continuación de provincial, «e insular». Es una enmienda «in voce».

El señor PRESIDENTE: Su señoría, como todos los señores portavoces, conoce el mecanismo fácil.

El señor LABORDA MARTIN: Lo que ha pasado es que se nos ha echado el tiempo encima.

El señor PRESIDENTE: Como todavía falta hasta el artículo 3.º en el debate anterior se nos debería haber presentado un manuscrito firmado por los portavoces. Cumplamos las reglas.

El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Así pues, vuelvo atrás. ¿Turnos a favor? (*Pausa.*) ¿Turnos en contra? (*Pausa.*) ¿Turno de portavoces? (*Pausa.*)

Tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el senador Bosque Hita.

El señor BOSQUE HITTA: Señor Presidente, señores senadores, señores Ministros, unas brevísimas palabras, porque tenemos ante nosotros un proyecto de ley de excepcional importancia y que, al mismo tiempo, produce creo que en todos nosotros los sentimientos naturales de estar tratando, nada más y nada menos, de un tema que es, o debe ser, profundamente sagrado para todos los españoles: el tema de la bandera de todos los españoles. Quisiéramos dejar solamente una nota para que conste en el «Diario de Sesiones de la Cámara», pero dicho con la mayor brevedad.

A nosotros nos parece tristemente necesario

que tengamos que regular el uso de la bandera nacional. La bandera nacional, repito, es de todos los españoles. La Constitución determina cuál es esta bandera, y determina también el rango, la categoría, el sentido, el sentimiento y los deberes de todos los españoles hacia esta bandera.

No quiero abundar en la serie de razones que nuestro entrañable compañero, amigo y senador Prat, acaba de brindarnos a todos alrededor de este símbolo supremo; de lo que somos, de nuestro sentido de la vida, de nuestro sentido de futuro y de nuestra incorporación a todo cuanto significa la Historia de España, pero sí al menos hacer constar este sentimiento de que tenga que ser necesaria esta regulación.

Todas las banderas que representan a todos y cada uno de nuestros municipios, de nuestras provincias, de nuestras Comunidades Autónomas, todas son españolas; tienen el mismo rango, el mismo sentido para quienes son representados por ellas, porque representan, o la totalidad de los sentimientos de nuestra Patria española, o una parcela del territorio de España, con la única diferencia de que ésta es la bandera de todos los españoles. Necesitar decimos a nosotros mismos que lo que nos simboliza y nos representa hay que exigirnoslo a través de una determinada serie de preceptos legales, parece que no debiera haber sido necesario.

No obstante, con este sentimiento, yo ya quiero apuntar el hecho de que el voto será favorable al proyecto de ley.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subirats por el Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo.

El señor SUBIRATS PIÑANA: Señor Presidente, nuestro grupo no podía dejar pasar la oportunidad en esta ley para recoger, para señalar que se han introducido dos modificaciones en Comisión que, si se aprueban también con el voto favorable en el Pleno del Senado, han venido a paliar alguno de los pequeños reparos que nosotros, como grupos que tenemos nuestro ámbito en una Comunidad Autónoma, podíamos tener.

En el artículo 3.º, después de resaltar la obligatoriedad de ondear en el exterior y ocupar lugar preferente en el interior de los edificios de Administración Central, institucional, autonómica, etcétera, aparecía un apartado 2 en donde decía que «la bandera de España ondeará o se exhibirá»

—parece que se podría escoger entre ondear o exhibir— «en las sedes de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos centrales de la Administración del Estado». Además decía: «en solitario», y parecía algo que venía a contraponerse a lo del número anterior. Ahora, la redacción que salió de la Comisión dice que ondeará y se exhibirá; ya no habla de «en solitario»; una bandera solitaria parece que va poco acompañada.

Lo que he de resaltar mayormente es el artículo 10, en el que sólo había una protección para los ultrajes y ofensas; es decir, una protección penal para castigar los ultrajes y ofensas a la bandera de España. La enmienda que ha sido incorporada extiende esta protección también a las banderas de las Corporaciones locales y de las Comunidades Autónomas, con lo cual nosotros creemos que este texto ha mejorado, y como siempre que creemos que el texto ha empeorado lo decimos, justo es también que en este caso hagamos esta afirmación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Laborda, por el Grupo Socialista del Senado.

El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, brevisísimamente para fijar la postura del Grupo Socialista, que, en términos generales, ha sido fijada por nuestro compañero Prat, aunque entiendo que su intervención, en su condición de relator, ha sintonizado perfectamente con el sentimiento de los distintos grupos parlamentarios de esta Cámara.

El senador Bosque ha planteado aquí un motivo de reflexión sobre la necesidad, o no, de una ley que regule el uso de la bandera y de las banderas. Efectivamente, puede parecer sorprendente que ciento cincuenta años después de la Constitución del Estado moderno, del Estado burgués, este país y estas Cortes planteen el tema de la regulación de las banderas; esto, indudablemente, supone el hecho de que nuestra historia de estos ciento cincuenta años ha sido lo suficiente tensa, yo diría que a consecuencia de la desvertebración y profundas tensiones que ha vivido nuestra sociedad, que no ha habido ni siquiera una unanimidad respecto de los máximos símbolos de representación del Estado y de la soberanía.

Estimo que en gran medida esto se debe al he-

cho de que las características, en muchas ocasiones, del Estado y del régimen político desde el siglo XIX para acá, si bien habían supuesto logros en cuanto a la independencia territorial, en cuanto a la autonomía del Estado en términos civiles y modernos, sin embargo, esa independencia, esa soberanía, reconocida desde el punto de vista territorial, no tenía su correlato correspondiente respecto de la soberanía popular; es decir, el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos que en el proyecto de ley aparecen perfectamente definidos, puesto que se señala que la bandera de España también recoge y simboliza los derechos fundamentales de la Constitución.

La solución de ese problema histórico entre reacción y progreso marca nuestra historia contemporánea y explica las profundas tensiones que han llevado incluso hasta la discusión de los símbolos, y de alguna manera este proyecto viene a reflejar, a recoger el hecho histórico de ese profundo acuerdo que existe entre las fuerzas políticas representativas del país en el sentido de que todas ellas se reconocen dentro del esquema amplio de la Constitución.

Efectivamente, es singular la historia de nuestro país, que no tiene comparación, creo yo, con ningún otro país europeo —tal vez con la excepción de Alemania durante la época del III Reich, cuando hubo modificaciones de bandera—, y de alguna manera nos plantea, diríamos, la reflexión, el hecho de que nuestra monarquía, anterior a la constitucional o la parlamentaria que hoy tenemos, ha sido una monarquía plenamente nacionalizada, y, por tanto, su símbolo —puesto que la bandera, al fin y al cabo, en su origen, es una bandera monárquica— no estaba como símbolo plenamente nacionalizado.

Por otra parte, podríamos pensar que otros países cuyos símbolos nacionales no han sido producto de esa nacionalización de la monarquía, sino de una ruptura con el orden feudal, y de esa ruptura con el orden feudal salen las banderas, fundamentalmente, las tricolores republicanas, evidentemente nuestro país tampoco ha tenido una historia de esta significación.

Yo creo que la bandera y su aceptación hoy resume lo que a veces hemos señalado y subrayado de nuestro proceso constituyente, es decir, que es un proceso constituyente en el que se ha producido una reforma y, por tanto, una nacionalización de la monarquía y de lo que eran sus símbolos, pero conteniendo dentro un proceso de ruptura

con el régimen anterior de privación de esos derechos fundamentales. Y ahí es donde existe esa convergencia, esa síntesis que magníficamente ha expuesto el senador Prat, en el sentido de que este símbolo recoge perfectamente tanto los sentimientos de quienes combatieron detrás de una bandera tricolor, como los sentimientos democráticos de sectores que en su día y en su momento no respaldaron el proyecto republicano. De alguna manera, esto supone una síntesis, y el proyecto que se nos somete a consideración me parece que, en su tramitación por esta Cámara, ha supuesto unas mejoras que no repito, puesto que el senador Subirats las ha expuesto detalladamente.

Hemos contribuido todos, y creo que nuestra contribución como socialistas es una contribución especialmente notable por su simbolismo y también por el esfuerzo; y yo tan sólo quisiera decir que entiendo que ese esfuerzo de los grupos parlamentarios, y el nuestro también, es un esfuerzo conducente a superar el criterio reglamentista.

Y termino con la reflexión con la que iniciaba, a imitación del senador Bosque, con el criterio reglamentista que aparecía, por ejemplo en el Decreto de 24 de noviembre de 1978, en el sentido de la utilización del uso libre de la bandera, cosa que es absolutamente habitual y normal en cualquier país democrático y vertebrado de Europa. Creo que esto es importante, porque supone una aceptación, una desdramatización de la libre utilización de los símbolos nacionales, y de alguna manera esa libertad es la libertad de ondear al viento libre de la libertad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El senador Iglesias Casado, por el Grupo de UCD, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS CASADO: Señor Presidente, señorías, señores Ministros, soy consciente de la responsabilidad que asumo al tomar la palabra cuando ha hecho la representación de la ley el senador don José Prat, hombre de una cultura asombrosa, de una gran sensibilidad y de una palabra fácil, cualidades que ciertamente yo estoy muy lejos de poseer. Pero acepto humildemente el inevitable contraste, en aras del honor que para mí supone que mi nombre vaya unido, en el «Diario de Sesiones» de esta Alta Cámara, a la

ley relativa a un símbolo tan entrañable como es la bandera de España.

La bandera simboliza todo lo noble, todo lo sublime, toda la grandeza de un pueblo, el nuestro, que ha suscrito su historia en todos los meridianos de la Tierra y cuya cultura ha iluminado permanentemente la vida de la Humanidad.

A nuestra generación le corresponde la difícil tarea de estructurar el Estado de las Autonomías, que tienen sus propias banderas, que todas son un poco nuestras porque son españolas, y había que armonizar este uso con el de la bandera de España, que simboliza la unidad de la patria y la solidaridad entre todas las Comunidades.

Es necesario también dejar patente con rango de ley que ningún grupo ideológico, que ningún sector de la sociedad puede arrogarse el derecho a monopolizar el afecto de la bandera de España. En este campo estoy seguro que ninguno de nosotros cede la primacía a nadie, ni un ápice de esa primacía, en cuanto a patriotismo y en cuanto a amor a la bandera.

Hay un último capítulo en la ley que contempla las sanciones a quienes ultrajen, a quienes ofendan a la bandera. Yo estoy con el senador Bosque en que habría cosas que sería preferible que no estuvieran; quisiéramos de todo corazón que no hubiera necesidad de aplicarlo nunca y que ese artículo terminase olvidado en las páginas del «Boletín Oficial».

Todos estos extremos los contempla la ley, con la cual mi grupo se siente absolutamente solidario, y por ello, en nombre del Grupo de UCD a quien represento en esta ocasión, quiero manifestar que asumimos este proyecto de ley en su integridad y anuncio, obviamente, nuestro voto favorable. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Se entra, seguidamente, en el debate del articulado.

Artículos
1.º y 2.º

Los artículos 1.º y 2.º no han tenido votos particulares. ¿Se pueden considerar conjuntamente? (*Asentimiento.*) ¿Se pueden dar por aprobados por la Cámara? (*Asentimiento.*) Se declaran aprobados los artículos 1.º y 2.º, por asentimiento de la Cámara.

Artículo 3.º

El artículo 3.º, antes de considerar el voto particular que reserva el senador Rahola, enmienda número 1, que afecta al apartado 1 de este artículo, tengo que manifestar que va a ser modificado porque en tiempo y en forma se ha presentado el escrito firmado por los portavoces de la Cámara,

en el que dan por introducido en dicho apartado 1 del artículo 3.º, después de la palabra «provincial», la expresión «o insular».

En definitiva, y como texto del dictamen, hay que considerar el siguiente para el apartado 1 del artículo 3.º: «La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipales del Estado».

¿Queda informada debidamente la Cámara? (*Asentimiento.*)

Ahora, pues, tiene la palabra el senador Rahola para defender su voto particular a este apartado 1.

El señor RAHOLA DE ESPONA: Señor Presidente, señor Ministro, señores senadores, tengo tres enmiendas que, por brevedad, voy a acumular y defender en una sola intervención.

Quiero manifestar que estas enmiendas son particulares y no incluyen a mi grupo, porque no desaría que hubiera interpretaciones erróneas, ya que pudiera no ser bien entendido.

Ante todo, quiero manifestar que considero la bandera española como representante de todos los españoles y del pueblo español, y que, por lo tanto, merece para mí todos los honores y todo el respeto que merece el pueblo español. Esto, señores, quiero manifestarlo para que, ante todo, haya una auténtica sensibilidad de que esta enmienda que he propuesto no es, en absoluto, para no reconocer todos los méritos que tienen los pueblos españoles.

El concepto, quizás puede ser no aceptado por ustedes; el concepto que yo tengo en cuanto a las banderas (y esto sería, quizás, en lo que podamos diferir, pero es una opinión que yo quiero exponer y que motiva el que haya propuesto esta enmienda) es que todas las banderas de los entes autonómicos son banderas españolas y, por lo tanto, cada una de ellas representa a un grupo, y éste debe tener los mismos honores que cualquier español. Por lo tanto, cada una de las banderas, todas juntas, de los entes autonómicos, valen igual que la bandera española; o sea, que la bandera española es la integración de todas las otras banderas, y representa el símbolo y la unión de todas las entidades autonómicas. Y aquí está la diferencia de conceptos.

Creo que cuando se trata de un acto de un orga-

nismo de tipo autonómico, y que solamente pertenece a un grupo de españoles, ellos ponen su símbolo, que no quiere decir que no sea español, pero que en el lenguaje de los símbolos, hablando con propiedad (ya que en símbolos se tiene que hablar con la misma propiedad que utilizando las palabras), en aquel momento se está actuando y representando solamente una parte de los grupos que componen el Estado español.

Mi idea y mi concepto es que hay que poner el símbolo solamente de aquella entidad o de aquella Comunidad, a las que también considero españolas.

En Alemania, por ejemplo, los land ponen solamente la bandera del Land en los organismos o en los actos de cada Land, y en el Canadá ponen la bandera de Quebec, solamente la bandera de Quebec, cuando se trata de cuestiones referentes a Quebec.

Esta era mi intención cuando propuse estas modificaciones. Coincido, por otra parte, con lo que anteriormente se ha dicho respecto a que esta ley que se ha tenido que hacer es debida a que muchas veces se ha hecho servir el símbolo del pueblo español para cuestiones que no eran absolutamente representativas del pueblo español. Por eso ha habido momentos en que la gente de algunas autonomías han rechazado la bandera, no por española, sino porque el símbolo que representaba no era exactamente la del pueblo español, sino de unas tendencias y de unas expresiones que todos hemos sufrido. Por esto ha habido muchas veces rechazo.

Yo recuerdo muy bien, cuando la proclamación de la República española, que mi país se llenó de banderas tricolor y, al fin y al cabo, eran igual banderas españolas. Lo que pasaba es que representaba suprimir una bandera que en otro tiempo había sido opresora para nuestros países.

Yo hago votos y estoy contento de que exista el artículo 8.º que resuelve magníficamente cuando dice: «Se prohíbe la utilización en la bandera de España de cualquier símbolo o siglas de partidos políticos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas». Esto, verdaderamente resuelve el problema de que nunca más la bandera española sirva para representar una opresión como la que hemos sufrido nosotros tantas veces.

Aunque sé que mi proposición no será mayoritariamente aceptada, yo ya he explicado los motivos de por qué he llegado hasta aquí para defen-

derla, y explicar que no hubiera error en el sentido que la proposición había tenido

Señor Presidente, retiro mi enmienda para que no cree otros problemas.

El señor PRESIDENTE: Sin embargo, según el precedente, a pesar de que el voto particular ya no será sometido a votación, si en turno de portavoces alguien tiene que hacer algunas manifestaciones, y puesto que ha sido defendido por el senador Rahola, no va a ser privado de su derecho. Así pues, reclamo a los portavoces que quieran intervenir en este turno.

Tiene la palabra el senador Ferrer Profitos, por el Grupo de UCD, por un tiempo de cinco minutos para toda la exposición de los votos particulares.

El señor FERRER PROFITOS: Señor Presidente, señores Ministros, señorías, en primer lugar, celebro mis dos coincidencias como mi compañero de nacionalidad Josep Rahola; que el cariño y el aprecio a la bandera catalana y nuestro amor a ella sea igual, y después también, y sin ambigüedades, celebro que haya dicho el senador Josep Rahola que la bandera española también era la nuestra.

Creo que estos dos senadores, aunque de pensamientos diferentes, hemos empezado hoy a converger en dos cosas tan importantes como son el reconocimiento de las dos banderas. Felicito efusivamente al senador Rahola. También celebro que haya retirado la enmienda porque así se votará prácticamente tal y como vino del Congreso de los Diputados. Esto es muy importante para nosotros y para todas las nacionalidades y regiones.

Yo nací en la época en que la bandera catalana (y cuando habló de catalana me refiero a los otros pueblos de España) —yo no soy tan exagerado como mi compañero Porta, que dice que el primer trapo que le pusieron encima, el primer pañal fue una bandera catalana (Esto no es verdad.) (Risas.)—, adornaba todas las cosas que en aquel tiempo llegaban a las casas, como, por ejemplo, en las fiestas de Ramos. Cuando este senador abrió los ojos al uso de razón, la privación de estos derechos también se había adueñado ya de nuestro país. Y han tenido que pasar muchos años, para que haya vuelto a ondear libremente (como decía otro senador) con estos vientos de libertad.

Hace pocos días yo llegaba a la ciudad de Léri-

da. La gente que vivimos en un pueblo, cuando llegamos a una ciudad, miramos siempre un poquito más alto que los que viven siempre en ella, y, con gran alegría y sorpresa —no había leído por mis quehaceres agrícolas lo que había pasado días antes— ví en el Gobierno Civil ondear las dos banderas.

Precisamente porque nací con la bandera catalana, ondeando libremente, como decía el senador Laborda, quiero morir, aunque esto sea muy lejano (*Risas.*), viendo también que ondee libremente. Pero estoy convencido de que esto sólo se puede lograr si las dos banderas, como el 11 de septiembre en la mayor parte de las manifestaciones de mi tierra, ondean. No solamente la española y la catalana sino la andaluza y la de otras regiones o nacionalidades.

Nuestro grupo, criticado tantas veces, pero unas veces con los 165 votos y otras con los 170 en el Congreso de los Diputados, y el partido mayoritario de la oposición también, ha hecho tanto para que viniera otra vez la aprobación de los Estatutos y para que viniera lo que ahora estamos aprobando, este proyecto de ley que para siempre hará que las banderas de nuestros pueblos, de nuestras nacionalidades y regiones, ondeen libremente y no ocurra, como yo lo conocí en mi casa, porque mi madre fue valiente de no quitarla del interior, que por errores que yo creo que no vamos a cometer —al menos nosotros no colaboraremos a ello— la bandera tenga que quitarse otra vez del exterior para ponerla en el interior, y no les pase como a este senador, que la tuvo que conocer en las habitaciones de su casa.

El señor PRESIDENTE: ¿El senador Rahola tiene interés en que se voten separadamente aquellos artículos que fueron inicialmente objeto de sus votos particulares, aunque luego los haya retirado?

El señor RAHOLA DE ESPONA: Quisiera abstenerme en estos artículos.

El señor PRESIDENTE: Está en su derecho. Se somete a votación el texto que para los artículos 3.º, 4.º y 5.º, que son los que fueron objeto de votos particulares, propone el dictamen de la Comisión.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 113; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Aprobados los artículos 3.º, 4.º y 5.º del dictamen, el 3.º con la introducción de la modificación acordada en este Pleno a virtud del acuerdo de todos los grupos parlamentarios.

Los artículos 6 a 10, inclusive, Disposición derogatoria y Disposición adicional, que no tuvieron votos particulares, se pueden considerar en bloque. La Presidencia propone a la Cámara que se aprueben por asentimiento. (*Pausa.*) Así se declara, y concluye el debate sobre este proyecto de ley, respecto del que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas propuestas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

Antes de suspender por unos minutos la sesión (hemos de continuar, porque aún nos resta un buen trozo de orden del día que sería temerario dejar para mañana) debo dar cuenta, en primer lugar, de que me pasa una nota Secretaría General, por la que, a ruego de la Presidencia de la Comisión de Defensa, se notifica a los senadores componentes de ella que mañana jueves, a las nueve y media de la mañana, se reunirá la Comisión para designar la Ponencia que ha de informar el proyecto de ley de clasificación de mandos y ascensos en régimen ordinario para los militares de carrera del Ejército de Tierra. Comisión de Defensa, a tales efectos, a las nueve y media de la mañana.

También doy cuenta a SS. SS. de que ha sido presentado un escrito, registrado en la Secretaría General con fecha de hoy, suscrito por todos los portavoces de los grupos parlamentarios, que dice lo siguiente:

«A la Mesa del Senado. Los portavoces abajo firmantes proponen que se debata en el Pleno que se inicia en el día de la fecha (que es la de ayer) el informe de la Comisión Especial de Emigración, referente a la investigación sobre vendimiadores españoles en Francia en la campaña de 1980, y cuyo dictamen se elevó al Pleno del Senado con fecha de 15 de junio del presente año.»

La Mesa no acepta este escrito en tanto en cuanto los portavoces firmantes no estén de acuerdo en el error que en él se padece, y que la Mesa no puede aceptar, de que se diga que se elevó al Pleno del Senado con fecha 15 de junio, porque el dictamen se presentó el 16 de septiembre. Por consiguiente, ruego que den por salvado

Artículos
6 a 10,
disposición
derogativa
y
disposición
adicional

este error, porque la Mesa del Senado no ha incurrido en ningún tipo de omisión o negligencia, ya que ha tenido entrada este escrito sobre los vendedores el 16 de septiembre y no el 15 de junio. Como esto es así, y como espero que los portavoces lo acepten, mañana será conocido y debatido por el Pleno este informe con la siguiente tramitación: la presentación del mismo por quien ha sido designado por la Comisión y, a continuación, habrá una ronda de señores portavoces para dar a conocer y fijar su posición.

Se suspende la sesión por un cuarto de hora.

Se reanuda la sesión.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

— DE DON GREGORIO TOLEDO RODRIGUEZ Y OTROS SEÑORES SENADORES SOBRE COSTE DE LA INSULARIDAD

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto séptimo del orden del día, con la proposición no de ley de don Gregorio Toledo Rodríguez y otros señores senadores, sobre coste de la insularidad, publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» del 21 de septiembre.

El senador Toledo, tiene la palabra para un turno a favor, por tiempo no superior a veinte minutos.

El señor TOLEDO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores senadores, permítaseme que con el máximo respeto, pero también con el máximo interés, reclame de ustedes, señorías, la debida atención pues el tema que nos ocupa es de la máxima gravedad y de la máxima urgencia para ese trozo de España que está separado del continente por el mar, y queremos hoy aquí, de alguna manera, establecer los imprescindibles puentes y lazos de unión que sirvan para corregir los desequilibrios que, de existir, hay que superar de forma inmediata para que no se hagan irreversibles y de consecuencias graves e imprevisibles.

Hoy la España peninsular, compuesta por los Archipiélagos Canario y Balear, trae a esta Alta Cámara su más grave y prioritario planteamiento político: el coste de la insularidad.

Estamos ya un tanto cansados de oír, una y otra vez, a relevantes personalidades políticas de este

país, desde hace ya varios años, que Canarias comporta un costo. Y ese reconocimiento por esas autoridades públicas si bien es importante, no es suficiente, porque a todos, a la España peninsular y a la insular, nos interesa —porque va en ello nuestro futuro y nuestro porvenir— cuantificar cuanto antes el coste de la insularidad.

Tengo hoy el honor de dirigirme a ustedes como isleño para reclamar su atención sobre la situación real y los problemas que acarrea la insularidad. Pero, además, quiero ya rápidamente aclarar que ustedes me hacen sentirme español más que nunca, ya que esta proposición no de ley se refiere estrictamente a una parte muy restringida del territorio del Estado y ha sido firmada por todos los senadores de mi grupo parlamentario, lo que a mí, personalmente, me prueba la solidaridad y la comprensión que ha alcanzado esta Cámara de representación territorial con los problemas de cualquier zona del Estado español; y a los que viven fuera de la Península les demuestra que los senadores de cualquier otra parte de España comprenden la insularidad y colaboran a unir espiritualmente lo que geográficamente está separado.

El artículo 138 de la Constitución española dice: «El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2.º de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.»

Quizá teóricamente no era necesario que la Constitución hiciera mención expresa del hecho insular para Canarias y Baleares, pero necesitaba que todo español conociera que hay islas en su territorio y que reconociera, también que al ser desiguales a la Península necesitaban un trato desigual. Quiero exponerles a ustedes algunos puntos, pero no todos, en los que consiste esta desigualdad. Pero antes de entrar en detalles, quiero darles a SS. SS. un breve esquema de la población del Archipiélago Canario.

Sobre los 7.273 kilómetros cuadrados del archipiélago, tenemos 1.374.617 habitantes, con una densidad media de población alta de 189 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero esta difra es aún muy superior, ya que la distribución no es uniforme. La isla de Gran Canaria tiene 376 habitantes por kilómetro cuadrado y Tenerife 288 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que

la isla del Hierro tiene solamente 25 habitantes por kilómetro cuadrado y la isla de Fuerteventura tiene escasamente 15 habitantes por kilómetro cuadrado.

Ante esta situación se puede pensar que el atender a Gran Canaria y Tenerife es prioritario, ya que se tiene abastecido el 80 por ciento de la población. Esto es un grave error y no es cierto, porque somete a los habitantes de las demás islas a condiciones tercermundistas. El bajo número de habitantes es debido a la emigración endémica que padecen estas islas, que es preferentemente sobre las dos islas mayores, que creo que no exagero si afirmo que ya no soportan más tasas mayores de crecimiento poblacional.

La distribución provincial por islas exige una mayor inversión en obras públicas que supone un mayor coste por habitante, ya que la dotación de presas, carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera, tiene que quedar ajustada a las necesidades y características de cada isla, sin que la realización de una pueda ir condicionada por las de las otras, ya que los habitantes de una isla no se benefician en absoluto de las obras públicas hechas en otras. Tienen que pensar, por ejemplo, que el aeropuerto de una isla como Fuerteventura cuesta lo mismo que cualquier otro hecho en la Península, pero solamente beneficia a 35.000 habitantes de dicha isla.

La organización del transporte no sólo hay que entenderla desde la unión isla-península, sino desde la unión también de las distintas islas entre sí. En este aspecto, los transportes por barco entre islas, y a pesar del esfuerzo de la Trasmediterránea, son escasos y sumamente caros.

Los transportes por avión han disminuido y son igualmente caros. Esto no sólo afecta al ciudadano que se quiera trasladar de una isla a otra, sino que dificulta la creación de empresas de ámbito regional, encareciendo los costes de mercancías en proporciones cada vez mayores.

Quiero ponerles un ejemplo que ilustre esta afirmación. Mientras que llevar un «container» normal entre Madrid y Barcelona cuesta 18.000 pesetas, cubrir esa misma distancia entre las islas de Tenerife y Fuerteventura cuesta 45.000 pesetas, es decir, tres veces más. De esta forma, si un producto entra por el puerto de Las Palmas, con lo cual habrá pagado el transporte hasta Canarias, después de su distribución en las islas lo paga aún mucho más. Pero aún es más caro llevar un coche desde Lanzarote a Hierro que el trayecto

Tenerife-Cádiz, aunque la distancia sea cuatro veces inferior.

Desde el punto de vista agrícola, la situación canaria está tomando caracteres alarmantes. Tenemos la reserva del mercado peninsular del plátano, pero este cultivo tiene un consumo tan elevado de agua que podemos decir que está secando a Canarias, y traigo esto a colación para explicar un factor más de diferenciación. Mientras que los precios de los fertilizantes están subvencionados para toda España, incluida Canarias, el agua agrícola —quiero que se permita llamarla el principal fertilizante de Canarias— no está subvencionada en Canarias y su coste llega en ciertas épocas a superar las 60 pesetas el metro cúbico. En los últimos estudios hechos se calcula que nada más superar esta cifra la agricultura canaria tiene que desaparecer por obligación porque no sería rentable. De esta forma producir una parcelada de pepinos o tomates en Canarias es mucho más cara que producirla en Almería o Murcia y, además, después tenemos que sumarle el coste del flete hasta la Península.

Los derechos sanitarios de los ciudadanos, en especial de las islas menores, están afectados al no tenerse en cuenta que cada isla tiene que contar con una dotación mínima indispensable de especialidades médicas, aunque el costo por habitante llegue a ser muy superior al de la media peninsular, porque en la actualidad hay islas que después de las cinco de la tarde y hasta las diez de la mañana quedan, desde el punto de vista sanitario, en una situación peor que las zonas subdesarrolladas del Tercer Mundo.

Los ciudadanos se sienten inseguros y las mujeres tienen que trasladarse a otras islas, lejos de su familia, para tener a sus hijos dentro de condiciones de seguridad sanitarias. Pero no sólo hay una situación de desamparo en las islas de menor número de habitantes. En las islas de Gran Canaria y Tenerife el coste de una cama hospitalaria es de un 26,4 por ciento superior al de Madrid o Barcelona, debido, en gran parte, a los pluses de residencia; sin embargo, la Seguridad Social concierda con los hospitales de las Diputaciones Provinciales al mismo precio que en la Península, con lo que nuestras Diputaciones —léase Cabildos— tienen un déficit endémico en su presupuesto sanitario y las clínicas privadas ven sus derechos discriminados con relación a las clínicas privadas de la España peninsular.

El derecho a la enseñanza, en general, y en par-

ricular a la universitaria no es igualitario, ya que al tener que desplazarse de una isla a otra se exigen unos niveles económicos muy superiores a los que poseen las familias del territorio peninsular cuyos hijos estudian en la Universidad más próxima, porque el padre de familia cuyo hijo se tenga que trasladar de isla para estudiar le cuesta casi igual que estudie en Las Palmas, en Mallorca o en Madrid. Pero además debemos tener en cuenta los servicios públicos al ciudadano. Por eso es necesario el estudio comparativo de los índices de costo de servicios, teniendo en cuenta los índices del costo de la vida en las islas y el llamado plus de residencia, que varía de una isla a otra y entre los sectores públicos y privados.

Estos índices de costo de servicios deberán ser aplicados de forma objetiva a efectos de todos los convenidos, conciertos y contrataciones del Estado en Canarias y Baleares. Y junto a estos cuatro puntos generales de obras públicas, sanidad, enseñanza y servicios hay otros tres factores de máximo interés que se derivan de nuestra situación geográfica y política. El primero es quizá específicamente canario, y es el estado de sequía continua y el grado de desertización que están alcanzando las islas Canarias y que hacen que el agua potable y de riego alcance precios que gravan la industria y la agricultura de forma exagerada y, desde luego, de manera muy distinta al resto de la España peninsular. Piénsese que en este momento el costo del agua para nuestras ciudades es de 100 pesetas el metro cúbico.

El segundo punto radica en nuestra dependencia del sector turístico que como industria principal del archipiélago, hace que las variaciones de cambio de la peseta frente a las demás monedas afecten de forma muy sensible a todo el archipiélago, alterando las previsiones empresariales y llevando a factores de inseguridad y descontrol a nuestra precaria economía.

Como decía al principio de mi intervención, no quiero llevar a SS. SS. a votar la concesión de ningún privilegio a los archipiélagos. Únicamente pretendo y pido con humildad que se estudie el coste de la insularidad y, una vez conocido éste, que el Estado actúe en consecuencia.

Creo que esta proposición no de ley completará los criterios de reparto del Fondo de Solidaridad Interregional, dándole unos índices reales y sectoriales que permita actuar con justicia en todos los campos, corrigiendo los desequilibrios no sólo entre las islas y la Península, sino, cosa muy

importante, entre las distintas islas entre sí, entre las mal llamadas islas menores.

Por todo ello, solicito de SS. SS. el voto favorable a la siguiente proposición no de ley:

«Instar al Gobierno para que todos y cada uno de los Ministerios, en colaboración con las Conserjerías respectivas de la junta de Canarias y el Consejo Interinsular de Baleares, estudien de forma urgente el coste de la insularidad; qué factores afectan más al índice del coste de la vida en Canarias y Baleares; hasta dónde afectan los incrementos del precio de carburantes, fluctuación de la peseta, coste del agua, transporte, etcétera, con el fin de contar con unos índices propios que adecuen las medidas sectoriales a la situación global.»

Para mí es un honor —y termino— leer la declaración que a este efecto ha hecho nuestra máxima institución, la Junta de Canarias, que dice así: «La Junta de Canarias apoya totalmente la proposición no de ley relativa al coste de la insularidad, iniciativa que se encuadra dentro del planteamiento que viene manteniendo esta institución en orden a conseguir un real acercamiento entre las islas y la Península, y que está desarrollado en diversas actuaciones mantenidas con la Administración del Estado, como la compensación al transporte y otras muchas más. Todo ello con objeto de reducir los costes que actualmente soporta la economía canaria.»

Por todo lo anteriormente expuesto solicito de SS. SS. el voto favorable.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno en contra? (*Pausa.*)

¿Turno de portavoces? (*Pausa.*)

El senador De Armas, por el Grupo Socialista del Senado, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

El señor DE ARMAS GARCIA: Muy brevemente, sobre la proposición no de ley presentada por el senador Toledo.

Creo que este tema de la insularidad se ha tratado ya reiteradamente. Los parlamentarios canarios y de Baleares traemos aquí este tema con relativa frecuencia, y yo quisiera manifestar que, igual que es un hecho conocido en todo el mundo que las islas tienen unas características especiales y un coste de la insularidad (por ejemplo, la Comunidad Económica Europea así lo reconoce), el hecho de la peculiaridad de las islas, la falta de

continuidad del territorio insular, más la lejanía de los archipiélagos, en realidad plantean unos problemas que nosotros conocemos perfectamente como un coste económico. Pero también me atrevería a afirmar que junto a un coste económico existe otro que yo llamaría coste psicológico. Es decir, el insular, por razones muy especiales, tiene también unos planteamientos —como el senador Toledo ha manifestado últimamente—, problemas de estudios, problemas de cultura, problemas de transporte, problemas de distancia; pero el problema fundamental estriba en que el carácter insular tiene unas características y unos problemas que también hay que considerar.

Me parece que existen demasiadas declaraciones sobre los problemas de la insularidad, pero lo que sí creo es fundamental y desde aquí me atrevo a solicitar es que de una vez se haga una cuantificación de lo que significan los costes insulares. Es decir, el reconocimiento por el Consejo de Europa de las peculiaridades y del coste de la insularidad precisa que por el Estado español se haga un estudio verdadero de qué representa en realidad este coste de la insularidad.

Creo que sobran declaraciones huecas y nos faltan datos concretos. Tenemos que saber exactamente cuáles son estos costes a que me refiero, costes de carácter económico, fundamentalmente educativo y cultural.

Está claro que un archipiélago, reitero, es un hecho distinto. El insular sabe cuándo termina su tierra, a diferencia del continental, que sabe que su territorio tiene una continuidad, y la separación de una provincia u otra o incluso de una nación y otra son hechos sin una separación geográfica.

El insular, en cambio, es una persona que sabe exactamente dónde termina su territorio. La diferencia entre la tierra y el mar es un hecho tangible, y eso hace que no solamente en los archipiélagos españoles, sino en todos los del mundo, incluso los ingleses y filipinos, los habitantes de estos territorios insulares tengan unas características muy especiales.

Este es un hecho que tiene un coste cultural, insisto, y por ello es evidente y necesario estudiarlo y cuantificarlo, exactamente igual que se pueden estudiar y cuantificar las necesidades del transporte y de los hospitales.

Decía antes el senador Toledo que, por ejemplo, en transportes y Sanidad hay unas diferencias especiales. Eso es cierto; existen en las Balea-

res y en Canarias unas condiciones tan distintas que hacen que una isla como la de Hierro, que tiene 7.000 habitantes, se encuentre con que a partir de la salida del último vuelo está totalmente aislada. Esto hace que, por ejemplo, en una provincia continental las necesidades sanitarias se puedan resolver con un centro de salud corriente, pero en una provincia insular es necesario que exista un hospital.

La palabra «aislamiento» viene precisamente de isla, viene de esa separación que existe con el resto de la comunidad, que es lo que hace que se den esas características tan especiales que han sido reiteradamente expuestas.

Por todo ello pido desde aquí al Gobierno que se cuantifique de una forma absolutamente clara, de una forma absolutamente veraz qué es lo que significa este coste.

Quiero manifestar también que hay un intento en este momento de estudio serio de lo que es el coste de la insularidad, y lo están realizando la Universidad de La Laguna y la Capitanía General de Canarias. Es un hecho interesante y una experiencia nueva el que elementos civiles y militares estén tratando conjuntamente de conocer estos datos.

Esto, repito, tiene un interés secundario, y es que estén trabajando una serie de equipos militares y universitarios conjuntamente, lo cual en este país es un hecho importante y por ello me atrevo a resaltarlo, en primer lugar porque se va hacia un conocimiento de estos datos, y en segundo lugar, porque creo que el estamento militar y civil trabajando codo a codo es un hecho que no se da frecuentemente en este país.

Termino utilizando la proposición no de ley que presenta el senador Toledo para pedir que de una vez se haga la cuantificación de estos costes.

El señor PRESIDENTE: El senador Zaforteza, por el Grupo UCD, tiene la palabra.

El señor ZAFORTEZA CALVET: Señor Presidente, señoras y señores senadores, antes de proceder a la votación de la proposición no de ley que reclama en estos momentos la atención de la Cámara, parece conveniente que fijemos la atención en que el texto que se va someter a la consideración de SS. SS. es el publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» de fecha 21 del corriente mes. Textoto este a que me refiero que sustituye y mejora notablemente el que había vis-

to la luz en dicho «Boletín» el día 6 de abril último.

En efecto, la diferencia entre ambos es notoria, pues la actual proposición no de ley tiene una finalidad inequívoca: lograr que la Administración central, por la Junta de Canarias y por el Consejo General Interinsular de Baleares se lleve a cabo inmediatamente un estudio sobre el coste de la insularidad.

Ante esta finalidad, la voz de los senadores de UCD por Baleares debe hacerse oír para apoyar en forma resuelta y decidida la citada proposición no de ley. Y ello porque, en los últimos tiempos, pocos aspectos de la realidad económica de las Baleares han polarizado tanta atención como el relacionado con los costos de la insularidad, cuestión en la que algunos han querido demostrar «a priori» que los costos monetarios derivados de la insularidad son muy elevados y que, por ello, su influencia es notoria en la economía insular.

En efecto, de entrada se propugna por algunos que todos los productos y mercaderías sufren, de un modo u otro, las consecuencias económicas de la insularidad, se magnifican luego estos inconvenientes por parte de quienes pretenden justificar sus personales fracasos y se acaba identificando estos inconvenientes económicos con los costos para todos los consumidores.

Por este camino, el concepto del coste de insularidad se encuentra actualmente en una fase avanzada de alteración, hasta el punto de que ha dejado de ser un problema para convertirse en un tópico, al que se ha querido hacer responsable de todos los problemas económicos de las Baleares. Llegados a este punto, el tópico deja de serlo para convertirse en un mito.

Para nosotros, los senadores de UCD en Baleares, la insularidad es, por encima de todo, un hecho geográfico del que se derivan ciertos inconvenientes desde el punto de vista económico, algunos de los cuales, como el transporte de personas y de mercaderías, tienen incidencia cuantificable en la economía, pero deben ser conceptuados como un costo y no como un gravamen neto, en el bien entendido, además, de que este costo actúa, a su vez, como un elemento generador de renta que, entre otras consecuencias, trae aparejada la de reducirlo notablemente.

De ahí el porqué deseamos desmitificar el concepto de coste de insularidad, en lo que a Baleares se refiere, y el mejor camino para ello, el único camino para ello, es el que propugna la proposi-

ción no de ley, a fin de que se proceda a su estudio serio, riguroso, científico, en suma, por los Ministerios competentes, en conjunción con el Consejo General Interinsular de Baleares y la Junta de Canarias.

Es, pues, obvio que se ha precisado de la colaboración de los organismos preautonómicos de las dos regiones extrapeninsulares españolas (Canarias y Baleares), porque aun cuando el hecho geográfico que origina el costo es el mismo —la insularidad—, la realidad geográfica cuida de demostrar que los componentes de este costo son esencialmente diferentes. Y son diferentes, sobre todo y por encima de todo, porque la distancia que media entre la Península y uno y otro archipiélago es sensiblemente desigual, lo que, de entrada, nos lleva a la consecuencia de que el costo de insularidad tiene una incidencia mucho mayor en la vida económica de Canarias que en la de Baleares.

Por lo que respecta a este último archipiélago, el costo de insularidad ha sido objeto de recientes estudios, llevados a cabo bajo los auspicios del Consejo General Interinsular de Baleares, presidido por mi compañero de partido y de escaño el senador señor Albertí.

De estos estudios se deduce que en el costo de insularidad influye sobremanera el precio del transporte de personas y más acentuadamente aún el de mercaderías. De ahí el interés que todos los baleares tenemos en ver aplicada la reducción en los precios de las tarifas de los billetes de transporte aéreo y marítimo relativo a las personas, como consecuencia de la proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario de UCD, que confiamos tendrá virtualidad a partir del primero de enero próximo, y que el costo de insularidad no es soportado exclusivamente por los residentes en las islas, como evidencia la contemplación de que las diferencias del coste del transporte de los carburantes y otros productos petrolíferos imputables a Baleares no los pagamos sólo los residentes allí, sino que los soportamos todos los españoles. Igual acontece con el precio de los medicamentos, libros, revistas, papel-prensa, etcétera, y, finalmente, que el correcto tratamiento del coste de la insularidad —al menos en lo que respecta a Baleares— no deseamos que sea afrontado desde perspectivas subjetivas relacionadas con la justicia distributiva, en relación con otras regiones españolas o con otros juicios de valor, respetables

siempre, pero ajenos a esta cuestión. Más aún, el objetivo que pretendemos es el de lograr que se haga un estudio riguroso sobre el coste de insularidad, que no queremos que se pueda confundir con la finalidad de conseguir un más alto nivel de actividad económica balear a cualquier precio. De ahí la necesidad imperiosa de abandonar la tentación de propiciar proteccionismos e intervencionismos de rostro voluntarista como sustitutivos del libre mercado en el campo de la distribución y de la asignación de recursos.

En resumen, el contexto de un correcto tratamiento del coste de la insularidad, queremos que sobrenaden los imperativos de la competitividad y del libre mercado.

Estas son las líneas maestras que desde el archipiélago balear deseamos que presidan la confección del estudio sobre el costo de insularidad, en el que va a tratarse por separado lo relativo a cada archipiélago, e, incluso, como ha solicitado el senador señor Toledo, se fijará por separado el costo de insularidad de cada isla dentro de su respectivo archipiélago.

En este contexto, y en lo que a Baleares respecta, se podrá contar con los estudios llevados a cabo por el Consejo General Interinsular.

Expuestos estos antecedentes, y conocida por la Cámara la posición de los distintos grupos parlamentarios ante la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario de UCD solicito de SS. SS. el voto afirmativo.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la proposición no de ley que ha sido objeto de debate.

¿Votos a favor? (*Pausa.*)

Por asentimiento se acepta la proposición no de ley que ha sido debatida, y de su texto y de la aceptación por la Cámara se dará cuenta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento.

— DEL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE NECESIDAD DE UN ESTUDIO DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, EN RELACION CON LA CIUDAD DE CARTAGENA Y SU CAMPO

El señor PRESIDENTE: Concluirá esta parte de la sesión con la siguiente proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre necesi-

dad de un estudio de descentralización administrativa, en relación con la ciudad de Cartagena y su campo.

Yo supongo que SS. SS. están informados. Ya se ordenó por la Presidencia que se distribuyera a todos los señores senadores la rectificación que por escrito fecha de ayer se produjo en cuanto al punto 2 de la parte dispositiva de la proposición no de ley para que quedara redactado según el siguiente texto: «Una vez finalizado el estudio, el Gobierno, en la perspectiva de la reforma de la Administración periférica del Estado, adoptará las medidas adecuadas para que la prestación de los servicios se efectúe en Cartagena estableciendo las oficinas que sean necesarias para satisfacer la demanda evaluada en el citado estudio».

¿Turno a favor? (*Pausa.*) El senador Martínez Ovejero tiene la palabra por un tiempo máximo de veinte minutos.

El señor MARTINEZ OVEJERO: Señor Presidente, señoras y señores senadores, la proposición no de ley que tengo el honor de defender ante SS. SS. pretende que el Gobierno haga un estudio en profundidad del volumen de trabajo administrativo generado por los habitantes del municipio de Cartagena y su comarca en los órganos periféricos de la Administración central para después acometer, en los términos que dicho estudio aconseje, un proceso de descentralización administrativa acorde con las necesidades del pueblo cartagenero.

El norte de esta proposición no de ley está señalado por el artículo 103 de la Constitución que, como SS. SS. recordarán, contiene los principios en que debe basarse la actuación de la Administración pública: eficacia, descentralización y desconcentración, entre otros.

Se trata, sencillamente, de aplicar este principio constitucional con racionalidad, atendiendo a las necesidades reales de la población para resolver sus problemas administrativos con la mayor eficacia posible.

Somos conscientes de que esta proposición se debate en un momento de transición, en un momento en que esperamos haya una reforma profunda de la Administración.

Los principios constitucionales antes mencionados hay que insertarlos, primero, en el cambio, en el proceso de cambio de un Estado centralista a un Estado autonómico, y también somos conscientes, de alguna manera, de que este cambio de

la Administración ya ha sido empezado y acelerado a raíz fundamentalmente de los acuerdos firmados entre el Gobierno y mi partido. Los acuerdos recientemente firmados en julio han modificado algunas de las cuestiones que tenía previstas esta proposición no de ley, y de ahí la modificación a que antes ha hecho referencia el señor Presidente.

Creemos que precisamente debido a que en estos momentos de tránsito vamos a cambiar la Administración central, debido precisamente a que en estos momentos de transición hay que recoger todas las variables posibles sobre este tema, es pertinente el debate de esta proposición no de ley para dar cabida dentro de este cambio, de esta transición, a las reivindicaciones y a las aspiraciones de un pueblo que en este aspecto no pide más que la Administración esté más cerca para resolver mejor sus problemas.

Esta proposición está suscrita por el Grupo Socialista del Senado, pero yo diría sin afán electoralista que su fondo está avalado por la mayoría del pueblo de Cartagena. Por tanto, desde esta tribuna hablo en este momento como socialista, pero hablo fundamentalmente como cartagenero que intenta traducir al lenguaje parlamentario las aspiraciones y las reivindicaciones de su pueblo, pueblo al que históricamente hay que hacer justicia.

Desgraciadamente, el «¡Viva Cartagena!» ha venido a convertirse en el sinónimo político de la irracionalidad cuando de divisiones administrativas o territoriales se habla.

Me toca, pues, quizá desfacer el entuerto y tratar de demostrar a SS. SS. que existe en la conciencia del pueblo de Cartagena una sensación de marginación, de olvido, de agravio permanente, que le estimula a una defensa constante de su entidad y su patrimonio.

Yo voy a referir a SS. SS. un hecho concreto. Hace poco, una de tantas decisiones administrativas ha venido a terminar con una delegación establecida en Cartagena hace más de cien años, cual era el Banco de España. Pues bien, señorías, siendo una delegación que no estaba directamente relacionada con el trabajo de los ciudadanos, cuando se plantea su desaparición en Cartagena fueron recogidas más de 15.000 firmas (y Cartagena tiene una población de 170.000 habitantes) para que la sucursal del Banco de España no desapareciera de dicha ciudad.

Sus señorías se preguntarán cuáles son las razo-

nes por las que este pueblo defiende tanto su patrimonio. En principio, en el contexto de la región existe una clara entidad cartagenera, diferenciada tanto cultural y económica como socialmente, entidad que no siempre se comprende ni dentro ni fuera de la región, pero a esta entidad diferenciada se une una larga serie de reivindicaciones históricamente no satisfechas. No voy a hacer aquí un memorial de agravios, pero ya que de descentralización administrativa estamos hablando, no es la racionalidad ni mucho menos la que está presidiendo las reformas administrativas de los órganos periféricos de la Administración central.

No pretendo dar estadísticas, y menos a estas alturas de la sesión y del debate, pero voy a señalar algunas características que me parecen importantes.

La comarca de Cartagena tiene una población aproximada de 250.000 habitantes. Cartagena es el primer puerto del Mediterráneo, es la capital de la Zona Marítima y el tercer puerto peninsular en tonelaje; sin embargo, por paradójico que parezca, la Jefatura de Puertos y Costas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, está situada en Murcia.

La sierra de Cartagena es la tercera cuenca minera de la nación; sin embargo, por extraño que parezca, la Jefatura de Minas está en Murcia; consume tanta energía eléctrica como el resto de la región, lo que da indicios del potencial industrial, y, sin embargo, para dar de alta la instalación eléctrica de una casa hay que ir a la Delegación Provincial de Industria, a Murcia.

Para no cansar a SS. SS., no hablaremos de la Magistratura de Trabajo, del Instituto de Conciliación y Arbitraje, de la Inspección Técnica de Vehículos, que, con un parque como tiene el puerto de Cartagena mayoritario dentro de la región, hay que ir a Murcia, o, por tener el problema de ocupar, desgraciadamente, en el «ranking» nacional el status de ciudad más contaminada por contaminación atmosférica, sin embargo, el Laboratorio de Contaminación Industrial está situado en Alcantarilla.

Podríamos hablar del turismo y de que hay algo que, por los pactos autonómicos, no se va a ir de Cartagena, que es la Delegación de Hacienda, que esa sí se queda en Cartagena, porque se trata de cobrar. Podríamos señalar un largo etcétera, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Cartagena ha dirigido a los diversos Ministerios

encargados de estas cuestiones resolución de sus Plenos y permanentes pidiendo en una u otra forma la solución, obteniendo la mayoría de las veces el silencio por respuesta.

En Cartagena se suele decir, resumiendo, que no se llevan el puerto porque no tienen dónde echar el agua. Esa es la sensación que se tiene. Y no la podemos plantear desde esta tribuna como una cuestión localista o de rivalidad entre Murcia y Cartagena. El problema es más serio y profundo.

La cuestión que se plantea allí es la siguiente: a veces, los razonamientos del pueblo llano y sencillo, que no entiende que no se pueden descentralizar estos servicios, que parecen tan lógicos, son así de simples, pero también así de rotundos. La gente suele decir: «En Murcia están las Delegaciones Provinciales y los servicios porque es capital de provincia. Pidamos la provincialidad para Cartagena y su comarca y resolvamos todas las cuestiones de gobierno». Y es que el sentido de lo que Cartagena necesita va más allá del voto municipal emitido en abril de 1979, que ya de por sí es bastante característico.

El Ayuntamiento de Cartagena tiene una composición de nueve concejales del PSOE, ocho de UCD, siete del partido Cantonal y tres del PCAN. Y en una encuesta hecha por la Consejería de Interior del Consejo Regional, cuando se le pregunta a la gente en Cartagena si es partidaria de que Cartagena sea una provincia distinta de Murcia dentro de la región, la gente contesta: sí, el 47 por ciento; no, el 24 por ciento; 22 por ciento, indiferentes; no saben, no contestan, el 7 por ciento.

Pero cuando investigamos lo que habían votado cada una de las personas en las últimas elecciones municipales, las respuestas eran bastante más curiosas. El 48 por ciento de los votantes del PSOE había dicho sí; el 60 por ciento de los votantes de UCD habían dicho sí; el 25 por ciento de los votantes del PC habían dicho sí, y el 80 por ciento de los votantes del PCAN habían dicho sí. No es, por tanto, ni una cuestión de partido ni una cuestión oportunista, ni que se quiera capitalizar por nadie el sentimiento que realmente está dentro del pueblo de Cartagena. Yo he manifestado al principio de mi intervención que no intervenía como socialista, y ustedes son conscientes, y los datos pueden variar en los porcentajes arriba o abajo, pero son conscientes de que entre el electorado de UCD hay también un enorme deseo de

descentralización del pueblo de Cartagena, porque este desear la provincia no es, ni más ni menos, que desear una solución real para todos y cada uno de estos problemas.

Pero no, señorías; no sólo vamos a hablar de reivindicaciones, sentimientos y aspiraciones. Vamos a hablar de los costos de los servicios en un doble sentido: costos para la Administración y para el ciudadano; para el ciudadano no sólo por lo que contribuye a la Administración sino por lo que, a veces, le cuesta usar estos servicios. Por eso creo que el esfuerzo que han supuesto los acuerdos económico-financieros, la filosofía que se desprende de esos acuerdos en el sentido de evaluación y definición del costo de los servicios a la hora de ser transferidos a las Comunidades Autónomas no hacen más que darme razón en la oportunidad y la conveniencia del estudio previo, propuesto como primer punto de esta proposición. Por ejemplo, en el punto 5.º de estos acuerdos económico-financieros se hace referencia a que las Comunidades Autónomas podrán transferir la gestión de determinados servicios a las entidades locales cuyo ámbito jurisdiccional resulte más próximo al ámbito geográfico para el cual los costos de servicio por habitante sean mínimos. Y esto es un acuerdo tomado por el partido del Gobierno y por el primer partido de la oposición. Y cuando se habla de evaluación de los costos se habla de evaluación de los costos del servicio por habitante, se habla de racionalidad en la prestación de los servicios de la Administración. Por lo tanto, no puede por menos de verse que la proposición que estoy presentando antes SS. SS. es realmente atinada y se inscribe como un instrumento para vehicular en un caso concreto estos acuerdos y no supone, como alguien ha dicho por ahí, una injerencia de las Cortes Generales dentro de las Comunidades Autónomas.

Nosotros estamos pidiendo el estudio en la Administración periférica del Estado, y al Consejo Regional de Murcia y a la Comunidad Autónoma, cuando se apruebe el Estatuto, les corresponderá su parte de descentralización, como ya en una parte, quizá no tanto como debiera, está haciendo; pero realmente son temas distintos.

Y hay otra razón fundamental por la que yo pido a SS. SS. que aprueben este estudio, y es que no puede hacerse desde fuera de la Administración. Incluso yo, cuando era consejero de Interior del Ente Preautonómico, el Consejo General de Murcia, intenté hacer este trabajo y me encontré

con enormes resistencias de la propia Administración periférica para que nadie ajeno a esta Administración pudiera tomar datos o pudiera hacer cualquier investigación en este sentido.

Por tanto, porque la Administración es la responsable, por el principio que antes el senador Villar Arregui hablaba de la capacidad autonómica y autoorganizativa, es necesario que la propia Administración se dé a sí misma el estudio.

Al principio de mi intervención he señalado que se había tramitado una modificación del punto 2.º de la proposición a tenor de los acuerdos autonómicos. La antigua redacción que estaba en la proposición no de ley decía que «una vez finalizado este estudio, el Gobierno, mediante las correspondientes disposiciones legales, deberá crear aquellas delegaciones o subdelegaciones ministeriales que sean necesarias».

Todos sabemos que, según el anteproyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, en su artículo 30, apartado c), habla precisamente de que «en el futuro se suprimirán todas las delegaciones ministeriales y se agruparán los servicios que deban subsistir bajo la autoridad del gobernador civil, que será el único delegado de la Administración del Estado en esta provincial».

De ahí que para que no haya ninguna distorsión de los acuerdos autonómicos establecidos hace dos meses por los distintos partidos se dice que «una vez finalizado el estudio, el Gobierno, en la perspectiva de la reforma de la Administración periférica del Estado, adoptará las medidas adecuadas para que la prestación de los servicios se efectúe en Cartagena, estableciendo las oficinas que sean necesarias para satisfacer la demanda evaluada en el citado estudio».

Señorías, resumo mi proposición porque pueden ustedes dar satisfacción a una parte importante de las aspiraciones de un pueblo; porque con este estudio se inicia una andadura que empieza en el principio constitucional del artículo 103, sigue en los acuerdos autonómicos, y seguirá sobre todo cuando se lleve a la práctica todo el proceso de transferencia de competencias en ellos anunciado; porque realmente es un deseo, no del Grupo Socialista, no del electorado socialista, sino de todo el electorado o de una buena parte del electorado del pueblo de Cartagena. Por ello, yo les pido a ustedes, señorías, el voto favorable para esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

El senador Villodres, por el grupo de UCD, tiene la palabra.

El señor VILLODRES GARCIA: Señor Presidente, señorías, las medidas que se interesan en esta proposición no de ley del Grupo Socialista en orden a la elaboración y aplicación en el plazo de un año de un amplio programa de desconcentración de servicios del Estado en la ciudad de Cartagena, ofrece, a juicio de nuestro grupo parlamentario, algunos inconvenientes.

Primero, la coincidencia temporal de dicho programa con el proceso, actualmente en marcha, de instauración del Estado de las autonomías. Dada la amplitud y profundidad de la reforma administrativa que debe seguirse del mencionado proceso constitucional, no parece adecuado el adoptar iniciativas individuales en cuestiones que, sin duda, han de ser afectadas por la definitiva constitución de la Comunidad Autónoma de Murcia, en cuya organización interna ha de tenerse en cuenta, sin duda, la especial personalidad de la ciudad de Cartagena y de su campo.

Y un segundo inconveniente es el breve plazo de esta realización del programa de desconcentración que podría llevarnos a soluciones precipitadas y poco meditadas. Actualmente la ciudad de Cartagena cuenta con un conjunto de servicios desconcentrados bastante adecuados a sus características y necesidades. Pero, por otro lado, el mismo funcionamiento de los servicios provinciales, aún los no desconcentrados, se han tenido que adaptar a la importancia de esta ciudad. Esto explica que se haya producido una progresiva y ponderada adaptación de los servicios del Estado a la particular problemática de la comarca.

Se dice en la proposición no de ley: sabido es que, con justicia, Cartagena se ha sentido postergada y olvidada por parte de la Administración durante mucho tiempo.

Con toda brevedad quiero relacionar por Ministerios algunos de los servicios estatales que existen en Cartagena.

Por ejemplo, en Asuntos Exteriores, cuatro consulados, cinco viceconsulados y dos agencias consulares. En Justicia, dos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, además de los de Distrito. Magistratura de Trabajo no existe; pero la Magistratura de Trabajo de Murcia se desplaza semanalmente para celebrar los juicios en Cartagena.

En Defensa, la Capitanía General de la Zona Marítima del Mediterráneo; el Gobierno Militar de la Plaza de Cartagena. En Hacienda, la Delegación de Hacienda de Cartagena, con jurisdicción plena sobre municipios de Cartagena, La Unión y Fuente del Alamo.

En cuanto a la oficina del Banco de España, ese no es un caso aislado de Cartagena, sino que es un caso generalmente aceptado de política financiera; y así ha ocurrido, por ejemplo, en mi propio pueblo hace unos días, en Antequera.

En Interior, Comisaría del Cuerpo Superior de Policía, Compañía de la Policía Nacional y Compañía de la Guardia Civil. En Obras Públicas y Urbanismo, la sede la Presidencia y Dirección de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que es un organismo autónomo que afecta a las tres provincias: Albacete, Alicante y Murcia, con cabecera en Cartagena. La Junta del Puerto. En Educación y Ciencia, Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, Escuela de Ingeniería Técnica e Industrial, Ingeniería Técnica minera, Institutos de Bachillerato, Instituto Politécnico, Centro de Formación Profesional y la Inspección de E. G. B. En Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, Sección de Trabajos Portuarios, Centro Comarcal de Higiene, Servicio de Sanidad Exterior, Residencia Sanitaria de la Seguridad Social, Delegación Provincial del Instituto Social de la Marina. En Industria y Energía, Subdelegación provincial de Industria. En Agricultura, Oficina Comarcal del IRYDA. Además, dentro de Agricultura, hemos de destacar la importancia que ha tenido para esta comarca el trasvase Tajo-Segura en una comarca del orden de 30.000 hectáreas de regadío. En Economía y Comercio, el Servicio Oficial de Inspección y Vigilancia del comercio exterior. En Transporte, Turismo y Comunicaciones, la Oficina de Turismo con el apoyo del Estado. En Cultura, la Delegación de Deportes, de Música, el Museo Arqueológico y la Casa de la Cultura,

Pero, además de estos servicios, existe el despacho periódico del gobernador civil de la provincia, una vez al mes, por lo menos, en Cartagena, acompañado de los distintos delegados ministeriales.

Consideramos que, a tenor de las necesidades que han ido apareciendo, existe un acercamiento de la Administración del Estado a Cartagena. Y algunos servicios específicos derivados de su carácter militar, marítimo, industrial, tienen su

sede o cabecera en aquella ciudad. Esto es, que no existe una aplicación rigurosa del estricto criterio provincial, como dice la proposición no de ley.

El Gobierno va a seguir en esta línea con tendencia descentralizadora ya apreciada, pero no de una forma genérica o indiscriminada, sino analizando caso por caso, algunos con mucha razón, a los que se ha referido el senador que me ha precedido en el uso de la palabra, pero con dos matizaciones: con total respeto a la autonomía murciana y con el protagonismo que tiene que tener en esta materia el Consejo Regional de Murcia.

Para terminar, creo que en política es muy importante tener memoria, y yo recuerdo una proposición no de ley socialista aprobada con los votos de toda esta Cámara. En esa proposición no de ley aprobada en esta Cámara, que está en el «Diario de Sesiones», dice que el Gobierno se abstenga de legislar por decreto en cuestiones internas de las Comunidades Autónomas. Nada más y muchas gracias.

El señor LABORDA MARTIN: Pido la palabra.

El señor PRESIDENTE: ¿A qué efectos ha pedido la palabra el senador Laborda?

El señor LABORDA MARTIN: A efectos de una cuestión de orden.

El señor PRESIDENTE: Diga cuál es.

El señor LABORDA MARTIN: Tengo que remontarme al problema de que al no tener posibilidad de intervenir ahora, nosotros quisiéramos, a la vista de la oferta o de la consideración que el señor Villodres...

El señor PRESIDENTE: Señor Laborda, sabe perfectamente que esta Presidencia si en algún objetivo tiene puesta su particular atención es en el Reglamento de la Cámara. Por favor, señoría, lea el Reglamento, póngase en el trámite de rectificación y la Presidencia estará encantada en concederle la palabra...

El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente...

El señor PRESIDENTE: Señor Laborda, siéntese; no cabe turno de rectificación. Lo sabe per-

fectamente S. S. Entrégueme el nuevo Reglamento y habrá turno de rectificación.

El señor LABORDA MARTIN: No es turno de rectificación, es ofrecer al Grupo Parlamentario de UCD la ampliación en el plazo razonable del estudio, puesto que parece que es una de las objeciones.

El señor PRESIDENTE: Pero no parece que sea esa la sola objeción.

El señor VILLODRES GARCIA: Creo que es impropio esta intervención en estos momentos.

El señor LABORDA MARTIN: Quiero manifestar que el señor Villodres no tiene el patrimonio de la interpretación del Reglamento, que le corresponde al señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Laborda, la interpretación del Reglamento es patrimonio y potestad de la Presidencia. El señor Laborda, con su fina perspicacia, ha intentado reducir la interpretación del Reglamento a la posibilidad de convergencia en el trámite. Naturalmente, yo ya sabía que no era ésa la posición del señor Villodres, porque le he escuchado. Siéntese, señor Laborda.

Se somete a votación la aceptación o el rechazo de la proposición no de ley del Grupo Socialista, que ha sido debatida.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 38 votos a favor; 52 en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda, pues, rechazada la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre la necesidad de un estudio de descentralización administrativa, en relación con la ciudad de Cartagena y su campo.

Señorías, me permito darles cuenta de cómo se desarrollará la parte final de este Pleno, que tendrá lugar mañana por la mañana, a partir de las diez. En primer lugar, completaremos el punto séptimo del orden del día con la proposición no de ley del Grupo Socialista Andaluz, que aún resta.

Seguidamente, serán del conocimiento del Pleno las conclusiones que nos han presentado los señores portavoces a propósito de los trabajos de la Comisión especial sobre los problemas de la emigración, en particular referidos a los vendedores en esta campaña.

Y luego, proseguirán las interpelaciones, advirtiéndole que se alterará su orden (ya lo conoce, por lo menos el interpelante señor Montero y también lo sabe el señor Cañada). En primer lugar se verá la del señor Cañada, y cerrará la del señor Montero.

Una necesidad surgida al Ministro de Agricultura, en relación con la visita del Ministro de Arabia Saudí de su Departamento, obliga a posponer para el final de la mañana esta interpelación. Bajo este orden, mañana continuará la sesión a las diez de la mañana.

Se suspende la sesión.

Eran las diez y veinte minutos de la noche.

Precio del ejemplar 50 ptas.
Venta de ejemplares:

SUCESORES DE RIVADENEYRA, S. A.

Cuesta de San Vicente. 36

Teléfono 247-23-00. Madrid (8)

Depósito legal: M. 12.580 · 1961

Imprime: RIVADENEYRA, S. A. MADRID